

Noveno Informe Anual de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro

Noviembre 2003 - Octubre 2004



LIBRO III
SOBRE LAS ACTUACIONES REFERIDAS A DERECHOS DE COLECTIVOS

Indice del Libro III

LIBRO III

SOBRE LAS ACTUACIONES REFERIDAS A DERECHOS DE COLECTIVOS

CAPITULO I TERCERA EDAD

- A** Pensiones Asistenciales Nacionales, Provinciales y Graciables
- B** Sistema Previsional
- C** PAMI
- D** Geriátricos

CAPITULO II DISCAPACIDAD

- Certificaciones
- Pase Libre de Transporte
- Acompañante Terapeutico
- Excensiones Impositivas
- Trabajo
- Otros

CAPITULO III MIGRACIONES y OTROS DOCUMENTOS

CAPITULO IV AREA MUJER

- Introducción
- Discriminación
- Violencia sexual

CAPITULO V NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

- Maltrato Infantil
- Trabajo infantil
- jovenes en conflicto
- Contencion a jovenes
- otros derechos



Libro III - Informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro



LIBRO III

SOBRE LAS ACTUACIONES REFERIDAS A DERECHOS DE COLECTIVOS

Capítulo I

TERCERA EDAD

○ PENSIONES ASISTENCIALES NACIONALES

El crecimiento de reclamos recibidos sobre trámites de Pensiones Asistenciales Nacionales fue notable en este ejercicio.

Se recibieron 130 presentaciones que dieron lugar a la conformación de expedientes y, se trabajaron a su vez numerosas consultas a través de la vía informal. Estas provinieron de la atención diaria de público o de llamados telefónicos.

En este incremento inciden como factores, aquellos que señalamos el año próximo pasado, tales como un mayor desarrollo y presencia del programa de Pensiones Asistenciales en la Provincia como efecto directo de la descentralización de la Comisión Nacional de Pensiones en tres Centros, como así también el trabajo realizado a través del Tren Sanitario que recorrió el interior de la provincia con equipos interdisciplinarios que se constituyeron en distintos puntos, relevando datos de trámites demorados, armando legajos, etc.

Se suman también:

- a) El hecho de que las Pensiones Asistenciales que otorga la Nación constituyen un aporte válido para todo un sector de la sociedad que le toca padecer la indigencia en un marco de situación especial cual es la incapacidad, la maternidad numerosa ó la vejez.
- b) La ausencia en la Provincia de Río Negro de programas de asistencia económica de similar característica para estos grupos sociales, a excepción de la Pensión Provincial por Vejez.

Con respecto a esta ayuda, debemos señalar que, el importe establecido de 38,00 \$ mensuales como así, las históricas demoras e imprevisibilidad de sus pagos, desalientan toda aspiración de acceso.

- c) La exclusión del Sistema de Seguridad Social Nacional, de un número cada vez mayor de personas que no logran acceder a la jubilación porque no reúnen la cantidad de años de aportes previsionales que se exige.

Bajo las consideraciones antes manifestadas, fuimos participando activamente en esta temática, intentando apoyar, articular, defender, en fin, colaborar en todo aquello que se plantee necesario para plasmar en nuestros conciudadanos, alcanzados por el perfil

establecido del programa, el acceso a la gestión de este recurso como así a la debida respuesta.

Con ese espíritu, prestamos especial atención a los Centros de Atención Personalizada, porque constituyen una herramienta fundamental para acercar este recurso a la necesidad.

Intercedimos ante la Nación y ante las autoridades de la Provincia en pos de su protección ante todo indicio de cierre y/o debilitamiento de recursos que limitaba el funcionamiento, tal como se dio a fines del año próximo pasado con el ubicado en Viedma.

Al respecto se iniciaron actuaciones de Oficio ante el conocimiento del virtual estado de desmantelamiento que se había producido. Se emitió la Resolución Nro. 5-04 "DPRN" (1) poniendo en conocimiento al señor Gobernador, al señor Presidente de la Legislatura y al señor Ministro de Familia.

Se recibe sólo una respuesta. Esta proviene de la Subsecretaria de Promoción Familiar y se manifestaba. "Al respecto le informamos que no es posible dar cumplimiento a lo requerido toda vez que el Centro de Atención Personalizada de Viedma depende de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales."

Dado los numerosos reclamos que fueron ingresando, provenientes éstos de ciudadanos que estaban siendo afectados por mantenerse el estado de situación informado, se emite una segunda Resolución, la que lleva el Nro. 680/04 (2) mediante la cual se derivan las actuaciones a la Presidencia de la Comisión Nacional de Pensiones y se pone en conocimiento de ello al señor Ministro de Familia.

La situación institucional, objeto de las citadas iniciativas se fue normalizando, no obstante se mantienen las actuaciones abiertas a la espera de que se responda sobre el estado de gestión de aquellos trámites que quedaron demorados en Viedma por las razones expuestas. Finalizando este trimestre se emitió nota a la Presidencia de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dando cuenta de esta situación.

Las históricas demoras en los trámites de Pensiones Asistenciales, formó parte de las características de este Programa. El tratamiento de los reclamos, permitió focalizar dos niveles de intervención donde habitualmente se producía la virtual paralización de estas gestiones, a saber: Áreas Sociales Municipales y sede Central de la Comisión Nacional.

Las primeras van superando progresivamente esta disfunción.

Por su parte la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales nos comunica en nota de Julio/04 que emprendió un Operativo a partir del citado mes y que tiene como meta dar resolución a la totalidad de los expedientes demorados.

Agrega la nota que " ..como consecuencia de que la variable presupuestaria no se incrementara

en la medida del aumento de la población con necesidades básicas insatisfechas, ocasionó que la sede central posea a la fecha de inicio del operativo un cúmulo de 73.000 expedientes iniciados sin resolución..." y agrega que "... a partir del dictado del Decreto 583 se incorporó a la Ley de Presupuesto General un artículo exceptuando de las limitaciones indicadas en el segundo párrafo de la presente a las Pensiones No Contributivas a la vejez.

Concluimos en que fue un año de muy buenos resultados. Rescatamos como válido que la incompetencia ante organismos nacionales y municipales no es obstáculo para intervenir en cuestiones que afectan a nuestra ciudadanía y comprobamos que la articulación y la colaboración son instrumentos valiosos para construir y mejorar las prestaciones del Estado.

Nuestro trabajo fue posible por:

*La cada vez mejor disposición de los municipios, que a través de sus áreas sociales, informan, diligencian y nos contestan, dándonos así la oportunidad de avanzar en el tratamiento de una situación planteada.

*Los Centros de Atención Personalizada, en especial los ubicados en Gral. Roca y San Carlos de Bariloche quienes colaboran diligentemente con cuanta demanda haga esta Defensoría.

*La invalorable disposición de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Pensiones a evacuar diligentemente nuestros reclamos, quienes a su vez son receptores de nuestros planteos como así de las demandas y necesidades de nuestra gente.

*La permanente colaboración de la delegación del ANSeS de Viedma que nos permite el acceso a consultas al sistema informático, y detectar así el estado de situación de cada trámite que se reclama y por ende dirigir nuestras intervenciones en forma más efectiva y dinámica.

Sin lugar a dudas el protagonista, el movilizador de la puesta en marcha de todo el andamiaje, fue el Ciudadano quien ya no acepta pasivamente la falta de respuestas a sus trámites y que hace uso del ejercicio de defender sus derechos.

1) RESOLUCIÓN N° 05/04 "DPRN"

VISTO: El Expediente N° 3.978/03, caratulado "DE OFICIO, S/ Desmantelamiento del Centro de Atención Personalizada de la Comisión Nacional de Pensiones, de la ciudad de Viedma" y

CONSIDERANDO:

I

Que a fs. 01 obra acta interna de esta Defensoría del Pueblo, la que textualmente expresa:

"Señora Defensora del Pueblo:

Por la presente pongo en su conocimiento la grave situación institucional que afecta al Centro de

Atención Personalizada de la ciudad de Viedma.

Dicho Centro constituye una herramienta clave para la descentralización operativa de la Comisión Nacional de Pensiones. Desde su creación ha realizado una tarea altamente calificada en materia de su función.

Nuestro trabajo en la temática Pensiones Asistenciales nos impone estar en contacto con todos los actores en el tema, esto es la gente, los municipios, los CAP y la Comisión Nacional (nivel central). Tal ubicación nos habilita a sostener la importancia de mantener en funcionamiento el CAP Viedma, en las condiciones que corresponden para el desempeño de su función.

Dicho CAP quedó desde hace más de un año sin Delegado/a. Funcionó desde entonces con una Asistente Social, que además de sus tareas propias, reemplazaba de hecho a la figura del Delegado. La acompañaba una empleada administrativa.

Hoy está sin la Asistente Social y sin la computadora que había cedido la Secretaría de Estado de Acción Social de la Provincia, en razón de que ésta estaba bajo la custodia patrimonial de la profesional por cuanto la misma provenía de dicho organismo.

De manera tal que este Centro está virtualmente desmantelado y sólo permanece la empleada administrativa sometida a múltiples presiones y demandas que por razones obvias no puede responder.

Esta realidad afecta seriamente a toda la ciudadanía, en eventuales condiciones de acceder al Programa, que desean iniciar los trámites correspondientes y/o a los que ya lo tienen iniciado, de las siguientes comunidades: Viedma, C. de Patagones, Valcheta, Sierra Grande, San Antonio Oeste, Río Colorado, General Conesa, Guardia Mitre y San Javier".

II

Históricamente la ejecución del Programa de Pensiones Asistenciales se desarrolló en la provincia a través de los municipios con la intermediación de las áreas sociales de la provincia. Esta modalidad opacó los objetivos de tan valioso Programa, debido a las dificultades operativas insalvables que presentaba la articulación Nación - Provincia - Municipio, en toda la fase de gestión del beneficio y, a las dificultades propias del desarrollo de un Programa Nacional, centralizado, en una provincia que se caracteriza por su extensión territorial.

Esta Defensoría del Pueblo desde su constitución, ha sido receptora de numerosos reclamos referidos al Programa de Pensiones Asistenciales. En el tratamiento de los mismos se detectaron trámites con demoras de cinco, siete, y más años, en su mayoría en las Áreas Sociales Municipales y que estaban con la documentación ya vencida. Otros, no pudieron ser localizados dentro de la trama intersectorial ya descripta. Esto no permitió que el ciudadano recibiera al menos una respuesta, sobre la solicitud de Pensión que oportunamente había formulado.

El efecto visible de esta realidad fue: ancianos - jefas de familia numerosa y/o discapacitados, que sumaron a sus padeceres de pobreza, la frustración, la espera en años sin respuesta, eternizando así la esperanza de que algún día les llegue la pensión que habían solicitado.

La descentralización del Programa de Pensiones Asistenciales en cuatro Centros, significó un avance reparador al estado de situación imperante y se ganó en tiempo, eficiencia, dinámica y, por sobre todo, contribuyó al respeto y a la consideración que todo ciudadano, que padece de necesidades básicas insatisfechas, merece especialmente.

Frente a la notable evolución que produjo dicha descentralización, aparece como contrapartida el cierre producido en el año/02, del Centro de Atención Personalizada de Cipolletti que cubría una vasta zona y el riesgo de similar medida con el ubicado en General Roca.

El estado de situación social que se vive en la actualidad impone como necesario cortar las distancias entre recursos y necesidades, avanzar en estrategias de



gestión que sumen eficiencia y eficacia a las tramitaciones y, por sobre todo no agregar más descrédito y desesperanza a la población.

Al respecto es necesario puntualizar que la Pensión Asistencial por Edad Avanzada, constituye para una gran cantidad de Adultos Mayores, la única posibilidad de contar con un ingreso para sostener su subsistencia, en razón de que no tienen posibilidad alguna de acceso a una jubilación. Excluidos del Sistema Seguridad Social de la Nación, se encuentran de pronto ante la triste realidad de que los años de trabajo no se traducen en un beneficio previsional y, que el Programa Nacional de Inclusión Social, no los abarcó.

III

Que siendo facultad de la Defensora del Pueblo iniciar de oficio actuaciones conducentes a la investigación de reclamos que lleguen a su conocimiento y cuya solución depende de la actividad de organismos bajo la órbita de su competencia, corresponde avocarse al esclarecimiento del caso y correr traslado del mismo al Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, al Sr. Ministro de Familia y al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial (Art. 11 Ley 2.756).

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E:

PRIMERO: Promover de oficio la investigación sobre los hechos narrados a fs. 01 (art. 9 de la ley 2.756).-

SEGUNDO: Correr traslado al Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, al Sr. Ministro de Familia y al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial (Arts. 9 y 11 inc a) de la ley 2.756).-

TERCERO: Regístrese, Comuníquese, Cumplido, Archívese.

MAG

RESOLUCION N° 05/04

2) RESOLUCIÓN N° 680.04"DPRN"

VIEDMA, 24 de Junio del 2004.-

VISTO Los expedientes Nros.4409/04 "DPRN", 4281/04"DPRN", 4298/04"DPRN", 4408/04"DPRN", 4493 "DPRN", 4585/04"DPRN", 4619/04"DPRN", 4623/04"DPRN" 4705/04 "DPRN" en los se tramitan reclamos presentados por ciudadanos de Viedma quienes manifiestan el perjuicio que ocasiona a sus trámites de Pensión Asistencial, la falta de un Asistente Social en el Centro de Atención Personalizada de la Comisión Nacional de Pensiones sito en Viedma, y

CONSIDERANDO:

I

Que a partir del mes de marzo del año en curso se comienza a recibir en esta Defensoría del Pueblo y casi a diario, presentaciones, consultas y quejas de vecinos de Viedma que se sienten afectados en sus derechos, por cuanto por razones de carácter institucional, sus trámites de Pensiones Asistenciales quedan inconclusos.

Explicitan en sus relatos que la falta de un profesional en Servicio Social, no permite que se dé cumplimiento a la Encuesta Social que forma parte de los requisitos y, que sus legajos en consecuencia, permanezcan demorados en dicho Centro. Así como también es de nuestro conocimiento que el centro de atención personalizada no cuenta con personal administrativo y que las funciones inherentes al mismo las estaría cumpliendo una persona que asiste dos veces por semana en carácter de colaboración.

II

Que al respecto, esta Defensora del Pueblo inició en el mes de Diciembre del año próximo pasado, actuaciones de oficio en oportunidad de haber tomado conocimiento que se había producido un virtual desmantelamiento de la delegación de pensiones de Viedma, las que se tramitaron por expediente Nro. 3978/03.

Que no obstante de generarse la situación antes informada dentro de un Programa Nacional y, que está bajo la órbita de un organismo Nacional, se realiza dicha intervención en la consideración de que quienes están siendo afectados, son ciudadanos rionegrinos (ancianos, discapacitados y mujeres madres de familia numerosa) que padecen los efectos de la pobreza y que por las razones expuestas no están siendo abarcados por el programa citado.

Que en la actuación referida, se dictó la Resolución Nro. 05/04 corriéndose traslado de la misma al señor Gobernador de la Provincia, al Sr. Ministro de Familia y al Sr. Presidente de la Legislatura Provincial.

Que como respuesta a nuestras presentaciones, se recibió sólo una nota. Esta lleva el número 073/04, provino del Ministerio de la Familia y, responde en su representación, la Subsecretaría de Promoción Familiar de la Provincia quien en lo substancial expresa:

"...Al respecto informamos que no es posible dar cumplimiento a lo requerido en la nota mencionada toda vez que el centro de atención personalizada no depende de este organismo. Cabe aclarar que dicho centro depende de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales sita en la calle Ituzaingó N° 669 de la ciudad de Viedma".

III

Que considerando como no satisfactoria la respuesta brindada por parte del citado Ministerio, atento a que el Centro de Atención Personalizada de Viedma de Pensiones Asistenciales lleva siete meses sin la prestación de servicios de un Asistente Social y, que los reclamos recibidos evidencian una acumulación de trámites con demoras significativas, corresponde derivar las presentes actuaciones a la señora Presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a fin de su conocimiento y efectos pertinentes.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Deriva las presentes actuaciones a la señora Presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, en un todo de acuerdo a lo manifestado en el Considerando III.

ARTICULO SEGUNDO: Poner en conocimiento de la presente resolución, al Sr. Ministro de Familia de la Provincia de Río Negro.

ARTICULO TERCERO: Incorporar las actuaciones citadas en la referencia al expediente Nro. 3978.03 y enviar copia de lo actuado a los ciudadanos promotores de las mismas.

ARTICULO CUARTO: Regístrese, Archívese.

MAG/MGC

RESOLUCIÓN N° 680.04 "DPRN"

PENSIONES PROVINCIALES

La provincia tiene instrumentado un Programa de Pensiones Provinciales que prevé el pago de \$ 38,00\$ a los adultos mayores sin recursos económicos a partir de los 65 años.

Este importe, que rige sin actualizar desde el dictado del Decreto 1224/84, no sólo constituye una suma irrisoria, sino que además se paga con atrasos considerables y de forma imprevisible.

Esta disfunción motivó reiteradas intervenciones de esta Defensoría del Pueblo por la vía informal como así través de la vía formal.

A fines del año próximo pasado dictamos la Resolución Nro. 1113.03 (3) en la que se Recomendó al señor Ministro de Familia de la Provincia que arbitre los medios necesarios para el efectivo pago mensual de las Pensiones Provinciales a la Vejez, como así mismo que se mantenga un cronograma de estos pagos, dándose la debida comunicación a los destinatarios sobre las fechas establecidas.

Se realizaron los pagos adeudados pero, inmediatamente se entró nuevamente en mora en los sucesivos meses, situación ésta que motivó que 40 (cuarenta) ciudadanos de Cipolletti, beneficiarios del programa, presentaran un reclamo ante esta Defensoría. Estos pensionados se quejaban además, por el bajo importe de la pensión. Se emitió la Resol. Nro. 226.04 (4) en la que se corrió traslado del reclamo al señor Ministro de Familia y se le notificó sobre el cumplimiento parcial de la Recomendación formulada en la resolución antes citada.

Acercándonos a la finalización del año, la provincia mantenía impagas estas pensiones desde el mes de abril - mayo (según el lugar) y el reclamo por el respeto a la dignidad se antepuso a la necesidad de cobro.

Palpamos en esos rostros marcados por los años, cuanto lastima el maltrato, la indiferencia y el "venga la semana que viene" de todas las semanas. Son mayores de 70 años y caminan desde sus barrios a las oficinas de asistencia social.

Exhortamos por nota Nro. 4692.04 (5) al Sr. Ministro de Familia a prestar su más decidida intervención a los fines de solucionar con urgencia la irregularidad en que se viene incurriendo en el pago de las Pensiones Provinciales, las que se adeudan desde el mes de mayo a octubre.

Finalizando el año, hemos tomado conocimiento que se está cancelando la deuda de estas pensiones.

Al respecto debemos destacar como muy auspicioso, el avanzado estado de tratamiento de la iniciativa legislativa que prevé modificaciones importantes a la Ley 31/58 en cuanto a que establece un incremento, define un cronograma de pagos, así como otras medidas destinadas a contener, asistir y promocionar al adulto mayor.

RESOLUCIÓN N° 1113/03

VISTO: Los Expedientes Nros.: 2.850/03 , - 3059/03 - S/ reclamo cobro de Pensión Pcial. a la Vejez" y Otros, y
CONSIDERANDO:

I

Que en las actuaciones citadas en el epígrafe, se presentan distintos ciudadanos a reclamar ante esta Defensoría del Pueblo, por el pago de la Pensión Asistencial por Vejez que les fuera otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro.

En la actuación Nro. 3059/03 la reclamante manifiesta que "hace aproximadamente seis (6) meses que los abuelos deberían estar cobrando la Pensión Asistencial por Vejez que les otorgó oportunamente el Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Río Negro", cuyo monto es de \$38 mensuales.

Que estas demoras son habituales, se les paga uno, dos meses, se les queda adeudando cuatro, cinco y luego, por meses, no se les realiza pago alguno. Que su padre tiene 84 años es beneficiario de la pensión, padece de una hemiplejía como consecuencia de un ataque de presión.

II

Que los testimonios realizados por los reclamantes o de quienes los formulan por ellos, permite observar que la población beneficiaria de estas Pensiones Provinciales se caracteriza por la indigencia. Es decir, está compuesta por hombres y mujeres ancianos, en su mayoría con padecimientos físicos propios de la edad y de las condiciones de vida, con dificultades para acceder al alimento y demás insumos para satisfacer las necesidades de la vida diaria.

Que en las realidades de estos ancianos, convergen la pobreza, la vejez, la falta de salud y el dolor de estar excluidos del Sistema de Seguridad Social, porque la vida de trabajo no se trajo en jubilación.

Que las Pensiones Asistenciales a la Vejez implementadas por la Provincia para su atención, no está cumpliendo con el objetivo que entendemos se persiguió en su implementación, por dos razones: el exiguo monto asignado a dichas pensiones y las demoras con que se producen estos pagos.

Que con respecto a esto último, corresponde señalar que, al no mantenerse un cronograma, ni darse previsión alguna sobre las fechas en que los mismos se realizarán, obliga a los ancianos a concurrir en reiteradas oportunidades a las oficinas de pago, en busca de información al respecto. Situación ésta que se hace más crítica en los ancianos que viven en las zonas rurales de la Línea Sur.

Sobre el particular, esta Defensoría del Pueblo ha recibido quejas en años anteriores y, las investigaciones realizadas oportunamente permitió conocer las dificultades que generaba la falta de regularidad en los pagos de las Pensiones Provinciales. Los beneficiarios antes citados, deben recorrer distancias muy importantes y en condiciones muy precarias, para conocer las fechas de pago.

Que las intervenciones realizadas al respecto permitió atenuar algunos de los efectos descriptos, no obstante ello, continúa sin modificarse la cuestión de fondo, objeto de los reclamos que se tramitan en las presentes actuaciones.

Que lo aquí expresado, hace necesario RECOMENDAR al señor Ministro de Salud y Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, que arbitre los medios necesarios para el efectivo pago mensual de los \$ 38,00 (TREINTA y OCHO PESOS) a los beneficiarios de las Pensiones Provinciales a la Vejez, como así mismo se RECOMIENDA que se mantenga un cronograma de estos pagos, dándose la debida comunicación a los destinatarios sobre las fechas establecidas.

Por ello,



LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Notificar al señor Ministro de Salud y Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, las RECOMENDACIONES formuladas en el Considerando II.
SEGUNDO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido Archívese.

RESOLUCIÓN N° 1113/03 "D.P.R.N"

4) RESOLUCIÓN 226/04 "DPRN"

VIEDMA, 12 de marzo de 2004.-

VISTO: El expediente N° 3827.03 caratulado: "Beneficiarios del ProNono solicitan cancelación de lo adeudado y equiparación con las Pensiones Asistenciales Nacionales", y

CONSIDERANDO:

I

Que a Fs. 1 de las citadas actuaciones obra una presentación realizada por ciudadanos de Cipolletti, que expresa:

"Somos beneficiarios del PRONONO (Pensión Provincial) dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, de la Provincia de Río Negro, que percibimos un haber mensual de \$ 38,00, habiendo cobrado durante el mes de Agosto del corriente, el beneficio de Marzo/03".

Agregan: "...somos cuarenta pensionados que residimos en Cipolletti, la mayoría ancianos, otros discapacitados, que no tenemos ningún otro beneficio ni obra social".

Concluyen el reclamo peticionando que: "1) Se nos cancele lo adeudado. 2) Se nos otorgue un monto más digno, al menos equiparado a una Pensión Nacional por Vejez o discapacidad. (\$100 a \$ 120 aprox.)".

La presentación está rubricada por varias firmas y se adjunta a la misma una planilla con el listado de los beneficiarios, su número de documento y de legajo.

II

Que el atraso en el pago de las Pensiones Provinciales ha sido motivo de reiteradas intervenciones por parte de esta Defensoría del Pueblo, ya sea a través del dictado de resoluciones recomendando la regulación de estos pagos, o bien utilizando las vías informales de intervención ante las autoridades responsables, con igual objetivo.

Precisamente en el curso del año próximo pasado se conformaron las actuaciones Nros. 2.850.03 y 3059.03, en las que se tramitaron similar reclamo **que fuera presentado por ciudadanos de Viedma. En tal oportunidad, esta Defensora dictó la Resolución Nro. 1113/03 mediante la cual se RECOMENDÓ** *"al señor Ministro de Salud y Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, que arbitre los medios necesarios para el efectivo pago mensual de los \$38,00 (TREINTA y OCHO PESOS) a los beneficiarios de las Pensiones Provinciales a la Vejez, como así mismo que se mantenga un cronograma de estos pagos, dándose la debida comunicación a los destinatarios sobre las fechas establecidas.*

Que la respuesta brindada a dicha Recomendación por parte de la Subsecretaría de Asistencia y Promoción Familiar es parcial, dado que sólo informa sobre la situación puntual de los reclamantes, agregando que "se prevé en el corto plazo abonar las pensiones correspondientes a los meses de Julio y Agosto". No se hace referencia alguna a la fijación de un cronograma general en los pagos de las

Pensiones Provinciales, que contenga una regularidad en cuanto a la frecuencia y fechas en que se realizarán los mismos, hecho éste que afecta a los pensionados en su totalidad y, en especial a los que habitan en zonas rurales alejadas.

Que lamentablemente observamos que los resultados obtenidos en esta última intervención, no difiere de otros, en los que se dio solución a la situación puntual de mora denunciada, para luego incurrir en nuevos atrasos.

III

Que a su vez, el exiguo monto fijado en el haber de estas pensiones fue también motivo de señalamiento por parte de esta Defensora en los informes anuales ejercicio 2002 y 2003 como así también en oportunidad de pronunciar los informes In-Voce ante la Legislatura de Río Negro de dichos periodos.

Así también es necesario destacar que es de nuestro conocimiento que existieron iniciativas legislativas que propiciaban un pago más digno a estos pensionados, las que lamentablemente pasaron al archivo por extinción de los plazos para su tratamiento en Comisión.

Que corresponde resolver la avocación de la Defensora del Pueblo a la presente queja (Art. 17º - Ley 2.756) y correr traslado de la misma al Ministerio de la Familia para que se sirva contestar los aspectos del reclamo formulado por los recurrentes del epígrafe.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Avocarse a tratamiento del reclamo presentado a Fs.1 de las presentes actuaciones y correr traslado de las mismas al Señor Ministro de la Familia.

SEGUNDO: Agregar a las presentes, las actuaciones que se tramitan bajo Nro. 2850.03 y 3059.03 por tratarse de igual reclamo.

TERCERO: Informar al señor Ministro sobre el cumplimiento parcial de la RECOMENDACIÓN formulada en la Resolución Nro. 1113/03 que se dictara en el marco de los citados expedientes. (Art. 28 - Ley 2756.)

CUARTO: Notificar a los ciudadanos reclamantes sobre la presente.

QUINTO: Regístrese. Notifíquese. Cumplido. Archívese.

MAG/MGC

RESOLUCIÓN N° 226.04 "DPRN"

5) NOTA 4692.04"DPRN"

VIEDMA, 05 de noviembre de 2004.-

Al señor Ministro de la Familia
Dn. OSCAR IDOETA
SU DESPACHO.-

Señor Ministro:

Lo exhorto a prestar su más decidida intervención, a los fines de solucionar con urgencia la irregularidad en que se viene incurriendo en el pago de las pensiones provinciales, cuya deuda asciende a CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS, por el período mayo/octubre del año en curso, y que alcanza a 740 beneficiarios, incluidos los que cobran a través de las Comisiones de Fomento, por la suma de TREINTA Y OCHO PESOS MENSUALES CADA UNO.-



De investigaciones realizadas surgiría que la demora en la liquidación obedece a razones puramente administrativas, ya que la suma de dinero se encontraría lista para ser erogada, acto que no se perfecciona por FALTA DE RENDICIÓN de cuentas por parte de ese Ministerio de los beneficios abonados entre los años 2001/2003 y desde marzo del año 2004.

Los importes a transferir mensualmente rondan la suma de VEINTINUEVE MIL PESOS, aproximadamente.-

Reitero el pedido de su más absoluto compromiso, toda vez que no existe justificativo alguno que pueda superar el olvido y la indiferencia con que estamos tratando a estas personas, por una razón meramente burocrática, y además recibida información acerca de la presunta existencia de abultadas cajas con recibos no sistematizados y por lo tanto no elevados al Organismo contable correspondiente de la Provincia- hecho que estaría trabando las nuevas transferencias- , sería un desacierto la sola mención de que la responsabilidad recae en la gestión anterior, porque los hombres pasan pero las Instituciones siguen.-

En la esperanza de una rápida gestión, y por las facultades Constitucionales que se me han conferido, requiero de Ud., una respuesta en el plazo de cinco (5) días.-

Saludo a Ud., atentamente.-

N .de B.

Nota N° 4692. /04 "DPRN"

PENSIONES GRACIABLES

En el último trimestre del año se dio la particularidad de que fueran ingresando, en un número progresivo, reclamos provenientes de ciudadanos que tenían otorgada una Pensión Graciable por el Congreso de la Nación y que se quejaban por que el monto que perciben (\$97,00) no ha tenido modificación desde que le fuera otorgada la ayuda.

Fundamentan sus presentaciones además, en el hecho de que algunos de estos beneficiarios habrían recibido un aumento.

Consultada la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, se nos informó que efectivamente algunas Pensiones Graciales habían sido reajustadas en sus montos y que otras no. Que tal diferencia de temperamento se debe a criterios distintos adoptados en las sucesivas Leyes de Presupuesto del Congreso Nacional que otorgan estas pensiones cada año.

Razón por la cual se pondrá en conocimiento de estas presentaciones a los representantes legislativos de nuestra provincia ante el Congreso Nacional.

HISTORIA DE UN EXPEDIENTE PREVISIONAL

Inicio de trámite : ANSES

26 de agosto de 2002 recibí por correo Argentino resolución de servicio de 18 años, 7 meses, 7 días y se me notifica que me presente y rechace la resolución por los años que me dan; no son 18 años, 11 meses y 7 días. Me descuentan casi 2 años, la certificación

de servicios de la cooperativa fruti vinícola Allen Lta. Me dieron 20 años, 7 meses y 7 días, del ingreso 01/03/1978 , marzo del 200 menos un año, un mes ausente quedan 20 años, 7 meses y 7 días trabajando.

Me dieron turno para el 31 de octubre de 2002. se hizo una nota y me pidieron certificados originales e ingresos 01/03/1978 para atestiguar. Presente certificado original de ingresos 01/03/1978, recibo de sueldo original de insalubre resolución de EGI originales hasta agosto del 2001 de **ahí se perdió la carpeta.**

11 de mayo del 2004, entregue toda la documentación para la reconstrucción, se hizo una nota por entrega de documentos, copia que yo había entregado a ANSES.

31/07/2004 recibí por correo la reconstrucción 024 - 23 - 92.448.868 - 9 - 717 - - 1, está reconstruido pero no hicieron ningún calculo (quedaron igual que antes).

Hay que sacar turno por teléfono para hacer el reclamo de vuelta, y hay que presentar toda la documentación de nuevo otra vez. Ahora tengo turno el día 11 de noviembre del corriente año. Hago saber haber presentado la documentación.

Le saludo atentamente.

B- SISTEMA PREVISIONAL

Régimen de Capitalización

En el curso del año se iniciaron actuaciones por 35 reclamos sobre el Régimen de Capitalización. Mayoritariamente éstos estuvieron referidos a demoras y falta de información sobre trámites previsionales realizados a través de Administradoras. El tratamiento de los mismos nos permitió observar que el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, paradójicamente no logra integrarse en su funcionamiento y que las dificultades en la articulación entre las partes es un efecto corriente de esta realidad.

Transcurrido ya 11 años de la vigencia de este Régimen todo indicaría que los objetivos previsionales y la administración de fondos, no lograron conciliar sus intereses y confluir en la franja donde se encuentra el ciudadano con sus necesidades previsionales.

Precisamente él padece las consecuencias de esta realidad con demoras y dificultades adicionales que tiene el Sistema de Seguridad Social en sí.

Esto es:

*Una burocratización de los trámites previsionales puesto que las Administradoras se ubican como una instancia intermedia entre la ANSeS y el ciudadano y viceversa, por el solo hecho de la afiliación. Procedimiento éste que produce una dilación importante de todo requerimiento/cumplimentación.

Las Administradoras reciben la documentación pero, el trámite previsional en su totalidad, se realiza en ANSeS. Esta co-participación determina además a la hora de la gestión, que una parte deslinde responsabilidades en la otra y que el ciudadano deam-



bule desorientado entre una y otra tratando de obtener información.

*El cada vez más difícil acceso a las Administradoras toda vez que el ciudadano requiera de sus servicios a la hora de hacer sus trámites previsionales debido al cierre progresivo de las oficinas de atención y a su concentración en ciudades importantes. La atención directa es reemplazada por un 0800 sistema éste que lejos está de satisfacer las necesidades de los afiliados para el armado de la carpeta previsional.

Distantes del afiliado y meramente formales ante ANSeS, dejan al ciudadano, tan solo como su expediente previsional en las oficinas de la Gerencia de Capitalización de la ANSeS, el que frecuentemente termina en el Archivo Externo porque no se cumplimentó con la documentación que fuera solicitada.

Los "afiliados", los "ciudadanos" son hombres y mujeres en situación de vida frágil, que intentan un beneficio previsional porque son mayores ó por que la incapacidad limitó toda posibilidad de trabajo ó bien porque quedaron sin su par.

Ellos constituyen la población objetivo del sistema y razón de ser del sistema pero a su vez, los grandes ausentes a la hora de ordenar su funcionamiento.

Llegan a esta Defensoría en busca de protección, de defensa y, por razones obvias, la "incompetencia" no podría ser jamás la respuesta a brindar.

Frente a esta compleja realidad nos ubicamos como concientes que no podemos cambiar el sistema pero intentamos que el sistema funcione para quien reclamó ante esta Defensoría.

Apelamos a la articulación y al "carácter de colaboración" (Art. 12º - Ley 2756) como estrategias y herramientas fundamentales de trabajo y ponemos a diario importantes cuotas de perseverancia y omnipotencia.

Los resultados han sido muy positivos, los que se traducen en un número importante de trámites rescatados y de beneficios previsionales resueltos en poco tiempo.

Algunos decires nuestros

Acta de Hermenegildo Expte. 3327.03

Por la presente informo que de las últimas intervenciones realizadas ante la Gerencia de Capitalización de la ANSeS, hemos tomado conocimiento de que el beneficio previsional del señor Hermenegildo Rodríguez, fue Acordado.

El número de beneficio es: 1508891561-0-5

Innumerables acciones, sutiles y firmes intervenciones ante la Gerencia de Capitalización, se traducen en estas cuatro líneas.

Detrás nuestro, expectante y tratando de creer que esta Defensoría, se ocupaba de su tema estaba Hermenegildo Rodríguez quien contemplaba y esperaba.

Golpeado por el maltrato de su organismo empleador que lo arrojó a la calle porque se incapacitó. Desalentado por la indeferencia de su AFJP quien se toma el tiempo que él no tiene para tramitar el beneficio. Así llegó una mañana con más ganas de concluir con su vida que de intentar toda lucha por su beneficio.

Que difícil tarea la nuestra. Cómo reciclar la desesperanza en esperanza. Cómo sanar.

Que pesada carga. Corrimos en contra el tiempo y lo atamos a nuestra omnipotencia de que podemos y, lo llevamos de arrastra más de una vez.

Fue posible. En agosto empezará a cobrar. El expediente se cerrará pero afuera, quedó un señor con su jubilación.

Gracias a Gloria, compañera de equipo que tomó esta posta en más una oportunidad.

Expte. 2351.03

Acta Interna Informativa

Por la presente informo que luego de la comunicación telefónica mantenida con el delegado de ANSeS de San Antonio Oeste, sobre la situación previsional de una ciudadana, surge lo siguiente.

Que al estar la señora afiliada a una AFJP, tiene una nueva posibilidad de acceder a un beneficio previsional, del que se descontará todo lo percibido indebidamente "según ANSeS"

Al igual que el pescador Navarrete, que sólo sabe de "pesca y nada de papeles", teniendo una jubilación por Incapacidad, se le ocurrió ponerse a trabajar para poder aumentar el ingreso. Claro, es ilegal.

Desde que no le llegó más el "sueldito" deambula por las oficinas tratando de que alguien le explique qué pasó.

La pelea por la sobrevivencia desde pequeña, la dotó especialmente de una resistencia que les permite compensar toda pérdida de capacidad.

En el articulado de la ley, la resistencia y la necesidad, no tienen encuadre.

Enedina no engaña al sistema. Es realmente incapaz, basta verla, pero bueno no funciona como tal.

Le quitaron la jubilación y la sancionaron con una deuda importante pero como, no sabe ni leer ni escribir, ni se enteró lo que los abogados de ANSeS, dijeron de ella.

Así las cosas.



Junio del 2004.-

ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES

Si los trámites de beneficios previsionales tienen demoras y dificultades, el pago de las Asignaciones Familiares y Bonificaciones por Escolaridad se tornan incobrables para el ciudadano que está afiliado a un AFJP.

En estos reclamos aparece una franja importante de presentaciones realizadas por ciudadanos (en su mayoría mujeres) que tienen asignada una Pensión Derivada por fallecimiento de su esposo, el que se produjo cuando éste estaba aún en actividad.

Los importes de estas pensiones son muy pequeños, y tal como puede deducirse esta franja está compuesta por grupos familiares con hijos menores.

El estado de desprotección económica y la lucha diaria por la sobrevivencia, generan situaciones de padecimiento adicional que podría evitarse si se ajustaron los procedimientos administrativos al espíritu y objetivo de las normativas vigentes y por ende al estado de necesidad que las inspiró.

En el tratamiento de estas presentaciones, logramos los resultados esperados pero, en un tiempo que consideramos demasiado extenso para el estado de situación que padecen estas familias. Ello motivó que evaluáramos conveniente derivarlas al Defensor del Pueblo de la Nación por entender que, al ser competente, pueda aportar un mejor y más eficaz tratamiento a las mismas.

Así como dábamos cuenta de esta grave disfunción a las autoridades de la Nación y que informamos en el ejercicio anterior, continuamos este año realizando similar planteo pero, dirigidos al Defensor del Pueblo de la Nación, toda vez que un reclamo evidenciaba los efectos de esta realidad. **Nota Expte. 4369/04 (6)**

Señor
Defensor del Pueblo de la Nación
Dr. Eduardo MONDINO
Montevideo N° 1.244
(1018) CAPITAL FEDERAL

Ref.: Expediente N° 4369/04 "DPRN". s/ Pago de Asignaciones Familiares.

Me dirijo a usted a fin de derivar la presentación que realizara ante esta Defensoría, la ciudadana citada en la referencia.

La ciudadana, se domicilia en Carmen de Patagones (Pcia. de Bs. As) y en lo substancial expresa:

Que desde hace dos años aproximadamente, cobra una Pensión Derivada a través de la AFJP Consolidar, de quien en vida fuera su esposo.

Que desde entonces, se le adeudan las Asignaciones por Hijos y las Bonificaciones por Escolaridad que le correspondería percibir por sus hijos, a saber:

Asignaciones por Hijos

*María Angélica. Hoy con 19 años. Se le adeuda desde el fallecimiento de su padre hasta el 20 de febrero/04.

*Luis Alberto. DNI. 32.794.733.

*Jesús Orlando . DNI 33.368.788.

Bonificaciones por Escolaridad

*María Angélica. Concluyó el año próximo pasado la enseñanza secundaria.

*Luis Alberto . Se le adeuda hasta Junio/03 fecha en que abandonó sus estudios cuando cursaba 1º año en la Escuela de Oficios.

*Jesús Orlando l. Se le adeuda hasta julio/03 fecha en que abandonó cuando cursaba el 8º año del Polimodal.

Agrega la señora que desde que falleció su esposo, ella pasó a ser el único sostén de sus cuatro hijos. El mayor concluyó también la enseñanza secundaria pero que los dos hijos más chicos, debieron dejar la escuela porque no había dinero en la casa para pagar los costos de fotocopias, zapatillas, Etc., para todos.

Que esta decisión fue acordada entre sus hijos. Dadas las limitaciones económicas, se optó por apoyar a los dos mayores para que concluyan los estudios, ya que estaban más avanzados.

Entendimos necesario compartir con usted, esta realidad de Norma Salazar y de sus hijos, por cuanto es la que afecta a los derecho habientes con hijos menores a cargo y que obtienen sus beneficios a través del Sistema de Capitalización. No se incorporan en sus haberes, las Asignaciones y Bonificaciones establecidas por ley.

No hay respuestas para este incumplimiento. Las Administradores responsabilizan a la ANSeS. Esta por su parte, explica que son las Administradoras y, las/os ciudadanas/os peregrinan permanentemente entre una y otra buscando que alguien regularice la situación.

Señor Defensor, estas obligaciones que tienen carácter alimentario se están pagando con demoras de dos, tres y más años.

Desconocemos cuál es la complejidad del sistema, que impide su regularización y, desde nuestro lugar, tenemos serias dificultades para entender sobre qué razones superiores al estado de necesidad de estos ciudadanos, demoran la instrumentación de los mecanismos pertinentes a fin de que se paguen estas Asignaciones y Bonificaciones en tiempo y forma.

Mucho agradeceré su aporte al respecto. Quedando a vuestra disposición, le saludo con mi mayor respeto.

REGIMEN DE REPARTO

Se recibieron en el año 72 (setenta y dos) presentaciones que involucraban a la ANSeS.



En este crecimiento incide la situación dada con la Bonificación por Zona Austral en cuanto a su incorporación en el haber y al pago del retroactivo.

Al respecto se acompañó a la ciudadanía aportando instrucciones sobre los trámites a realizar como así, proveyendo copias de la ley Nro. 19.485 que establece su pago y, se intervino ante la ANSeS toda vez que se presentaran inconvenientes para que los ciudadanos puedan hacer sus presentaciones.

En tal caso vale citar la situación dada en Cipolletti. Una beneficiaria previsional realiza un reclamo por la vía telefónica dando cuenta que la delegación de ANSeS de esa ciudad se niega a tomar los reclamos de pago de la Zona Austral e instruye a las personas a que realicen estas presentaciones en la delegación de dicho organismo sita en General Roca.

Se actúa inmediatamente ante la Gerencia Regional de la Administración Nacional de Seguridad Nacional ubicada en Neuquén, cuyo responsable interviene diligentemente y como producto de su actuación, se revierte en forma casi inmediata la situación denunciada.

Otro motivo de intervención, estuvo dado a partir de presentaciones realizadas por ciudadanos domiciliados en la vecina ciudad de Carmen de Patagones, quienes reclamaban por el derecho al cobro de la bonificación en razón de que obtuvieron sus beneficios previsionales a través de la ex Caja de Previsión Social de la provincia de Río Negro.

Al respecto se aportó información poniendo en conocimiento el texto de la Ley 19.485 y se los orientó a que presentara sus inquietudes a las autoridades municipales de dicha ciudad.

Otro reclamo emparentado con esta temática se trabajó en las actuaciones Nro. 3259.04. El tratamiento del mismo dio lugar al dictado de la **Resolución 546.04**.

Resolución 546/04 "DPRN"

Viedma, 26 de mayo de 2004.-

VISTO el expediente N° 3259/03 "Pérez Juan de Dios S/ reclamo por descuentos en los haberes de su esposa", y

CONSIDERANDO:

I

Que a fs. A 1 hace su presentación el ciudadano citado en el epígrafe de la ciudad de Carmen de Patagones.

Que el ciudadano manifiesta que habiendo prestado servicios en la provincia de Río Negro, desde abril de 1998 no percibe el beneficio de asignación familiar por cónyuge previsto en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Que a fs. 6 consta respuesta de la UDAI Viedma del ANSES, en la que se lee:

"... Se le hace saber que la resolución 14/2002, vigente desde el 1° de noviembre de 2002, establece que las cuantías de las asignaciones familiares a que se refiere el artículo 8° del decreto N°1245/96, estará referida al lugar de residencia del titular. Los salarios pagados anteriores a la entrada en vigencia de la mencionada anteriormente se regían mediante las resoluciones 112/96, 16/97, 88/97 y 23/2000 reguladas por el mismo Decreto, establecían que los beneficiarios que

residan en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, percibirán el monto diferenciado establecido en el Artículo N° 8 del decreto N° 1245/96. En razón de lo mencionado anteriormente, se le hace saber que el beneficiario no estaría residiendo en la zona geográfica, para obtener el pago de la asignación por esposa con zona que asciende a \$30 mensuales".

II

Que la legislación imperante establece que los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que residan en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, percibirán un monto diferencial que estará referido al domicilio donde cobran sus haberes el que debe relacionarse con su lugar de residencia.

Que siendo que el promotor de las presentes actuaciones vive en Carmen de Patagones queda excluido del beneficio de asignación por cónyuge establecido para los residentes patagónicos.

Que el reclamo del ciudadano trae a discusión un debate de larga data como es la inclusión de Carmen de Patagones en el territorio de la Patagonia.

Que razones históricas, geográficas y de identidad común le dan a los ciudadanos maragatos la calidad de ser considerados residentes patagónicos.

Que tanto la Capital de la Provincia de Río Negro, Viedma, como la ciudad de Carmen de Patagones en la Provincia de Buenos Aires nacidas de la misma cuna, a orillas del majestuoso río Negro, tienen origen el 22 de abril de 1779 con la fundación del fuerte y población Nuestra Señora del Carmen, por Don Francisco de Viedma y Narvaez.

Que los grupos colonizadores comienzan a llegar el 2 de octubre 1779, procedentes de León, Galicia, Asturias y La Maragatería. Estas familias iniciaron una vida dura, y penosa, especialmente por la enorme distancia que los separaba de todos los centros poblados y las nuevas condiciones a las que se tuvieron que enfrentar.

En 1826 el país enfrentaba una guerra con Brasil y sobrellevaba un bloqueo al puerto de Buenos Aires por lo que el puerto de Patagones se convirtió en la base de operaciones de las naves corsarias que trabajaban para el gobierno Argentino

En 1827 se libra el combate de Patagones, donde la infantería brasileña se rinde, el 7 de marzo, ante los milicianos y pobladores que supieron defender estas tierras de la escuadra Imperial.

En 1878 logra Viedma una situación de privilegio, cuando el Gobierno Nacional crea la Gobernación de la Patagonia designando Capital a la Ciudad de Mercedes de Patagones, que en 1879 y por decreto de su gobernador Don Alvaro Barros, cambia su nombre por el de VIEDMA en homenaje a su fundador.

En Octubre de 1884 se promulga la ley de creación de Territorios Nacionales dividiendo la Gobernación de la Patagonia en los Territorios Nacionales de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Quedando así Carmen de Patagones despojada de su condición de pertenencia al territorio de la Patagonia Argentina.

(Fuentes: Viedma, Historia y Leyendas- InterPatagonia.com; Agenda 2000, del Tercer Milenio- Viedma- Patagones. Lic. Pedro Pesatti, Marcelo Ferreyra).

III

Que por lo expuesto entiendo pertinente poner en conocimiento del Consejo Deliberante de Carmen de Patagones, la situación del ciudadano Juan de Dios Perez para los efectos que estime corresponder.



Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la falta de competencia para entender en el reclamo obrante a fs. 1 y ss.

SEGUNDO: Correr traslado del mismo al Consejo Deliberante de Carmen de Patagones según lo establecido en el considerando III de la presente.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.

MAG

RESOLUCIÓN N° 546/04 "DPRN"

En el resto de reclamos referidos a la ANSeS, se perfilan como temas recurrentes los referidos al pago de deudas previsionales como así, a las dificultades que padecen los ciudadanos para reunir la documentación, los aportes previsionales, etc., en fin demostrar, trasladar a las pruebas, la vida de trabajo.

Lamentablemente gran parte de obreros de la construcción, de trabajadores rurales, que a diario llegan a esta Defensoría por esta dificultad, quedan excluidos de todo beneficio previsional porque no logran completar los requisitos.

Este tema ha sido desarrollado en otros informes anuales y es de nuestro conocimiento que se están considerando modificaciones a la ley 24.241 de manera tal que una franja mayor de ciudadanos, pueda acceder al sistema previsional.

UNIDAD DE CONTROL PREVISIONAL

En los últimos años fueron disminuyendo notablemente los reclamos que ingresaron sobre cuestiones que involucran al ex sistema previsional que poseía la provincia.

Las presentaciones que se reciben están referidas a beneficios que se mantienen aún en carácter de provisorio y a cuestionamientos al cómputo y liquidación que determinó el haber.

El tratamiento de estos reclamos se vio dificultado por la falta de respuesta de la Unidad de Control Previsional.

En el abordaje, se intensificó la utilización de las vías informales. Esto permitió avanzar en algunas actuaciones y constatar además, el desfazaje existente entre el recurso humano con que cuenta el organismo y el trabajo a realizar.

Suman una tarea adicional de cierta complejidad, los visados con observaciones de los expedientes en tratamiento de beneficio definitivo, que en no pocas ocasiones emite la Unidad de Visado de ANSeS central.

En los últimos meses, se instrumentó en la UCP el trabajo a destajo a fin de descomprimir algunas áreas.

Por nuestra parte, estamos evaluando las estrategias de intervención ante las dificultades informadas.

C- PAMI

En el curso del año se iniciaron 25 (veinticinco) actuaciones por reclamos que vinculaban a PAMI. Así también se trabajó en otras presentaciones que surgían, de su mayoría de la atención directa del público, a través de la vía informal, dado que esta modalidad se adecuaba más a las características de las mismas.

Las quejas abarcaron temas varios que tienen que ver básicamente con demoras ó insatisfacción en la provisión de distintas coberturas, tales como: prótesis, audífonos, operaciones de cataratas, sillas de ruedas, medicamentos. De éstos, un 50% involucran a la oficina de PAMI con sede en Viedma.

Un número importante, se refiere al no pago de reintegros como así a la falta de respuesta sobre las solicitudes presentadas.

En el tratamiento de estos reclamos se obtuvieron resultados distintos según la oficina de PAMI interviniente. Esto es, aquellos provenientes de la zona de competencia de la Oficina de Viedma, se vieron demorados por falta de respuesta.

Agotada la vía de la reiteración en las distintas actuaciones, se emitió la Resolución Nro. 1129.04 (1) en la que se da por incumplido el deber de colaboración de la oficina Viedma del PAMI y se giran las actuaciones a la Unidad de Gestión Local con asiento en General Roca.

La buena disposición de la citada Unidad, en atender las demandas que le deriva esta Defensoría, nos ha permitido dar respuesta en la mayoría de las presentaciones.

Otras situaciones objeto de reclamo, fueron atravesadas por dificultades ó circunstancias del PAMI Central de una mayor complejidad, lo que influyó directamente en la demora de la cobertura reclamada.

En esta franja se ubican las entregas de sillas de ruedas, la provisión de audífonos y las operaciones de cataratas. Estas últimas, fueron motivo de numerosas y diligentes intervenciones, muchas de ellas a través de la vía informal. El móvil fue agotar en cada situación planteada, toda posibilidad de avanzar en una solución, cual es viabilizar la anhelada operación y por ende la recuperación de la visión perdida.

La caída del convenio firmado con la unión de empresas proveedoras de las lentes intraoculares y las situaciones previas generadas con dichos proveedores, operó como una dificultad de magnitud que trabó e interrumpió un incipiente proceso de normalización de esta cobertura, ya afectada por otras circunstancias macro.

Arribando a fin de año, se recibe la auspiciosa noticia de que se retoma el camino de dicha normalización, y que se inicia prontamente el restablecimiento de la cobertura, previéndose satisfacer a un corto plazo, la demanda de una lista de espera de 12.000 afiliados que aguardan la recuperación de su vista.

El seguimiento de algunas presentaciones como así de la evolución de la puesta en marcha de tal emprendimiento, nos permite observar avances concretos en tal sentido. Similar resolución tiene, la también demorada cobertura de audífonos.



Resolución 1129/04 "DPRN" .

VIEDMA, 15 de Septiembre de 2004.-

VISTO los Exptes. Nros.: 2791.03 - 2878.03 - 2818.03 - 2694.03 - 3928.03 - 3100.03 - 3313.03 - 4187.04. del Registro de esta Defensoría del Pueblo S/ Falta de colaboración por parte del PAMI

CONSIDERANDO:

I

Que las actuaciones citadas en la referencia se inician con reclamos presentados por ciudadanos de Viedma que dan cuenta de las dificultades que atraviesan para obtener las coberturas tramitadas al PAMI. Así también refieren los reclamantes sobre la falta de información que posee la citada delegación sobre el estado de gestión de los trámites correspondientes y las fechas estimadas para una resolución.

Que asimismo, en Acta Interna Informativa emitida desde el Área Social de esta Defensoría, se da cuenta de la falta de respuesta de la delegación Viedma del PAMI, a las distintas solicitudes de información que se le formulan.

Que similar señalamiento, se realizó en la Resolución Nro. 322.04 que dictara esta institución en el marco de la actuación Nro. 3134.04.

II

Que en razón de lo aquí expuesto, corresponde considerar incumplido los deberes de información previstos en el art. 12° de la Ley de la Ley 2756.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO ADJUNTA
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :

PRIMERO: Tener por incumplido los deberes de información previstos en el art. 12° de la ley 2756, en referencia a delegación del PAMI de Viedma.

SEGUNDO: Notificar la presente a la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Gerencia Local con asiento en la ciudad de General Roca.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

RESOLUCION N° 1129/04 "DPRN"

D GERIATRICOS

Se recibe la presentación de dos trabajadoras de un geriátrico de esta ciudad que denunciaban la falta de atención médica a los abuelos internados, como así también mala alimentación y precarización de sus contratos laborales.

Dicha presentación da inicio a las actuaciones Nro. 4052/04 y en el marco de su tratamiento, se dicta la Resolución N° 014/04. Se corre traslado al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Trabajo solicitando su intervención. Así también se actuó por la vía informal con el fin de lograr una pronta resolución ante la situación planteada.

Efectuadas las inspecciones en el lugar, dieron como resultado que el Geriátrico no

estaba habilitado para su funcionamiento si bien, señalan los inspectores, que no se observa mala atención a los abuelos. Asimismo se requirió informes acerca de la cobertura médica que tenían los abuelos, librándose pedido de informe a IPROSS y al PRO.FE.

Posteriormente se nos informó que los abuelos fueron reubicados en otro Geriátrico del mismo dueño, el que sí contaba con la habilitación correspondiente.

Resolución Nro. 014/04 DPRN

Viedma, 15 de enero de 2004.-

VISTO: El Expediente N° 4052/04, caratulado "V.V. y A.L. de N., s/ inspección a geriátrico y regularización de su situación laboral."

CONSIDERANDO:

Que a fs. 01 se presentan las ciudadanas citadas en el epígrafe de la localidad de Viedma, quienes manifiestan:

"Que trabajan en un geriátrico ubicado en la calle Catamarca al 300. En esa cuadra funcionan dos geriátricos del mismo dueño. La comida que les dan a los abuelos no es buena, si bien la limpieza está muy cuidada.

Recientemente falleció una abuela a la que no le fueron dados los debidos cuidados y tampoco recibió un debido sepelio. Los ancianos, en esta institución, no reciben atención médica. Algunos de ellos presentan en sus espaldas lastimaduras importantes y padecen de alergias porque duermen sin sábanas.

Ambas presentantes manifiestan que no le fueron abonados sus sueldos y son trabajadoras en situación irregular ("en negro"). Solicitan que se inspeccionen los geriátricos que denuncian para que los abuelos reciban la debida atención y que se regularice su situación laboral".

II

Que conforme prescribe el artículo 17° de la Ley N° 2.756, "presentada la denuncia, el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester..."-

Que del análisis preliminar de la queja que corre agregada a fs. 01 y anexas, surge que se plantean cuestiones que se encuentran comprendidas en el ámbito de competencias de esta Institución (artículo 9° y concordantes de la Ley citada).

III

Que dado el tenor de los hechos denunciados corresponde correr traslado al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Trabajo, a los fines de la intervención que por ley le compete a cada uno de los organismos, solicitando la remisión posterior de un informe sobre los resultados de las intervenciones realizadas.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E

PRIMERO: Avocarse al conocimiento del caso planteado en la presentación obrante a fs. 01.-

SEGUNDO: Correr traslado de las actuaciones al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Trabajo, solicitando la intervención de ambos Organismos en los aspectos de su competencia, conforme lo estipulado en el Considerando III de la presente Resolución.-

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-



Capítulo II DISCAPACIDAD

ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Entre las presentaciones realizadas ante esta Defensoría se encuentran:

- solicitudes de acompañamiento domiciliario para personas con discapacidad
- solicitudes de cobertura para los tratamientos de discapacitados
- solicitudes de trabajo
- atención de discapacitados ante el cierre de un Centro de Día.
- solicitud de información sobre Ley Nacional de Pase Libre
- solicitud de pensión y protección socio económica, y ayudas en pañales, leche y alimentos
- solicitud rehabilitación, medicación y movilidad para discapacitados
- solicitud se le gestione beneficios por los problemas de sus hijos discapacitados
- solicitud para adquirir sillas de ruedas, reclamo por audífonos
- solicitud de información y asesoramiento
- solicitud de ayuda económica para familias con algun integrante con discapacidad
- solicitud de ayuda para persona con discapacidad que vive en malas condiciones habitacionales
- tardanza en la entrega de certificaciones de discapacidad o renovación
- solicitudes de subsidio
- denuncias de discriminación por su discapacidad
- problemas con la cobertura de las obras sociales
- solicitud de ayuda para presentar proyectos productivos para ser financiados

Principalmente, se ha corrido de las problemáticas presentadas al Consejo Provincial del Discapacitado pero se ha trabajado también con Consejos Locales del Discapacitado, Municipios, Hospitales y Ong's que están abocadas a la temática.

En general se ha obtenido buena colaboración de los órganos consultados aunque persisten algunas dificultades que se venían observando años anteriores.

Se destaca la necesidad de que la ciudadanía, sobre todo la afectada por algún tipo de discapacidad, reciba información clara y precisa sobre la forma en que puede canalizar sus necesidades y reclamos y sobre estado de los trámites iniciados y los plazos aproximados en los que podría recepcionar alguna respuesta de los organismos intervinientes.

Es menester mencionar que en muchas actuaciones se han recepcionado los ciudadanos han manifestado dificultades para seguir las instrucciones escritas o tener pleno conocimiento de lo que firma o recepciona como información a través de notas o formularios. En estos casos, es menester que además del asesoramiento, se brinde acompañamiento especializado y continuo sobre los trámites que debe iniciar o seguir.

Otro aspecto recurrente de consulta por parte de la ciudadanía es ausencia de novedades o respuestas, más allá que sean estas favorables o no a las solicitudes.

Desde muchas localidades de la provincia, se ha reclamado por el funcionamiento de

los Consejos Locales del Discapacitado, advirtiendo que la desarticulación entre el Consejo Provincial del Discapacitado con muchas instancias locales afecta al efectivo cumplimiento de las personas con discapacidad.

En la Argentina, según datos de la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) **el siete por ciento (7%) de la población sufre algún tipo de discapacidad** [1]. Esto revela que son 2.176.123 personas en todo el país.

En la provincia de Río Negro, 12.400 personas tienen certificados de discapacidad, por lo tanto, se encuentran aparadas en las disposiciones de la Ley N° 2.055. Las instituciones y la sociedad en su conjunto, tienen que tener en cuenta la importancia de incorporar a las personas con discapacidad a través de mejores condiciones, accesos, información y todo aquello que, sin dejar de basarse en el **reconocimiento de la diferencia, permita su integración plena, en condiciones de igualdad.**

○ CERTIFICACIONES DE DISCAPACIDAD

Las presentaciones o consultas realizadas en este sentido se relacionaron principalmente por cuestionamientos al criterio de determinación de la discapacidad y tardanza en los trámites de otorgamiento de los mismos.

Al respecto, los reclamos han sido canalizados a través del Consejo Provincial del Discapacitado, cuyo equipo técnico ha elaborado informes de acuerdo a cada situación particular, expresando que efectivamente, había tardanza en algunos trámites debido a la necesidad de lograr mecanismos más efectivos con algunos Consejos Locales que tiene menos recursos para dar respuesta a las demandas.

En reiteradas oportunidades se ha insistido en que el criterio para el otorgamiento de las certificaciones se basa en una consideración de muchos factores que evalúan no solo la enfermedad sino también las limitaciones que estas general en el medio en el que se desenvuelve la persona y su relación con los otros, el trabajo, las distracciones, la educación, etc.

Repensar el concepto de discapacidad empezando por la idea de adherir a la denominación de "personas con capacidades diferentes" como ya es utilizado en muchos ámbitos que trabajan en al temática, además, de trabajar en superar la barrera de la enfermedad, si fuera posible y que la certificación no signifique un objetivo en sí mismo, si no un reconocimiento a una limitación que no puede revertirse.

○ PASE LIBRE DE TRANSPORTE

Respecto a este tema es menester resaltar que el dictado del Decreto Presidencial n° 38/04, a comienzos del 2004, modificó las condiciones para el acceso al pase Libre de Transporte Terrestre para las personas con discapacidad.

El mismo establece que las personas que tengan la Certificación de Discapacidad, emi-



tida por autoridad municipal, provincial o nacional, podrán trasladarse por el territorio nacional presentando solo la mencionada certificación, sin necesidad de justificar los motivos del traslado. De esta manera se trata de contribuir a la Integración de las Personas con Discapacidad.

En la provincia de Río negro se ha aprobado en primera vuelta la adhesión a la mencionada norma nacional. Mientras tanto, corren los pases de transporte provinciales y municipales y para viales interprovinciales, rige la norma nacional.

Los reclamos que se presentaron en este sentido han sido solucionados y se debían a desconocimiento de la norma por parte de la ciudadanía o de las empresas que deben prestar el servicio.

○ **ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO**

Cabe mencionar una actuación en la que se tramitaron varias cuestiones que afectaban a una familia sustituta que esta a cargo de un niño con discapacidad, si bien los problemas inicialmente planteados fueron solucionados y/o debidamente canalizados a través del Consejo Provincial del Discapacitado y el Consejo Provincial de Educación, las respuestas de Promoción Familiar y de Subsecretaría de Infraestructura Social Básica y Emergencia fueron suficientes, y las mismas fueron puestas en conocimiento a la ciudadana sin que se haya recepcionado nuevo aporte o consideración al respecto.

Sin embargo, del informe del Consejo Provincial de Educación surge que el niño estaría recibiendo la atención adecuada a su situación según las consideraciones del Equipo Técnico y del Equipo Directivo de la Escuela Especial N° 9 de Río Colorado pero se hace necesario contar con un Acompañante Terapéutico, según lo sugiere la Supervisora de Educación Especial del Valle Medio (nota a fs. 43).

Debido a que el C.P.E. comunica que no cuenta con ese perfil dentro del Sistema de Educación Especial y acuerda con esa Delegación en la necesidad de que se pueda articular y reforzar acciones desde los Ministerios de Salud y Acción Social a fin de viabilizar una propuesta superadora.

Que a partir de los informes se dictó la Resolución N° 151/04 que determinaba la necesidad de remitir copia de las presentes actuaciones al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Familia a fin que sean analizadas alternativas de dar respuesta a la incorporación en algún área estatal, la figura de asistente terapéutico para discapacitados.

Que a continuación se detallan las respuestas:

○ 08/03/2004: El Consejo Provincial del Discapacitado informa que en el caso que su obra social, OSOEFRI, no reconozca las prestaciones terapéuticas, deberá concurrir al hospital de Río Colorado.

○ 05/05/2004: La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud nos remite información brindada por la Asociación Cooperadora del Hospital de Río Colorado, quien informa que no tienen conocimiento si en la localidad dispone de personal que pueda brindar el servicio de Acompañante Terapéutico. Además, informa que "...en el Organismo Central no hay política referida a la ayuda terapéutica para disca-

pacitados..." y agrega que de estas cuestiones "...se encarga el Consejo Provincial del Discapacitado".

○ 19/05/2004: Luego de una conversación telefónica con el Lic. Daniel Airala del Consejo Provincial del Discapacitado, se nos informa que se están coordinando acciones con el Municipio y el Hospital a fin de obtener una solución a lo planteado.

○ 14/07/2004: El Consejo Provincial del Discapacitado informa que luego de varias gestiones se solucionó la cobertura del acompañante terapéutico a través de la obra Social OSEFRIN y será concretada con dos personas que se encuentran enmarcadas en los Planes Jefes/as de Hogar.

Se destaca la exitosa intervención del Consejo Provincial del Discapacitado para solucionar la necesidad del niño discapacitado y de su familia, de contar con un Acompañante Terapéutico.

Como el Capítulo 5 de la Ley N° 2.055, que trata sobre Servicios Sociales, el Artículo 38, puntualmente se expresa: "...el Estado promoverá especialmente, los servicios sociales de orientación familiar de información individual, de atención domiciliaria, de pequeños hogares sustitutos sin límite de edad, de actividades culturales y deportivas, de ocupación del ocio y del tiempo libre. Además y como complemento de las medidas específicamente previstas en esta ley podrán dispensarse servicios y prestaciones económicas a los discapacitados, que se encuentren en situación de necesidad y que carezcan de los recursos indispensables para hacerle frente".-

La misma ley en su Artículo 41 se refiere a los servicios de atención domiciliaria y manifiesta que: "...tendrán como cometido la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico, así como la prestación rehabilitadora prevista en el Capítulo 1 de este Título, sólo para aquellos discapacitados cuyas especiales situaciones lo requieran".

Que el consejo Provincial de Educación con fecha 03/11/2003 comunica que no cuenta con el perfil de acompañante terapéutico dentro del Sistema de Educación Especial y manifiesta la necesidad que desde la Defensoría del Pueblo se pueda articular y reforzar acciones con los Ministerios de Salud y Acción Social a fin de viabilizar una propuesta superadora.

Muchas obras sociales, ya han incorporado la figura de acompañante terapéutico y/o cuidadores domiciliarios a las prestaciones que ofrecen a sus afiliados (a modo de ejemplo, cabe mencionar las Resoluciones N° 93/94 y 192/99 del I.PRO.S.S.). De esta manera, quedan fuera de esta cobertura las personas que no tengan obra social, cuya resolución queda sujeta a la elaboración de estrategias individuales, y no a la utilización de canales previstos en la política pública de atención a la discapacidad.

Se le solicitó al Ministerio de la familia y al Ministerio de Salud, a través de la Resolución N° 151/04 "DPRN" de fecha 23/02/2004, que se analice la posibilidad de responder a la solicitud de incorporación de la figura de acompañante terapéutico (y/o cuidador domiciliario). Ninguno de los organismos consultados ha respondido a esta cuestión puntual.



Por ello, a través de la Resolución N° 854/04 "DPRN" se procedió a RECOMENDAR al Ministerio de la Familia y al Ministerio de Salud que se analice la propuesta de evaluar la posibilidad de incorporar la figura de acompañante terapéutico (y/o cuidador domiciliario) para las situaciones de discapacidad que lo requieran y se informe al respecto, sin perjuicio que se aporte todo dato o consideración que se estime oportuna.

Esta Recomendación no ha sido contestada por ninguno de los Ministerios a los que se ha dirigido la Resolución de esta Defensoría del Pueblo.

○ REDUCCIONES o EXCENSIONES de IMPUESTOS

Se han recepcionado muchas presentaciones en las que se solicita información sobre las posibilidades que tiene las personas con discapacidad de pagar sus impuestos con reducciones. Por ello, se ha intervenido solicitando la información al Consejo Provincial del Discapacitado quien nos comunica los beneficios que existen en el caso que los impuestos sean provinciales.

En caso de los impuestos municipales, cada municipio fija las pautas para otorgar el beneficio. En los casos en los que se requirió esta información obtuvimos buena colaboración de los municipios consultados.

De lo obtenido surge que para que se evalúe una reducción en el impuesto inmobiliario el monto del ingreso familiar de la persona con discapacidad no debe exceder los seiscientos pesos (600\$). De la misma forma que lo indicado anteriormente, debe solicitar personalmente la eximición ante la Dirección Provincial de Rentas.

El otro beneficio provincial es el del impuesto automotor. Para la exención, en el dictámen correspondiente, debe aparecer como grado moderado o severo, de acuerdo a la Ley Prov. 1.284 Art. 14 Inc. G., y de ser así, debe iniciar el trámite personalmente ante el Registro Provincial del Automotor.

En lo que atañe a los impuestos municipales, dado que cada municipio se maneja autónomamente, fija sus tasas con independencia.

En Villa Regina, De acuerdo a la Ordenanza municipal N° 3056, Artículo 104°, inciso e), están exentos de pago de las tasas municipales los jubilados y pensionados, las madres solas, los discapacitados, cuyo ingreso, sumado al de su grupo familiar conviviente, no supere la suma de \$400.- La exención se otorga por Decreto Municipal, y se puede prorrogar anualmente, previa solicitud del beneficiario e informe socio ambiental de autoridad competente.

○ TRABAJO

A partir de la presentación de una ciudadana de la localidad de Catriel quien manifiesta que tiene una discapacidad pero pese a ello, se ha Diplomado en Ecología Social y solicitó incorporación laboral en el Municipio, donde le habrían informado que debe esperar a que se realicen futuros concursos, se dictó la Resolución N° 1.637/03 "DPRN".

En el marco de la misma se procedió a comunicar a la ciudadana que el artículo 17° de la Ley Provincial N° 2055 establece que el ingreso de las personas con discapacidad a la administración pública provincial o municipal es "...en igualdad de condiciones con los demás aspirantes". Para ello, la idoneidad de las funciones a desempeñar deberá ser acreditada mediante el dictamen vinculante emitido con anterioridad a las pruebas selectivas por el Equipo Interdisciplinario del Consejo Provincial del Discapacitado.

Para que se de cumplimiento a esto el ciudadano interesado, debe solicitar certificado que acredite su discapacidad, que un área gubernamental convoque a concurso para cubrir una vacante, que el interesado solicite dictamen de idoneidad para la función y que se presente al concurso previa solicitud a la Secretaria de Estado de Trabajo para que supervise el mismo.

No obstante ello, se le solicitó informes al Municipio, al Consejo Provincial del Discapacitado, y al Consejo Provincial de la Función Pública. De lo que surge:

- El Secretario de la Función Pública expresa que no puede intervenir debido a que los municipios gozan de autonomía política, administrativa y económica.
- El Municipio envía extenso informe donde se expresa que la ciudadana será considerada en futuros concursos.
- Del consejo Provincial del Discapacitado se expresa que la ciudadana no ha sido incorporada por que no se han realizado concursos en la localidad, que podría dejar de estar encuadrada en la Ley N° 2.055 y que ello no obstante "...tenga en cuenta que se pondrá en marcha en Catriel el Programa de Mejoramiento Barrial que comprende un componente ambiental y podría ser invitada a participar..."-.

Las respuestas fueron puestas en conocimiento de la ciudadana, sin que la misma haya expresado nada al respecto o solicitado nueva intervención de esta institución. Sin embargo, la sensación sigue siendo que queda mucho por hacer en materia de empleo para personas con algún tipo de discapacidad.

Ante una situación presentada por un ciudadano discapacitado de Choele Choel que manifiesta que quiere presentar un proyecto productivo que consiste en la instalación de una Quesería. Por ello, se solicitan los informes correspondientes de lo que surge Consejo Provincial del Discapacitado ha solicitado la intervención de la Dirección General de Promoción Familiar para coordinar la canalización del proyecto por vía del Fondo Solidario de Asistencia a Desocupados.

Copia de los formularios fueron enviados al ciudadano quien nos informó con fecha 18/10/2004 que había presentado toda la documentación ante el Municipio, por lo que procedimos a solicitar al mismo que nos informe sin que hasta la fecha se hayan recepcionado novedades.

Respecto a un reclamo de necesidad laboral de una ciudadana que tiene una discapacidad de la localidad de Cinco Saltos esta Defensoría dicta la Resolución N° 979/04 "DPRN" en la que se expresa que las disposiciones del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, Ley N° 22.431, en su Artículos 8° y 23° (Decreto 498/83), en lo sustancial expresa que el Estado Nacional, entre otros, está obligados a



ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y una deducción especial de impuesto a las ganancias a aquellos que empleen personal discapacitado.

En ese sentido la Ley Provincial N° 2.055 expresa que el Estado "favorecerá la formación laboral y profesional de los discapacitados...y reconocerá determinados beneficios fiscales a empresas privadas y a los particulares que reserven un número determinado de puestos de trabajo a personas ...con discapacidad".

Estas consideraciones dieron oportunamente origen a una Recomendación realizada en el año 2002 al Consejo Provincial del Discapacitado para que impulse la inclusión de las personas con discapacidad en los distintos programas de empleo y asistencia.

Toda vez que estamos frente a una gestión distinta, se solicitó al Consejo Provincial del Discapacitado que informe sobre la existencia de programas específicos para personas con discapacidad que requieran empleo y avances que se han realizado o acciones concretas desde ese Consejo que tengan como objetivo promocionar la inclusión laboral de las personas con capacidades diferentes.

Durante el año en curso el organismo consultado responde que "...el Plan Integral de Acción provincial para personas con discapacidad 2.004/07...contempla la integración laboral...teniendo en cuenta que la estructura orgánica de este consejo funciona en coordinación con referentes de las áreas de Salud, Educación, Trabajo, Obras Públicas y Familia, ...se ha tratado el tema para elaborar un programa de inclusión laboral como así también la posibilidad de firmar convenios en el marco del Programa Emergencia Laboral".

Se menciona la "importancia de la habilitación del Padrón de Inscripción de personas con discapacidad para cargos en la Administración Pública por parte de la Secretaría de Trabajo para respetar lo establecido en la Ley N° 22.431" además del trabajo que se está realizando en los denominados Talleres polivalentes, de producción y terapéuticos y convenios con Educación para avanzar en la integración.

Capítulo III

MIGRACIONES Y DOCUMENTOS

ASISTENCIA EN TRAMITES MIGRATORIOS Y OTRAS DOCUMENTACIONES

Las cuestiones presentadas ante esta Defensoría del Pueblo han consistido en su mayoría en planteos relacionados con:

- errores en trámite migratorio
- regularización de trámites migratorios
- obtención de la ciudadanía argentina
- necesidad de regularizar su situación legal en el país pero con dificultades económicas para asumir los costos del trámite
- renovación del permiso de permanecer en el país hasta la obtención de la radicación definitiva.
- por no tener el trámite finalizado no puede acceder a ninguna pensión o beneficio social y solicita ayuda para obtener la radicación definitiva.
- dificultades para obtener un contrato laboral para completar el trámite de radicación.

En general los reclamos han sido derivados a la Dirección Nacional de Migraciones, Delegación Viedma, Delegación Neuquén, Consulado de Chile en Bahía Blanca y en San Carlos de Bariloche. Los mencionados organismos, no obstante encontrarse fuera del ámbito de nuestras competencias, han colaborado ofreciendo información e interviniendo según corresponda.

Sólo en algunos casos, como la demora en los trámites corresponde a la órbita de la administración pública nacional, se han derivado las actuaciones al Defensor del Pueblo de la Nación.

Cabe mencionar que durante este año, se ha sancionado la nueva ley migratoria (la 25.871, aún por reglamentar), y se ha puesto en marcha el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria.

Sin embargo, desde la recepción de reclamos ante este organismo, se detecta que los principales inconvenientes para regularizar la documentación se relacionan con problemas económicos.

Otra cuestión recurrente es la ausencia de las certificaciones de nacimiento que deben obtener en sus lugares de origen, complicándose también con las limitaciones económicas para viajar a sus países. En esto, ha sido fundamental la actuación del Consulado Chileno.

DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS

Las presentaciones que involucran la actuación de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas en su mayoría se dirigen a las demandas en la tramitación de los D.N.I. Se destaca la colaboración del Registro Civil



ante las situaciones de los ciudadanos que manifiestan tener dificultades económicas para realizar los trámites de su D.N.I. además de otros inconvenientes que han sido superados en todos los casos.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

Los reclamos recibidos por cuestiones referidas a la Dirección del Registro Civil, estuvieron dados básicamente en: agilización de trámites, excepción de canon de pago o aranceles por certificados de nacimiento, obtención de DNI, ya sea en originales o duplicado.

Las presentaciones que dieron lugar a la conformación de expedientes, suman 15 (quince). Todos fueron resueltos en forma favorable y tratados diligentemente por el organismo involucrado.

A lo largo del ejercicio que se informa, se atendieron además, por la vía informal, 22 (veintidós) reclamos. Estos provinieron mayoritariamente de ciudadanos de Viedma quienes planteaban que, al no tener ingresos o el dinero suficiente, se veían impedidos de realizar los trámites de: obtención de DNI, renovación de DNI, Certificados de Matrimonio, de Nacimiento ó Actas de Defunción.

La aceptada articulación construida con la Dcción. Pcial. del Registro Civil permite dar un pronto y efectivo tratamiento a este tipo de demandas.

En menor cantidad que en años anteriores, se siguen registrando presentaciones por demoras en la entrega de los DNI.

Si bien estas demoras se producen en la sede central del Registro Nacional de las Personas, hemos canalizado la atención de los reclamos, a través de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas.

En las situaciones presentadas se recibió rápida respuesta lo que permitió aportar soluciones a las personas afectadas por esta realidad.

Vale citar la presentación realizada por una ciudadana de la localidad de San Antonio Oeste la que dio lugar a la conformación del Expte. Nro. 4054/04.

La reclamante solicitaba se le extienda una Marginal de Rectificación de un Certificado de Defunción de su esposo dado que en el que se le había extendido figuraba como que era soltero.

Vanas fueron las solicitudes de colaboración que se formularon a la Delegación del Registro Civil de la ciudad de Bahía Blanca, donde se encuentra el Acta de Defunción, como así también a la Dirección General del Registro Civil de la ciudad de La Plata.

Ante esta situación se dicta la Resolución N°1389/*04 (1)

Especial mención corresponde realizar sobre la buena disposición brindada por la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Pcia. de Río Negro a toda demanda ó reclamo de ciudadanos que les llega a través de esta Defensoría.

Las respuestas y soluciones a todos los reclamos presentados son rápidas y efectivas, hecho éste que permite avanzar desde los distintos frentes, en todo aquello que hace al derecho a la identidad de los ciudadanos rionegrinos.

(1) RESOLUCIÓN N°1389/04
Expte. 4054/04"DPRN

VISTO: El Expte. 4054/04"DPRN" del registro de la Defensoría del Pueblo, caratulado s/ trámite de Marginal de Rectificación de acta de defunción de su esposo y

CONSIDERANDO

I

Que a Fs. 1 se presenta la ciudadana citada en el epígrafe, quien se domicilia en la localidad de San Antonio Oeste, Provincia de Río Negro y que manifiesta:

Que su esposo falleció en la ciudad de Bahía Blanca, en el año 2002.

Que por un error en el Acta de Defunción de su esposo figura con estado civil Soltero

Que solicitando la rectificación del Acta se le informa que debe realizarlo a través de un abogado y ella no cuenta con los medios

Que el hecho de figurar como soltero al momento del fallecimiento del esposo le perjudica en algunos trámites que debe realizar.

II

Que conforme prescribe el artículo 17° de la Ley N° 2.756, "presentada la denuncia, el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester..."-.

Que del análisis preliminar de la queja que corre agregada a fs. 01, surge que se plantean cuestiones que se encuentran comprendidas en el ámbito de competencias de esta Institución (artículo 9° y concordantes de la Ley citada).-.

Que evaluada la presentación, surge en principio derivar las actuaciones al Registro Civil de la ciudad de La Plata, que acusa recibo informando que no existe trámite alguno relacionado al tema;

Que ante ello, se hace la derivación a la Delegación de Bahía Blanca, en dos oportunidades sin tener respuesta alguna.

Que ello no obstante y ante la imposibilidad de aportar una solución a la ciudadana, se toma contacto por vía informal con la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Río Negro, ofreciendo su colaboración para diligenciar las acciones necesarias en procurar de la rectificación de la Partida de Defunción que reclama la ciudadana.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :

PRIMERO: Desistir del trámite a nivel Delegación Bahía Blanca del Registro Civil de la ciudad de La Plata cuyo silencio incide negativamente en el derecho legítimo del reclamo toda vez que el error debió ser subsanado por quien lo cometió como Principio de Buena Administración.

SEGUNDO: Correr traslado a la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Río Negro, con pedido de muy especial colaboración.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

Mag/Mgc

RESOLUCIÓN N° 1389.04"DPRN



Capítulo IV AREA MUJER

En el marco del Área mujer se ha dado tratamiento a cuestiones que se relacionaron con cuestiones de género, que afectan las condiciones y posiciones de las mujeres en la posición en la sociedad, y repercuten en sus vínculos (laborales, familiares, sociales, de pareja, entre otros).-

Durante el año a informar se participó del Encuentro anual de la Red de Defensa de los Derechos de las Mujeres de las Defensorías del Pueblo de la República Argentina en la que trabajó sobre los siguientes temas y de las estrategias de la red para el abordaje de los mismos:

Respecto a la cuestión de Salud Reproductiva la Defensoría de Vicente Lopez realizó un informe sobre el monitoreo del programa. Esta Defensoría utiliza como herramienta el monitoreo de seguimiento de la ordenanza de salud reproductiva. Este monitoreo consta de dos instancias: reunión con los responsables del programa, solicitud de informe, evaluación y presentación pública de los resultados, y encuestas a las usuarias y entrevistas a los profesionales del programa.

Los principales problemas que se han detectado en la primera instancia son la atención de los adolescentes: derecho a la salud vs. Patria Potestad, la necesidad de reanalizar los proyectos personales de las mujeres y la identidad en relación con el embarazo adolescente, la subordinación cultural del género femenino a los mandatos machistas de la sociedad respecto a la sexualidad y la reproducción, el embarazo como situación de conflicto en la pareja, ligado al refuerzo de la masculinidad y las alternativas de fortalecimiento emocional de la mujer que no este ligado al embarazo.

Las propuestas que se realizaron en este sentido consistieron en recalcar la importancia de las Campañas de difusión y del trabajo en talleres de género desde las ong's o consejos de las mujeres.

Las alternativas de resolución de conflictos teórico, práctico, legal, y/o de práctica médica fueron la realización de convocatorias y dictámenes de un Consejo de Expertos.

Respecto a la Ligadura Tubaria se buscó consensuar criterios de intervención de las Defensorías ante la negativa de la realización de la práctica. Así se acordó promover amparos ante la negativa de realización de ligadura donde no está previsto en la ley, y elevar el reclamo a las instancias provinciales de salud pública, solicitud de informes y de ser necesario denuncia pública donde no se realizan. Además, se hizo hincapié que no solo puede haber responsabilidad del médico al realizarla, también es necesario señalar la responsabilidad legal de la no realización de la ligadura en los casos en que la salud de la mujer corre riesgo.

Mientras estamos elaborando este Informe leemos en un diario de la región, noticia aparecida el día 12 de diciembre de 2004, un titular que dice: "Masivo reclamo por la ligadura de trompas", que da cuenta que casi 3.500 vecinos de Roca exigen respeto a la Ley, "...ya que médicos del Hospital rechazan las intervenciones...". Milesi (Marta), en

reunión del grupo de vecinos "...insistió en que el Estado tiene que atender estos reclamos para que se cumpla la ley, y agregó que ya sea, dentro del hospital público o tercerizando el sistema, la solución tiene que estar porque hay decisión política para aplicar estos métodos...No obstante se declaró a favor para realizar un buen asesoramiento previo y explicar todo lo que debe conocerse..." (sic)

Los principales obstáculos son la ley nacional del ejercicio de la medicina. En este sentido la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de Río Negro fue modificada para que no haya conflicto con la realización de la ligadura, además de incorporar el consentimiento informado.

Se avanzó en la necesidad de generar conciencia respecto al derecho de las mujeres de solicitar su historia clínica. La historia clínica de la mujer es de ella, tiene derecho a tener una y a requerirla a su medico en las oportunidades que considere una consulta alternativa o puede requerir el dictamen de un consejo de expertos.

Además se informó de la existencia de una comisión parlamentaria en el senado que tendría que trabajar, no solo en leyes de genero sino en incluir la perspectiva de genero en leyes generales.

La Defensoría del Pueblo de Córdoba propuso la Creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios e informaron que el proyecto está cajoneado en el Senado. La propuesta consistió en hacer lobby con los representantes provinciales para reflotarlo y se elevaría un documento de la Red a todas las Defensorías para que sea tratado en la reunión de ADPRA y se impluse la creación de este registro.

Además se solicitó que cada Defensoría evalúe la necesidad de apoyos o adhesiones a la creación de leyes provinciales, de las reglamentaciones o implementaciones, así como de otras dificultades que se presenten al respecto, por ejemplo la designación de funcionarios contrarios al espíritu de la ley.

Un tema novedoso fue "Mujer y Discapacidad" presentado por Defensoría de Buenos Aires en cuyo marco se convino en la necesidad de celebrar convenios para que se implementen programas de difusión de derechos de mujeres discapacitadas.

Se propuso trabajar sobre el cruce de temáticas como la sexualidad, la mujer y la discapacidad en talleres o seminarios y se sugirió que se proponga a las instancias provinciales que trabajan en la discapacidad, programas de empleo o promoción del empleo para mujeres con discapacidad.

Un problema es la falta de intérprete de señas en Comisarias, Hospitales, Defensorías, Justicia, por ejemplo ante un caso de denuncia.

Y las cuestiones pendientes de abordar en la temática son: autonomía y sexualidad en las mujeres discapacitadas, exploración de la sexualidad en el caso de pares, y abusos, opción de maternidad o paternidad en personas con capacidades diferentes, creación de un registro de traductores de señas, tutelas o curatelas: adonde va el discapacitado que pierde a su tutor, discapacidad e insanía: limites y posibilidades en casa caso, ins-



trumentos internacionales para la defensa (Convención de Belém do Para).

Otro de los temas novedosos lo constituyó el planteo sobre Mujer y Deporte que realizó la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires donde se trataron cuestiones como la participación y reconocimiento, la ausencia de mujeres en los cuadros directivos, la falta de deportes femeninos o mixtos y poca difusión y los estereotipos deportivos según el género, diferencias de premios a mujeres y varones en competencias de las mismas categorías, y dificultades para el arbitraje femenino.

La propuesta consistió en la realización de campañas o jornadas de difusión y concientización.

Otros temas fueron: la instrucción de temáticas de Género en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el tratamiento para la aprobación del protocolo facultativo de la CEDAW, el Informe SOMBRA realizado por la Defensoría de Santa Fé, Violencia y Prostitución en Mar del Plata e Igualdad de oportunidades en el Trabajo.

Nos integramos también a la Red de Defensorías de la Mujer de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), que organizó su Plenario recientemente en Quito, Ecuador, viajando a tal evento, en representación de la Red, la Defensora de la ciudad de Neuquén, Lic. Blanca Tirachini y la encargada de las Relaciones Institucionales de la Defensoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriela Moffson, cuyas conclusiones se transcriben:

"Reunión de la Red Iberoamericana de Mujeres en Quito, Ecuador

En el marco del IX Congreso y Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, del 8 al 11 de noviembre de 2004, tuvo lugar el encuentro de la Red Iberoamericana de Defensorías de las Mujeres, cuyo tema central fue la "Participación Política de las Mujeres en la Región Iberoamericana". Las participantes explicaron la situación de las distintas ciudades y países a través de un documento que elaboraron de acuerdo a una guía de trabajo que se había consensuado con anterioridad, para permitir comparar los distintos trabajos. La agenda de actividades, también incluía otras problemáticas relacionadas con la Violencia basada en el género y las Mujeres migrantes.

Al final la Red emitió una Declaración que fue leída en la Asamblea de la FIO con la presencia de los Defensores y Defensoras del Pueblo de la región Iberoamericana.

A continuación se transcribe la Declaración:

RED IBEROAMERICANA DE DEFENSORIAS DE LAS MUJERES DE LA FIO

A LA

IX ASAMBLEA DE LA FEDERACION IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN, FIO

Quito-Ecuador 11 de noviembre del 2.004

La Red Iberoamericana de las Defensorías de las Mujeres, reunida en Quito en el marco del IX Congreso y Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, (FIO) del 8 al 11 de noviembre del 2.004.

RECORDANDO que en la reunión ordinaria anual de la Asamblea General de la FIO realizada en Toledo en 1.997, se decidió la creación de la RED IBEROAMERICANA DE DEFENSORIAS DE LAS MUJERES, para garantizar una instancia especializada de alto nivel en la estructura de las instituciones del Ombudsman, encargada de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres de la región.

Desde 1.997 a la fecha, la RED a través de las instancias de las Defensorías respectivas, ha impulsado el cumplimiento de los objetivos de defensa, vigilancia, promoción y divulgación de los derechos humanos de las mujeres.

En Cartagena de Indias en junio del 2004, se acordó que en la IX reunión de la RED se abordara como tema central la Participación Política de las Mujeres en la región iberoamericana. En cumplimiento de ello y CONSIDERANDO que, de acuerdo a los informes de las distintas representaciones se evidencia una clara tendencia al incumplimiento por parte de los Estados de los compromisos de igualdad en la participación política de las mujeres;

TENIENDO PRESENTE que existen factores económicos, sociales, políticos y culturales que obstaculizan el acceso y la participación política de las mujeres, es indispensable el diseño y la implementación de políticas públicas con enfoque de género;

RECONOCEMOS como un hecho positivo la creación de instancias especializadas para atender los derechos humanos de las mujeres dentro de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías, Proveedurías y Comisiones que integran la FIO e insistimos en ratificar el compromiso establecido en Panamá para que se concreten estos espacios en donde aún no existen y se fortalezcan los existentes;

DESTACAMOS que la FIO haya priorizado para el II Informe la temática de los "DERECHOS DE LA MUJER", coordinado y compilado por la Universidad de Alcalá de Henares con los diagnósticos de cada país, elaborados por las/os integrantes de la RED y miembros de las Defensorías, Procuradurías y Comisiones integrantes de la RED.

OBSERVAMOS con inquietud que las mujeres siguen siendo consideradas como "población vulnerable o tema", en lugar de señalar las condiciones de invisibilidad y vulnerabilidad social, económica, política y cultural en la que se encuentran, siendo las mismas susceptibles de ser superadas por medio de acciones afirmativas y políticas públicas incluyentes, no discriminatorias;

CONSIDERAMOS la importancia del aporte de la cooperación técnica internacional al fortalecimiento de las instancias defensoriales de la región y a los proyectos específicos dirigidos a la defensa y protección de los derechos de las mujeres, se hace necesario que los Estados garanticen la sostenibilidad y reforzamiento de estos recursos;

ALENTAMOS la continuidad, la profesionalización y la especialización de las encargadas y encargados de las instancias en defensa de los derechos humanos de las mujeres dentro de las Defensorías, Procuradurías, Proveedurías y Comisiones que integran la FIO y la consolidación de los procesos iniciados.

RESUELVE:

PRIMERO: RATIFICAR la solicitud a la Asamblea Anual de la FIO para que se incorpore a ésta una representante de la Coordinación de la Red Iberoamericana de las Defensorías de las Mujeres, electa dentro de su seno, con voz y voto, con el propósito de garantizar una verdadera participación democrática e incluyente en esta instancia;

SEGUNDO: SOLICITAR al Consejo Rector de la FIO que la información referida a las diversas actividades relacionadas con la temática de género sea dirigida hacia la totalidad de las instituciones miembros de esa Federación, es decir, instituciones nacionales, estatales, provinciales, regional-autonómicas y municipales, conforme lo establecido en el artículo 2do. de los Estatutos de la Federación;

TERCERO: SOLICITAR a las Defensorías, Procuradurías, Proveedurías, Comisiones y Comisionados Nacionales, integrantes de la FIO, que hagan partícipe a las instituciones estatales, provinciales, regional-autonómicas y municipales (en los países en donde existan estas instancias) de toda información y actividades referidas a la temática de género;

CUARTO: SOLICITAR a las y los Ombudsmen integrante de la FIO que alienten a los Estados y Gobiernos a generar información y construir indicadores y estadísticas desagregadas por sexo;

QUINTO: PROPONER la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer de las Defensorías, Procuradurías, Proveedurías, Comisiones y Comisionados Nacionales, integrantes de la FIO y en las distintas temáticas desarrolladas en los Congresos de la Federación;



SEXTO: SOLICITAR a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que recomienden a los Estados asegurar la participación plena de las mujeres en los cargos electivos conforme a los principios de igualdad, paridad, y alternancia, garantizando el ejercicio de sus derechos libres de acoso político;

SEPTIMO: PROPONER a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que recomienden a los Estados políticas de equidad de género que permitan la designación e incorporación de las mujeres en los puestos de decisión de los poderes públicos;

OCTAVO: REITERAR a la Asamblea Anual de la FIO la solicitud para que demande de los Estados y Gobiernos la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en aquellos países que aún no lo han hecho, así como de otros instrumentos internacionales de derechos humanos;

NOVENO: PROPONER a las y los Ombudsman integrantes de la FIO que recomienden a sus Estados y Gobiernos elaborar presupuestos con perspectiva de género y que destinen recursos financieros suficientes para el fortalecimiento de los entes rectores responsables de generar políticas en defensa de los derechos de las mujeres, así como a las Defensorías, Procuradurías, Proveedurías, Comisiones y Comisionados Nacionales, integrantes de la FIO;

DECIMO: INSTAR a la asamblea Anual de la FIO para que privilegie los valores de la tolerancia y el respeto a las diferencias en sus programas de divulgación, promoción y educación en derechos humanos con un explícito enfoque de género;

DECIMO PRIMERO: INSISTIR en redoblar esfuerzos destinados a contrarrestar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia basada en razones de género y de dar continuo y sistemático seguimiento a la implementación de los objetivos de la Convención de Belén do Pará;

DECIMO SEGUNDO: REITERAR a la Asamblea de la FIO la cláusula cuarta de la Declaración de la RED en Panamá para que inste a los Estados a impulsar el tratamiento de los temas relacionados con el ejercicio y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos;

Suscrita en la ciudad de Quito el 11 de Noviembre del 2.004 por las representantes que conforman la Red de Defensorías de las Mujeres de las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica

Por la RED de Mujeres FIO:

<i>Edith Silva Alzolar</i>	<i>Linda Hernández Vargas</i>	<i>Gabriela Moffson</i>
<i>Blanca Tirachini</i>	<i>María Laura Cassiet</i>	<i>Betty Pinto</i>
<i>María Cristina Hurtado</i>	<i>Rosario Utreras</i>	<i>Alexandra Arroyo</i>
<i>Emilia Caballero</i>	<i>María del Mar España</i>	<i>Raquel Caballero</i>
<i>Sonia Mejía</i>	<i>Consuelo Olvera</i>	<i>Sergio Santiago</i>
<i>Patricia Obregón</i>	<i>Dayanara Salazar</i>	<i>Sonia Fernández</i>

Esta transcripción no es caprichosa, queremos instruir acerca de que toda participación conlleva un nuevo esfuerzo del recurso humano, el que debe capacitarse en el campo específico, entrenarse, en definitiva estudiar. Hay que estar, pero con capacidad de respuesta, con compromiso, y si a la demanda cotidiana, al día a día con la gente, le sumamos la presencia institucional en estas redes, que como podemos apreciar trabajan fuertemente y a nivel iberoamericano, estamos en el límite de nuestra capacidad operativa. Esto solo a modo de ejemplo.

Esta instancia representa una apertura institucional que fortalece los abordajes temáticos, los intercambios institucionales y el adecuado tratamiento que merecen las demandas de este tipo que solicitan canalización a través de esta institución.

Como todos los años, destacamos que existe una creciente demanda ciudadana que tiene por protagonistas a las mujeres. Por ello, y a fines ilustrativos puede mencionarse que en esta Defensoría, en el período comprendido entre el 31/10/2003 hasta el 31/10/2004, un número de 1.113 presentaciones fueron realizadas por mujeres y 711

por varones.

En acuerdo con los objetivos planteados en enero del 2002 de defensa, protección y promoción de los derechos de las mujeres hemos continuado con el trabajo que consiste principalmente en atender las demandas de problemáticas que afectan a mujeres e investigar, de oficio o a pedido de los ciudadanos/as, quejas y reclamos sobre la vulneración de los derechos de las mujeres y la falta de respuesta del Estado a pedidos que se relacionan con marcos legales vigentes.

La función de proteger y defender los derechos de la población frente a los actos y omisiones de la Administración Pública constituye un mandato central de las Defensorías del Pueblo.

Durante el año en curso se han presentado casos de violencia contra la mujer, denuncias de discriminación y violencia sexual, reclamos por cuotas alimentarias, entre otros. Serán reseñadas las situaciones que sobresalen por sus características o por haber dado origen a Recomendaciones, sugerencia o consideraciones dictadas por esta Defensoría del Pueblo como resultado de sus investigaciones.

DISCRIMINACION

En relación a esta temática esta Defensoría ha intervenido en diversas situaciones que se enmarcaban en problemáticas originadas.

Previo a reseñar la actuación de la Defensoría cabe aclarar que no en todos los casos, las problemáticas que se presentan tienen origen en una discriminación, aunque así lo presente el ciudadano que se siente afectado por una situación que considera injusta.

En los casos denunciados se ha procedido a avocarse a las cuestiones planteadas para detectar si existe o no discriminación o la problemática tiene en realidad otro origen.

En el período a informar se han recepcionado los siguientes planteos:

- Solicitud de ayuda por problemas de obesidad: aún se encuentra en etapa de investigación.
- Denuncia a la ETAP por discriminación a una niña con discapacidad visual: se solicitan informes al Consejo Provincial de Educación y el promotor de las actuaciones informa que se ha abierto un espacio de diálogo y la cuestión ha sido solucionada.
- Discriminación en Escuela Nocturna: se solicitan informes al Consejo Provincial de Educación quienes remiten copias de las actas de acuerdo con la alumna denunciante.

En el marco de las denominadas cuestiones de género, y respecto a la denuncia de discriminación para el ingreso a la Policía de la Provincia de Río Negro por una ciudadana de la localidad de Viedma, esta Defensoría del Pueblo actúa a favor de la misma, agregándola a anteriores presentaciones realizadas en



otros años, por otras ciudadanas que reclamaban la modificación del requisito de estatura mínima para el ingreso del personal femenino a esa fuerza policial.

Esta institución, advirtiendo que para el efectivo cumplimiento de los derechos de las mujeres, en muchas ocasiones, es necesario realizar consideraciones sobre los elementos que afectan de manera diferente a mujeres y a varones, encuadradas en el marco de las teorías de Género como de Discriminación Positiva, por la obligación de las instituciones en la toma de decisiones o la adopción de medidas que generen consecuencias concretas en la equiparación de las oportunidades de varones y mujeres. Por ello, la no consideración de las diferencias biológicas entre varones y mujeres, originan una discriminación en el género femenino con aspiraciones de incorporación a las fuerzas policiales provinciales.

Es así que se dictó la Resolución N° 1.190/04 "DPRN" en la que se procedió a RECOMENDAR a la Policía de Río Negro que modifique las normas internas que afectan los derechos de las mujeres que aspiren a incorporarse a las fuerzas policiales provinciales.

Que se puso en conocimiento de la presente RECOMENDACIÓN al Gobernador de la provincia, al Secretario de Seguridad y Justicia, al Presidente de la Legislatura y a la Comisión de Género de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, al Gobernador de la Provincia de Río Negro, al Secretario de Seguridad y Justicia, al Presidente de la Legislatura.

En respuesta a la mencionada Recomendación de esta Defensoría del Pueblo, las autoridades de la Policía de Río Negro responde con el dictado de la Resolución N° 3.949/04 de fecha 18/11/2004, en la que se establece que el personal femenino acredite un metro sesenta y puntualmente en su artículo 1° expresa: "...exceptuar a los postulantes a aspirante agentes femeninos de lo establecido en el Artículo 3°, inciso f) del reglamento del Régimen de Reclutamiento Policial hasta tanto se apruebe la nueva reglamentación."

Se considera satisfactoria la respuesta y se agradece la colaboración de la Policía de Río Negro en la comprensión de la necesidad de la necesidad del dictado de normativa y reglamentaciones que no afecten los derechos de las personas discriminadas por el género, y como en este caso, se promueva, de ser necesario, medidas que se enmarcan en la denominación de "discriminación positiva".

En el marco de la representación que esta Defensoría tiene en la Red de Defensa de los Derechos de las Mujeres de las Defensorías del Pueblo de la República Argentina es que se ha tratado el tema de la necesidad de aprobación de la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la ONU en 1979, y que adquirió en la República Argentina jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.

La Convención impone la obligación al Estado argentino de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles satisfactorios de efectividad a los derechos contenidos en ella. Además la CEDAW instituyó un Comité permanente -integrado por especialistas- con facultades de control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de

estas obligaciones en base a informes que el gobierno de cada país debe presentar cada cuatro años. En 1999 Naciones Unidas aprobó un Protocolo Facultativo que amplía los procedimientos, como la presentación de peticiones individuales por parte de las víctimas y las investigaciones de oficio por parte del Comité. La mayoría de las Convenciones de Naciones Unidas poseen estos mecanismos.

Dado que todavía está pendiente por parte del Estado argentino la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) aprueba una resolución de declaración que expresa:

"VISTO: Que algunas Defensorías del Pueblo, tanto provinciales como municipales, han puesto de manifiesto ante las autoridades del Honorable Congreso de la Nación la necesidad de la pronta ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y CONSIDERANDO: Que la temática en cuestión constituye uno de los principales aspectos de abordaje en las Defensorías del Pueblo que funcionan en nuestro país; que la Federación Internacional de Ombusman (FIO) ya se ha expedido a favor de su ratificación; que en el mes de agosto pasado se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires la reunión Anual de la Red de Mujeres de las Defensorías en la cual se trató entre otros temas el contenido del Protocolo Facultativo de la CEDAW, asumiendo los respectivos participantes de cada Defensoría la necesidad de propiciar su ratificación; que dicho protocolo establece procedimientos adicionales de protección como la presentación de informes individuales por parte de las víctimas e investigaciones de oficio por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; que la ratificación del Protocolo Facultativo, demostraría una voluntad política de cumplimiento efectivo de la CEDAW, oportunamente ratificada e incorporada al texto constitucional por la convención Constituyente de 1994; La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, reunida en el plenario de sus miembros en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, el día 16 de septiembre de 2004 Resuelve RECOMENDAR al Honorable Congreso de la Nación la pronta ratificación del Protocolo Facultativo DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW) y remitir copia de la presente Recomendación a los respectivos presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, al Defensor del Pueblo de la Nación y a los Defensores del Pueblo miembros de ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina)".

De aprobarse, contaríamos con una herramienta efectiva en contra de las situaciones de discriminación contra la mujer.

Viedma, 02 Octubre de 2004.-

VISTO: El expediente N° 5.322/04, y sus agregados (Expedientes N° 2.108/02 y 992/02) del registro de esta Defensoría del Pueblo, iniciado a partir de la presentación de una ciudadana de Viedma cuyo extracto enuncia "S/ denuncia discriminación en el criterio para el ingreso en la Policía de Río Negro" y,



CONSIDERANDO:

I

Antecedentes:

Que en el año 2002, esta Defensoría del Pueblo intervino ante la presentación de ciudadanas que veían frustradas sus aspiraciones de ingresar a la Policía por el criterio que rige el Reglamento para la selección de personal, donde se establece la misma altura para los varones que para las mujeres.

Que el Reglamento del Régimen de Reclutamiento Policial de Río Negro, exige entre los requisitos para el ingreso del personal policial de todos los cuerpos, tener una talla no menor de 1.65 cm. (Artículo 3º, inc. f)) y para el personal superior del Cuerpo de Seguridad la estatura mínima debe ser 1.68 cm. (Artículo 6, inc. c)).-

Que de la consulta realizada a las autoridades policiales y de la respuesta recibida en aquella oportunidad, citaremos parte del párrafo que textualmente dice: "...el criterio de la selección se ajusta al Reglamento y no pueden realizarse excepciones al mismo...no obstante ello, se estudian reformas en el Reglamento a efectos de evitar cuestiones que linden con lo discriminatorio" (respuesta del 22/07/2004 del Comisario Mayor, Director de Personal de la Policía de Río Negro).

Que también consultada el Área de Salud de la provincia nos remiten gráficos de la relación entre edad y estatura de niñas hasta 19 años y datos de talla de mujeres encuestadas en el año 1999 que da como resultado que la altura promedio de las mujeres es de 157 cm. (Fuente: Secretaría de Estado de Salud, Dr. Daniel marcos Chiosso, Subsecretario Ejecutivo, informe del 10/10/2002) -

Que consultada al respecto, la Policía Federal Argentina nos informa que: "...acorde a lo normado en el Artículo 149 del decreto 1866/83 reglamentario de la ley para el personal de la Policía Federal Argentina, los postulantes deber reunir los siguientes requisitos: ... (inc. b) Tener los hombres 1.65 cm a 1.95 cm.; y las mujeres 1.60 cm. a 1.85 cm." (Fuente: Informe del Comisario Jorge Antonio Caruso, Jefe División Incorporaciones, del 30/09/2004).-

II

Que en su presentación, expte. N° 5322/04 "DPRN", una ciudadana de la localidad de Viedma, manifiesta su intención de ingresar a la fuerza, y hace hincapié fundamentalmente en sus motivaciones vocacionales, además de haber cumplimentado los exámenes de admisión, oportunidad que se ve coartada por el criterio de selección en cuanto a la altura mínima, que continúa sin diferenciar la media existente entre mujeres y varones.

Que esta institución advierte que para el efectivo cumplimiento de los derechos de las mujeres, en muchas ocasiones, es necesario realizar consideraciones sobre los elementos que afectan de manera diferente a mujeres y a varones, encuadradas en el marco de las teorías de Género como de Discriminación Positiva, por la obligación de las instituciones en la toma de decisiones o la adopción de medidas que generen consecuencias concretas en la equiparación de las oportunidades de varones y mujeres.

Que en el caso que nos ocupa, se ha venido observando la necesidad de tener en cuenta que la no consideración de las diferencias biológicas entre varones y mujeres, originan una discriminación en el género femenino con aspiraciones de incorporación a las fuerzas policiales provinciales.

III

Que a continuación se transcribe el dictamen de Susana Torres, abogada de la asesoría letrada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo que se emitiera a partir de una denuncia de una ciudadana de Río Negro en contra de la Policía Provincial (denuncia N° A/1659/98). La denuncia era acerca del carácter discriminatorio de la ley de Personal Policial N° 1.542 y sus modificatorias N° 2.412 y N° 2.450 de la Provincia de Río Negro, y del Reglamento del Régimen de

Reclutamiento Policial (RRRP) que establece, los requisitos para la carrera policial del personal subalterno del Escalafón de Seguridad, en forma diferenciada para agentes varones y mujeres, encareciéndose la situación del personal femenino.

Así, luego de describir el caso el dictamen en lo sustancial expresa: "concretamente la denunciante encuentra carácter discriminatorio al referido Reglamento (RRRP) el cual otorga disímil tratamiento por los arts. 3º; 30º; 35 y 39º para el ingreso de personal masculino y femenino".

Que "...corresponde determinar el interés legítimo de la denunciante sobre el tema propuesto, ya que el mismo no pasaría de un interés genérico o difuso, faltando en el caso el concepto de causa controversial entre partes que como requisito de procedencia se impone para atender judicialmente todo supuesto de inconstitucionalidad, incluido el de la discriminación".

Que "...toda vez que la razón misma de la existencia del INADI es la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo impulsando y llevando acciones a tal fin (art.2º ley 23.592); no cabe duda de la competencia de este instituto ante un caso de discriminación institucional de fuente legal, de la que se toma atento conocimiento a partir de una denuncia desinteresada..".

Que "...el hecho discriminatorio surge claramente establecido en el RRRP en análisis donde se privilegia notablemente el ingreso de personal masculino a la policía de la Provincia de Río Negro con sólo acreditar estudios primarios y asistir a un curso de tres meses con una evaluación global y el caso de las mujeres que en el mismo supuesto deberán acreditar la superación de estudios secundarios completos o superiores y realizar un examen sobre temas determinados por la Jefatura, debiendo sacar un puntaje no menor a cuatro en todos los temas, quedando aplazada si en cualquiera de ellos no llega a ese mínimo".

Que "...tenemos que por criterio de los constituyentes del 94, forman parte del texto constitucional diversos tratados sobre derechos humanos entre los que se cuenta la Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer, que, consecuentemente es norma fundamental respecto de cualquier otra legislación nacional o provincial y además compromete a la República en términos de responsabilidad internacional por la implementación concreta de sus postulados".

Que "...en tal sentido el caso viola el art. 2 inc.f) de la convención que dice que la Argentina debe adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Viola asimismo el art. 7º inc.b que al disponer que la Nación Argentina tomará todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de condiciones de la mujer y el varón en la vida pública, afirma que la mujer tiene derecho de ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas. Viola también el art. 10 que dispone que en todos los tipos de capacitación profesional la mujer y el varón tendrán acceso a los mismos programas de estudio y los mismos exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad, y finalmente el RRRP viola el art. 11 de la Convención que establece que las mujeres deben tener las mismas oportunidades de empleo que los varones, inclusive tienen derecho a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestión de empleo".

Que "...las citadas normas específicas sobre la materia, avanzan y completan la genérica garantía del art. 16 de la Carta Magna, determinando para la Argentina obligaciones internacionales ineludibles ante la comunidad internacional y ante el derecho interno que tienen el más alto rango normativo...en tal sentido no existe norma superior al tratado internacional incorporado a la Constitución Nacional, de donde, por resultar el Decreto Provincial citado, violatorio de la Convención Internacional de Eliminación de toda forma de Discriminación de la Mujer, queda ese Decreto fulminado de inconstitucionalidad".

Que "...lo dicho constituye una opinión jurídica de la asesoría letrada de este Instituto sobre el fondo de la cuestión, lo que no empece a que se aconseje no tomar resolución de intimación de cese en el acto discriminatorio toda vez que la Jefatura de Policía de Río Negro carece de competencia para declarar la inconstitucionalidad del RRRP o para no aplicar su normativa y la denunciante a su vez no es interesada legítima en el sentido técnico de la expresión".



Que fundamentada la opinión legal el dictamen concluye: : **"...por ello se estima oportuno comunicar el presente informe a la Policía de la Provincia de Río Negro, a su Gobernador y a la Legislatura, aconsejando la derogación de las normas discriminatorias objeto de la presente denuncia y enviar copia del mismo a la denunciante"**.

IV

Que conforme prescribe el artículo 17° de la Ley N° 2.756, "presentada la denuncia, el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester..."-.

Que siendo así, y tomando los fundamentos expuestos que darían cuenta de la existencia de criterios discriminatorios en la selección para la incorporación de personal femenino a las fuerzas policiales provinciales en que esta Defensoría del Pueblo procede a RECOMENDAR a la Policía de Río Negro que modifique las normas internas que afectan los derechos de las mujeres que aspiren a incorporarse a las fuerzas policiales provinciales.

Que además, se pondrá en conocimiento de la presente RECOMENDACIÓN al Gobernador de la provincia, al Secretario de Seguridad y Justicia, al Presidente de la Legislatura y a la Comisión de Genero de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, para que se intervengan según corresponda y oportunamente se informe sobre lo resuelto y actuado.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: RECOMENDAR a la Policía de Río Negro lo estipulado en el segundo párrafo del Considerando IV de la presente resolución.

SEGUNDO: Poner en conocimiento de la presente Recomendación al Gobernador de la Provincia de Río Negro, al Secretario de Seguridad y Justicia, al Presidente de la Legislatura y a la Comisión de Genero de la Legislatura de la Provincia de Río Negro, para que se intervenga según corresponda y oportunamente se informe sobre lo resuelto y actuado.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

MRR

RESOLUCION N° 1190/04 "DPRN"

VIOLENCIA SEXUAL

Ha llegado al conocimiento de esta institución, la presentación de una madre por la situación familiar por la que atraviesa. En su relato la ciudadana expresa que por malos tratos físicos y psicológicos realizó una denuncia en el marco de la Ley n° 3.040 y que la Jueza de Paz de la localidad habría ordenado que el denunciado debía buscar otro lugar para vivir. Sin embargo él no se fue de la casa y la ciudadana se habría tenido que mudar con una de sus hijas.

Sin embargo la principal preocupación que motivara su presentación fue una supuesto abuso de una de sus hijas, que tiene 27 y es discapacitada, por parte de su padre. Realizada la denuncia informa que desconoce como continúa el trámite de la denuncia en el ámbito judicial.

En la Resolución N° 1144/04 "DPRN", consta la solicitud de informes que se realizó a la Comisaría 10° de la localidad de San Antonio Oeste y al Juzgado de Paz y al Secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro, de las que se han recepcionado algunas respuestas.

La Jueza de Paz de la localidad expresa que ha convocado a la ciudadana y la ha asesorado para que inicie los trámites de restitución de la vivienda ante la Defensora Oficial. Y de la Comisaría N° 10° informan que a raíz de la denuncia está interviniendo el Juzgado de Instrucción N° IV a cargo del Dr. Funes. La denuncia fue realizada el 24/08/2004.

Según el informe las actuaciones fueron elevadas al Juzgado con fecha 24/09/2004. Cabe informar que los días anteriores desde esta institución se realizaron varias comunicaciones telefónicas que constan en actas informativas internas que se transcriben a continuación:

Fecha : 23 de Septiembre de 2004.-

ACTA INFORMATIVA INTERNA

Sra. Defensora del Pueblo:

Por medio de la presente le informo que a partir de la actuación enmarcada en el expediente N° 5244/04 que origina las siguientes comunicaciones telefónicas, realizadas a los fines de determinar la adecuada canalización de la denuncia presentada por la Sra. de la localidad de San Antonio Oeste.

FECHA: 16/09/2004

Comunicación telefónica con la ciudadana promotora de las presentes: en lo sustancial expresa que a partir de la denuncia en el marco de la Ley n° 3.040, y el no cumplimiento por parte de su ex pareja de lo dispuesto por la Jueza de paz, ella se tuvo que retirar del hogar y actualmente está viviendo en la casa de una de sus hijas.

Respecto a la denuncia por abuso de su hija discapacitada por parte del padre de la misma, informa que se le han realizado pericias psicológicas a su hija pero no sabe en el marco de que causa y cuales son los pasos a seguir.

FECHA: 22/09/2004

Comunicación telefónica con la Jueza de Paz de la localidad de S.A.O.: la funcionaria no intervino en el caso planteado. Ante la gravedad del hecho se comunicó con el Comisario de la localidad quien le habría informado que se estarían realizando distintas pericias, que si bien no se habría comprobado violación la joven presentaría un cuadro de infección vaginal, que aún no se le habría dado intervención al fiscal y sugiere que solicitemos por escrito informes a la Comisaría 10° a fin de conocer la forma en que se ha dado canalización a la denuncia de la ciudadana.

Comunicación telefónica con el Sub-Comisario de la Comisaría 10° de S.A.O.: Ante la ausencia del Comisario Andrés Ruiz, atiende la consulta el Subcomisario Echeverría quien solicita que se solicite por escrito el pedido de informes, agregando que podría solicitarse por fax a fin de evitar demoras. Aclara que aún no ha sido elevado a la Justicia por encontrarse la denuncia en etapa de investigación. Agrega que debido a que la pareja había tenido problemas conyugales, se avocaron a la investigación con mucho cuidado para evitar que esos problemas, hayan dado origen a una falsa denuncia. El día de la fecha estarían completándose los informes de las pericias ordenadas y de acuerdo a las mismas, se determinaría el destino de la denuncia.

Es todo cuanto tengo para informar.

Viedma, 23 de septiembre de 2004.-

VISTO: Las actuaciones N° 5244/04 del registro de esta Defensoría del Pueblo, iniciadas a partir de la presentación de una ciudadana de la localidad de San Antonio Oeste cuyo extracto consigna "S/



denuncia abuso de su hija discapacitada", y

CONSIDERANDO:

I

Que en su relato la ciudadana expresa que por maltratos físicos y psicológicos realiza una denuncia en el marco de la Ley n° 3.040 y se separa después de 31 años de convivencia del Sr. Luis María Maldonado, con el que tiene cuatro hijos, todos mayores de edad y una de ellos, una joven de 27 años, sufre una discapacidad.

Que según manifiesta la ciudadana, a pesar que la Jueza de Paz ordenó que el denunciado debía buscar otro lugar para vivir, habría estado conviviendo con su ex pareja un tiempo sin que se de cumplimiento a lo ordenado. La vivienda sería de los planes del IPPV y estaría a nombre de ambos. Actualmente, la ciudadana vive con una de sus hijas.

Que en el transcurso del mes de agosto, toma conocimiento que su hija discapacitada, de 27 años de edad, habría sido abusada por su padre, por lo cual realiza la denuncia correspondiente. Agrega que a su hija la Dra. Donoso le habría realizado los peritajes psicológicos pero desconoce como continúa el trámite de la denuncia en el ámbito judicial.

II

Que dada la gravedad de lo denunciado, se realizan distintas comunicaciones telefónicas, en primer lugar con la ciudadana a fin de especificar algunos datos que no surgen de la presentación y en fechas posteriores, se procede a consultar por la situación y las intervenciones que se habrían realizado al Juzgado de Paz y a la Comisaría 10° de la localidad de San Antonio Oeste (lo sustancial de las conversaciones mantenidas telefónicamente constan en el acta informativa interna a fs. 03).-

Que durante la conversación se le hace saber a la denunciante las limitaciones que esta institución tiene para intervenir en las cuestiones que están sujetas a un proceso y una resolución judicial (Ley N° 2.756, Art. 16 inc. c). Ello no obstante, solicita asesoramiento para continuar con el trámite ante la Justicia y averiguación sobre las posibilidades que tiene de poder volver a su casa sin estar expuesta a la convivencia con el padre de sus hijos.

Que, esta institución, de acuerdo a sus misiones y funciones, intenta colaborar en las gestiones, intervenciones o medidas que sean necesarias para responder a la solicitud de la ciudadana y resguardar, si se comprobara el hecho denunciado, los derechos de las mujeres discapacitadas que están expuestas a situaciones ultrajantes que atentan contra la dignidad y de las víctimas de violencia contra la mujer.

III

Que por ello, y de acuerdo a las informaciones recepcionadas vía telefónica se resuelve la avocación preventiva a la denuncia presentada y la solicitud de informes de acuerdo a lo que se detalla a continuación:

* Respecto a la denuncia por presunto abuso de la joven discapacitada se solicitará a la Comisaría 10° de la localidad de San Antonio Oeste que informe sobre el trámite que se le ha dado a la denuncia de la ciudadana promotora de las presentes, sin perjuicio que aporte otros datos o consideraciones que estime oportunas.

* Por las cuestiones relacionadas con la problemática habitacional que tiene la ciudadana, ocasionada a posteriori de realizar la denuncia en contra del padre de sus hijos por violencia en el marco de la Ley N° 3.040, se procederá a derivar la presentación al Juzgado de Paz de la localidad de San Antonio Oeste para que informe sobre las alternativas que tiene la ciudadana para reclamar por los derechos que menciona.

* A los efectos que estime conveniente se remitirá copia de las presentes al Secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Avocarse preventivamente a la cuestión planteada a fs. 01 y anexas.

SEGUNDO: Solicitar informes a la Comisaría 10° de la localidad de San Antonio Oeste según lo especificado en el Considerando III de la presente.

TERCERO: Derivar la presentación al Juzgado de Paz de la localidad de San Antonio Oeste a los efectos indicados precedentemente.-

CUARTO: Remitir copia de la presente al Secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro a los fines que estime pertinentes.

QUINTO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

MRR

RESOLUCION N° 1144/04 "DPRN"

Libro III - Informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro



Capítulo V NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

NIÑOS Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO

Los temas tratados en las distintas actuaciones iniciadas durante el ejercicio refieren a: instituciones públicas, hogares protectores, Institutos de Alta Contención, Jóvenes en Conflicto con la Ley, niños que trabajan, niños víctimas de abuso sexual, entre otros.

La infancia y sus circunstancias familiares y sociales, son protagonistas del escenario social en los últimos tiempos. Constituyen razón y sentido de políticas públicas, programas, organizaciones del estado y privadas como así, motivo permanente de debate, de iniciativas, etc.

La estructura vincular de la familia ha sido crudamente afectada por las crisis sociales, económicas y políticas del país.

Los efectos, se trasladaron directamente y sin atenuantes a los niños.

Con frágil y debilitado sostén, quedaron sin guía, librados a la vida.

La calle los agrupó por afinidad de realidad y entre ellos se construyeron y crearon sus espacios en concordancia y allí, encontraron la pertenencia ausente.

Las políticas sobre la infancia y las acciones derivadas, deben centrar su esfuerzo en precisamente, desandar ese camino.

Apuntalar a la familia como sostén natural de sus hijos. Recuperar, revalorizar sus roles como formadora de su prole.

La Convención Internacional del Niño, y demás tratados y postulados sobre los derechos del niño no lograron plasmar una realidad de niños con derechos.

La implementación de los denominados Juzgados de "Menores", creados por la ley 2748 aportaría una importante especialización en el tratamiento de los derechos de los niños, acorde a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

Al respecto, la Defensora del Pueblo y la Defensora del Pueblo Adjunta, en nota remitida al Presidente del Superior Tribunal de Justicia plantearon la necesidad de su puesta en marcha.

MALTRATO INFANTIL

A partir de la presentación de una ciudadana, quien efectuó su denuncia bajo identidad reservada, se iniciaron investigaciones sobre el trato que recibían niños tutelados por la provincia, en un Hogar de la ciudad de Viedma que depende del Programa Provincial "Fortalecimiento Familiar".

En su presentación, la señora manifestaba que los niños eran sometidos a maltratos físicos y verbales por parte del personal encargado de su cuidado.

En el marco de las actuaciones, se dictó la Resolución N° 1549/03 DPRN, en la que se solicita la remisión de un informe en un término de 48 Hs.

En respuesta, el Subsecretario de Asistencia y Promoción Familiar señala que "no exis-

ten hechos de maltrato del personal hacia los niños que se encuentra en dicho lugar. En tal sentido, se hace saber a la Sra. Defensora del Pueblo que no existen antecedentes sumarios iniciados en ese sentido, no contando esta Subsecretaría con elementos suficientes, salvo la denuncia efectuada... Asimismo, no hemos recibido de parte de las distintas instituciones colaboradoras en el Programa como Educación, Salud, u otros organismos, comunicación en el sentido indicado en la denuncia...".

Más adelante la nota refiere que el programa se desempeña con personal de mucha antigüedad y que "en función de una buena prestación del servicio, últimamente se decidió el relevamiento y la re-estructuración de parte del personal, por considerar que existían operadores no aptos para la tarea de responsabilidad a su cargo".

Remitida dicha respuesta a la promotora de las actuaciones la misma expresa:

"...desde que usted tomó conocimiento ha cesado el maltrato, yo estoy de acuerdo en que sean vistos por psicólogos, psicopedagogos, etc. Pero no me gustaría que esto quedara solo en una nota, y que de vez en cuando una persona de jerarquía de dicha repartición correspondiente asistiera al hogar mencionado en forma alternada para que supervise a las personas a cargo del cuidado de niños...".

Con posterioridad se presentó una operadora del Hogar en cuestión, quien manifestaba que se la había apartado de su cargo, función que desempeñaba hace 22 años, sin haber tenido nunca problemas. La misma acudía a este organismo a verificar la existencia de denuncia en su contra por maltrato a niños según se le manifestara. Se remite a Promoción Familiar la presentación de la ciudadana. Este organismo manifestó que había tomado medidas para esclarecer la denuncia efectuada procediéndose, según normativa vigente, a dar inicio a sumario administrativo.

En el marco de estas actuaciones se dictó la Res.1549/03.DPRN

La presentación de una adolescente dio origen al inicio de otra actuación por la misma temática. Esta en estado de desesperación ante la situación que estaba transitando solicita la ayuda de la Defensora.

Comienza diciendo: "Sra. Defensora disculpe las molestias pero ya no sé con quien hablar, nadie me escucha ni a mi ni a mi papá. Me dirijo a Ud. porque quizás pueda ayudarme...".

Se procedió a tomar contacto con el Programa de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y dar intervención a Defensoría General que ya se encontraba actuando para la obtención de un inmueble a favor de su padre. En la actualidad la situación familiar denunciada por la joven se encuentra superada y habita junto con su padre y su hermana el inmueble que reclamara. Resolución N°1586 DPRN.-

RESOLUCION N° 1549/03 "D.PR.N.".-

14 de noviembre de 2003.-

VISTO el Expediente N° 3845/03, del Registro Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro, caratulado "Identidad reservada s/ sol. se intervenga por maltrato en Casa Hogar de Niños en el barrio 20 de Junio , Esc.17. Dpto C. Planta Baja".

CONSIDERANDO:

I

Que a Fs. 1 se presenta una ciudadana de la ciudad de Viedma denunciando maltrato hacia niños amparados en una Institución Provincial, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, conocida como "Casa Hogar de Niños" B° 20 de Junio - Esc. 17- Dpto. "C"- Pta. Baja.

Que del testimonio de la persona se infiere que a los niños "...se los castiga de manera inexplicable por personal que los tiene a cargo el cual no parece estar capacitado para tal trabajo y ni siquiera para el cuidado de un niño inválido, el cual se encuentra en una silla de ruedas, a este niño en ocasiones se lo puede ver a través de las ventanas en frente del televisor apagado y completamente solo".

Más adelante se lee: "Estos abusos no ocurren desde ahora vienen pasando desde que se instaló el hogar, se pueden escuchar los gritos e insultos de los/os celadores/as hacia los chicos y el llanto de estos..." Hay un niño de aproximadamente 3 añitos que por los menos dos o tres veces al día lo encierran en el baño y a ese nene le agarra una desesperación enorme, porque comienza a golpear con un palo suponemos que es con el escurridor de piso, porque se sienten los golpes de puertas y paredes con dicho elemento..."

II

Que conforme prescribe el Art. 17° de la Ley 2.756, "presentada la denuncia el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester..."

Que del análisis preliminar de la queja que corre agregada a Fs. 01, surge que se plantean cuestiones que se encuentran comprendidas en el ámbito de competencia de esta Institución (Art. 9°, y concordantes de la Ley citada).

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :

PRIMERO: Avocarse al conocimiento del caso planteado en la presentación obrante a fs. 01 y s.s.-

SEGUNDO: Correr traslado a la Subsecretaría de Asistencia y Promoción Familiar solicitando la remisión de un informe el que, dado la gravedad de los hechos denunciados, deberá producirse en el término de cuarenta y ocho (48) horas.-

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

RESOLUCION N° 1586/03.

Viedma, 26 de noviembre de 2003.-

VISTO: el expediente N° 3914 caratulado "L.Y. s/ solicita ayuda", y

CONSIDERANDO:

I

Que a Fs. 1 realiza su presentación la ciudadana mencionada en el epígrafe de la ciudad de Viedma, solicitando ayuda para ella y su hermano en razón de la situación que los afecta. La joven tiene 16 años.

Sustancialmente la joven manifiesta: "no tengo donde vivir, y en donde estoy ahora me tratan re mal, a veces como y a veces no. A mi hermano de 12 años le dicen de todo, se va a la escuela sin comer y todo eso a mí me pone mal... tengo una casa en el Barrio 1016 y mi mamá lo está alquilando. Yo se lo pedí porque ella sabe que no tengo a donde ir, pero me dijo que no (prefirió dárselo a otros)...mis padres se separaron hace dos o tres años, mi mamá se juntó con alguien que me odia no sé porque motivo y nos dejó a mí y a mi hermano y a papá. Si ellos no quieren volver con nosotros no hay drama pero que por lo menos nos de la casa a mí y a mi hermano". Y más adelante la adolescente señala: "ya no aguanto más andar de casa en casa, le juro que si tuviera un revolver hace rato que ya no estaría acá...".

II



Que los hechos informados evidencian que los jóvenes L. padecen un estado de desprotección familiar crítico que los coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo importante. Que habiendo tomado contacto con el Programa de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y adolescentes, se nos informó que, en la presente situación, se encuentra tomando intervención la Defensoría General N° 4.

III

Que conforme prescribe el artículo 17° de la Ley N° 2756, "... presentada la denuncia, el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester...".

Que dirigiéndose su pedido a la intervención en una causa judicial en trámite, el Art. 16° inc. c) establece: "Rechazo de la queja: El Defensor del Pueblo podrá rechazar la denuncia o queja en los siguientes casos: ... c) Cuando respecto de la cuestión planteada, se encuentre pendiente resolución administrativa o judicial ...".

Que en consecuencia es oportuno rechazar el reclamo presentado por encontrarse interviniendo el Poder Judicial.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :

PRIMERO: Declarar la falta de competencia de la Defensora del Pueblo para actuar en el reclamo presentado a Fs. 01 - Art. 16° inc. a) Ley 2756.

SEGUNDO: Poner en conocimiento de la Defensoría General N° 4 la presentación de la adolescente.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

TRABAJO INFANTIL

"Actualmente (en Argentina), más del 75% de los menores de 18 años son pobres o indigentes, con un impacto en los social que registra mortalidad infantil altísima; bajo rendimiento, fracaso y deserción escolar; cientos de miles de niñas y niños asumiendo responsabilidades domésticas por ausencia de los adultos, chicos abandonados en las calles o explotados en el trabajo y hasta sexualmente, riesgos de adicciones y violencia, etc." (Carolina Marta Abrales, en Trabajo Infantil, La única oportunidad es la escuela", C.T.E.R.A., agosto de 2004).

El trabajo infantil se ha vuelto en nuestros días parte del paisaje urbano. La naturalización del mismo ha hecho que participamos de él aún sin percibir que lo hacemos. El trabajo infantil supone para los niños la exposición a un medio urbano donde encuentran todo tipo de peligros que atentan contra su integridad: accidentes, abusos, enfermedades, robos, agresiones.

En esta materias se recepcionó la presentación de una ciudadana que manifestaba que dada la situación de indigencia en que se encontraba debió salir a vender junto con sus hijos productos de panificación elaborados por ella y, que a raíz de esta situación, habría sido sancionada por el Área Social del Municipio de su localidad, interviniendo la Justicia de Paz.

Que fue pasible de una multa de \$9, 33 y que al no poderla pagar, debió cumplirla con arresto domi-



ciliario.

Así se recabó información al Área Social del Municipio de la localidad, al Comisario y al Juzgado de Paz, quienes aportaron datos relevantes en la situación de los niños de la familia.

Al respecto se dictó la Resolución 1403/04. En la misma la Defensora del Pueblo resuelve derivar la presentación de la ciudadana a la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil solicitándole la remisión de un informe de los Programas vigentes llevados adelante por esa Comisión como así también de la intervención a realizar en la situación traída a conocimiento.

Al cierre de este Informe aún nos encontrábamos a la espera de respuesta.

RESOLUCIÓN N° 1403/04 DPRN

Viedma, 22 de octubre de 2004.-

VISTO: El Expediente N°5466/04, caratulado "M.E. S/ plantea situación de niños que trabajan", y

CONSIDERANDO:

I

Que a Fs. 1 se presenta la ciudadana citada de la localidad de General Conesa, quien en su presentación manifiesta que tiene a su cuidado a sus cuatro hijos y para su manutención realiza productos de panificación caseros que luego comercializa.

Que sus hijos la ayudan en la venta de los productos.

Que si bien es beneficiaria del Plan Jefas, estos ingresos no le alcanzan para costear los gastos de la crianza de sus hijos.

Que el padre de los niños vive en Puerto Madryn, con la hija mayor de ambos, y que no colabora con el pago de la cuota alimentaria.

Que desde el Área Social de su Municipio se le exigió que los niños cesen en la actividad de venta de los productos y que concurren a clases, dando intervención a la Justicia de Paz. En este ámbito se le dio un plazo de tres días para que abonara una multa sino sería pasible de arresto domiciliario.

Sostiene que sus hijos no se encontraban faltando a la escuela.

Que se estableció comunicación con la Jueza de Paz de esa localidad quien explicó que estuvo en esa localidad el Fiscal de Instrucción de esta Circunscripción Judicial y que pusieron en conocimiento del mismo la situación denunciada. El Fiscal mantuvo reunión con el Comisario y el Intendente en relación a la presente situación. (Acta Informativa Interna Fs. 8).

Que posteriormente se estableció comunicación con el Área Social del Municipio de Gral. Conesa quien sostuvo que desde ese Municipio se está asistiendo a la Sra. Escobar. Ratificando asimismo que la Sra. debería vender los productos sin la colaboración de los niños y fuera del ejido urbano, debido a la prohibición de venta ambulante y los reclamos de los panaderos de la zona.

Que también se mantuvo comunicación con el Comisario de la localidad y con la Trabajadora Social que asiste a la familia (Actas informativas (Fs. 9 y 10)).

II

Que conforme prescribe el artículo 17° de la Ley N° 2.756, "presentada la denuncia, el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester..."-.

Que del análisis preliminar de la queja que corre agregada a fs. 01 y anexas, surge que se plantean cuestiones que se encuentran comprendidas en el ámbito de competencias de esta Institución (artículo 9° y concordantes de la Ley citada).-

III

Que en la actualidad el contexto socioeconómico ha provocado la exclusión de cada vez más amplios sectores de la población, conduciéndolos a estados de suma pobreza y desigualdad en la sociedad.



La falta de oportunidades de trabajo como así también la precarización de las condiciones laborales de los adultos ha influido en el incremento del trabajo infantil.

Que en un informe elaborado por María Otheguy, en el marco del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se lee "entre las diversas maniobras que los hogares llevan a cabo para intentar reducir su vulnerabilidad a esta multiplicidad de factores, es importante considerar las estrategias de reducción de consumo, la diversificación de sus fuentes de ingresos o la inclusión de otros miembros del hogar en el mercado de trabajo, contexto en el que se manifiesta la creciente inclusión de mujeres y de niños".(María Otheguy, "Contextualización de las condiciones sociales asociadas a la problemática del trabajo infantil en la Argentina").

Que el trabajo infantil supone para los niños la exposición a un medio urbano donde encuentran todo tipo de peligros que atentan contra su integridad: accidentes, abusos, enfermedades, robos, agresiones.

Que el trabajo infantil es definido en el mismo informe como "el desempeñado por niños de hasta 14 años (2) que en el intento de procurar ingresos para ayudar a sus familias o para su propia subsistencia, realizan un complejo espectro de tareas según residan en localidades urbanas o rurales, mendigan o hasta incurren en actividades que transgreden en mayor o menor grado las normas establecidas." ((2) Los compromisos asumidos en nuestro país- respecto a la edad mínima para trabajar- a partir de la ratificación del Convenio 138 de la OIT, no tienen todavía su expresión jurídica en nuestra Carta Magna. Esto explica el límite de 14 o 15 años, según sea el marco normativo que se adopte).

Que asimismo se señala que "la complejidad de las causas del trabajo infantil implican pobreza y explotación económica asociados generalmente al predominio de determinados valores sociales y circunstancias culturales. En este contexto, se puede afirmar que se requieren múltiples estrategias para abordar esta problemática así como también la proposición de alternativas desde diversas áreas de injerencia y participación de todos los niveles de la sociedad, para tender a garantizar que las nuevas generaciones de niños gocen de sus derechos más elementales".

IV

Que la realidad nos trae habitualmente situaciones como la de esta ciudadana de Gral. Conesa. Madres que deben enfrentar la crianza de sus hijos menores, solas. Proveerles de alimento, abrigo, educación y protección. Responsabilidad que los padres de sus hijos dejaron en sus manos y a quienes ni las leyes ni el sistema pudieron hacer que cumplan sus deberes de progenitor. Estas madres cuentan, en el mejor de los casos, con \$150, que les aporta el Plan Jefas y Jefes de Hogar, plan de emergencia nacional.

Siendo así, es impensable que con este sólo ingreso puedan atender las necesidades básicas de sus hijos, y contenerlos, y cuidarlos, y ...

Es necesario ayudar a estas madres para que sean madres. Es necesario ayudar a estos niños para que puedan vivir sus vidas de niños.

Es necesario sumar a las exigencias legales de protección de la infancia, programas que provean los recursos económicos que se necesitan para que estas madres contengan, orienten, y sostengan a sus chicos. En fin que constituyan verdaderos soportes donde ellas se puedan apoyar para criar y educar a sus hijos.

V

Que con el fin de obtener mayores aportes en la problemática de los niños que trabajan y de su entorno familiar se requerirá a la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil informe:

- A) Programas vigentes implementados por esa Comisión. Lugares donde se desarrollan.
- B) Datos estadísticos de niños que trabajan en la provincia de Río Negro.
- C) Todo otro aporte que se considere relevante.

Que en la situación familiar de la Sra. E. traída a conocimiento de esta Defensoría del Pueblo se requerirá informe en relación al seguimiento que se encuentra teniendo el joven y su entorno familiar.



Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E:

PRIMERO: Avocarse al conocimiento del caso planteado en la presentación obrante a Fs. 01 y anexas.-

SEGUNDO: Correr traslado a la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil solicitando la remisión de un informe según lo establecido en el Considerando IV de la presente Resolución. (Art. 17º Ley 2.756).-

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

Otras participaciones en esta temática

*Se concurrió a la Jornada por la Concientización de la Erradicación del Trabajo infantil llevada a delante por la CETI (Comisión por la Erradicación del Trabajo Infantil) de la que intervinieron varios actores sociales.

*Se participó al cierre de este informe, del Seminario Taller Regional Patagonia organizado por CETERA en el que se expuso el trabajo llevado adelante desde este organismo en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY

Institutos de Alta Contención

Se recepcionó la presentación de una directora de un colegio que manifestaba que un alumno de esa institución, que se encuentra alojado en un instituto de contención para chicos en conflicto con la ley penal de Viedma, se habría descompensado en horas de clase, como consecuencia de la huelga de hambre que iniciara junto con sus compañeros, hacía diez días. Que según le expresara el adolescente, esta medida se realizaba en pos de mejores condiciones en el Instituto y restablecer el contacto con sus familias.

Se da inicio a la Actuación Nro. 4461.04.

Ante la gravedad de los hechos informados, la Defensora del Pueblo se apersonó ante el juez de turno a fin de imponerlo de la situación denunciada.

El funcionario judicial remite posteriormente un informe, elaborado por la Subsecretaría de Promoción Familiar de la Provincia, el que daba cuenta del estado de los jóvenes alojados en el Hogar.

Se comunica que los adolescentes habían comenzado a comer con regularidad, y que habían retomado sus actividades deportivas y escolares. Asimismo que los resultados de exámenes médicos a los jóvenes estaban dentro de los parámetros normales.

Agrega el informe que, con relación a las causas judiciales de cada uno de los jóvenes, se realizaron los contactos necesarios para que se provea información como así, se defina la situación de aquellos que se encontraban en condiciones de ser externados.

Destaca que se efectuó la provisión de colchones, sábanas, y frazadas como así también que se iba a atender la parte edilicia. Que es estudiaba la inclusión de una cocinera para que los chicos tengan una dieta equilibrada, como también la concreción de

talleres artesanales.

Con posterioridad se hizo presente nuevamente, la Directora del Colegio sosteniendo que si bien se había efectivizado algunas mejoras "estas no son suficientes ya que permanece un estado de situación denigrante para los jóvenes".

Ante ello se evalúa necesario realizar una visita al Instituto para ver el estado en el que se encontraban los jóvenes.

Como producto de lo observado se elaboran dos Actas Informativas, una sobre el Ala Abierta y otra sobre el Ala Cerrada y se dicta la Resolución N° 460.04. En la misma se recomienda al Señor Ministro de Familia arbitre las acciones que conduzcan al cumplimiento real y efectivo de las Convenciones, Leyes y Programas vigentes, destinados a los Jóvenes En Conflicto Con La Ley.

Las partes substanciales de ambas Actas, forma parte de la Resolución citada. Se transcribe a continuación parte del informe de Ala Cerrada y testimonios de los chicos que no fueron incluidos en la misma.

Ala Cerrada - Charla mantenida con Jóvenes residentes en el Hogar Pagano

La chacra tiene varias hectáreas pero en la actualidad no es trabajada. La casa que aloja a los jóvenes posee, en el "Ala Abierta" cuatro habitaciones, varios baños en reparación, una cocina y un comedor bastante amplio.

-No teníamos vidrios pero desde que comenzamos con la medida de fuerza vinieron a ponerlos. También comenzaron a arreglarnos los baños, nos trajeron colchones (los otros tenían sarna) y viene una cocinera. Hoy comimos milanesas, pero veníamos comiendo polenta y fideos desde hace mucho tiempo- explica.

Quien habla es el único integrante del "Ala Abierta" del instituto, ya que el resto estaba castigado. Escuchaba cumbia villera en alto volumen cuando llegamos. Es de Gral. Roca y fue trasladado allí luego de los incidentes en el Maruchito. Su familia viene a visitarlo una vez por mes.

Su habitación mostraba su fanatismo por Boca, varios posters de modelos en ropa interior y fotos de su familia colocadas en portarretratos hechos por él. Todo estaba colocado prolijamente. Todo estaba ordenado. Allí tenían tiempo para hacer y deshacer cada cosa una y otra vez.

Solo cortan el césped de vez en cuando. No hay recreación, ni talleres, ni sesiones de terapia, ni huerta, ni animales que cuidar, ni televisión para mirar, ni libros para leer. Sólo transcurrir.

La rutina se altera cuando la Traffic los viene a buscar para ir a la Escuela de Adultos N° 6, algunos, y a la Escuela de Oficios otros. Esto ocurre a las 18 Hs. Los fines de semana se incorpora una actividad: les alquilan una película de video. Después guardan el televisor bajo llave.

- *Quisiera saber cuanto más voy a estar acá y si puedo ser trasladado a Roca-* dijo el joven



mientras nos acompañaba por el patio hacia el "Ala Cerrada".

- Justo al lado, con alambres de púa, se accede al "Ala Cerrada" del instituto.
- **"Tocá el candado. El operador va a venir"** - dijo apartándose.

En el "Ala Cerrada" ubican a los jóvenes que cometen alguna falta en el establecimiento. También cuando recién llegan los dejan allí treinta días. (Un interno que llega a la Alcaidía permanece en "el Buzón" sólo tres días).

Abrieron la reja. De afuera no se veía el adentro ya que las rejas cubrían las ventanas. Después estaba la puerta de acceso al edificio, la que luego se cerró también con candado. Hacia el lateral había otra enrejada y con candado también. Del otro lado estaban ellos mirándome, y entré. Volvieron a cerrar.

El frío, y sin que resulte un recurso metafórico literario, se sentía mucho más allí. Todo era frío.

Entre las nuevas adquisiciones que obtuvieron luego de la huelga de hambre, concluida una semana atrás, fue un calefactor que colocaron en el pasillo. Pero este no tenía suficientes calorías para ese ambiente.

A las habitaciones se accede por un pasillo. A ésta dan gruesas puertas de hierro enrejadas y con candados también. Los chicos salen al salón principal, completamente sin mobiliario, de a uno y cada una hora, por turnos. Luego vuelven a la habitación donde está la cama en la que deben dormir. También hay una sala más, - "es el gimnasio" - explicó uno de ellos. Allí había solo en el centro una bolsa de boxeo deteriorada y una pelota.

Ya en una de las habitaciones nos sentamos en la cama y comenzamos a charlar. Las paredes tenían dibujos de plantas de marihuana, y nombres de equipos de fútbol.

- No hacemos nada aquí - explicó otro de los chicos, mientras fumaba su cigarrillo. Es de Bariloche, no sabe o no quiso decir por qué no había sido alojado en el Hogar Convivir. Quería volver a su ciudad, ver a su familia, irse de allí pronto. Tiene 17 años. Concorre a la Esc. de Oficio, cursa Carpintería. Comentó que un fin de semana se lastimó uno de sus pies y que en el Instituto no había siquiera un botiquín de primeros auxilios. Se quitó su zapatilla y mostró la herida que, aunque ya cicatrizada, debió ser profunda.

Otro adolescente internado es de Roca, tiene 17 también, y está haciendo séptimo grado. Mostró la ventana con plástico, y señaló que entraba mucho frío. Sobre una silla habían cartas de juego. Juegan al solitario. Sobre el suelo todas las habitaciones tienen frazadas a modo de alfombras.

Comentó que sus padres costean los pasajes para visitarlo y que se hospedan en las residencias.

El que estaba con las visitas, una de ellas su novia con su madre, dijo que había cometido su primer robo y que siendo así no debería estar allí. (Luego el operador comentó que se le imputaba un crimen).

La noche anterior se habían fugado dos chicos. La otra semana, según dichos de uno de ellos, un joven al que le faltaban solo dos meses para salir.

Después vino la charla con uno de los operadores.

Explicó que trabajan 8 hs. en turnos rotativos. Bajo la forma contractual de beca, son contratados sin capacitación alguna. No se les efectúan sus aportes previsionales, ni tienen seguro por sus vidas. Asumen desde que entran toda la responsabilidad por los cuidados de los jóvenes.

Manifiesta que sus superiores pocas veces visitan el lugar.

Comentó que en una oportunidad concurrió acompañando a un joven al Hospital y luego de ser asistido éste se fugó. El juez lo citó y sobre él recayó la responsabilidad. Intentó acercarse a sus superiores con una propuesta de trabajo para mejorar la estadía de los chicos en el instituto (incluía recreación) pero esto no fue tenido en cuenta. Sacó de un cajón de un escritorio las leyes provinciales que regulan los derechos de los jóvenes y la reglamentación del Instituto Pagano, las había buscado en la biblioteca con el fin de informarse. - Nada se cumple- concluyó.

Comentó que recientemente renunciaron tres operadores. Que también pensaba hacerlo cuando pudiera conseguir otro trabajo que le permitiera subsistir y hacer estudiar a sus hijos.

El requerimiento de los jóvenes en su mayoría fue solicitar averiguación acerca del tiempo que deberían permanecer en ese Instituto. Uno de ellos gritó desde la puerta de rejas que les acercáramos un reproductor de cassettes, y otro pidió cigarrillos.

Las puertas volvieron a cerrarse y la sensación de estar afuera, es indescriptible.

RESOLUCIÓN 460.04

Viedma, 7 de mayo de 2004.-

VISTO: las actuaciones tramitadas por esta Defensoría del Pueblo en los expedientes Nros. 1150/01 - 1992/02 - 2207/02 - 2113/02 - 3139/03 - 3583/03 - 3660/03 - 4121/04 - 4300/04, 4606/04, 4461.04 y

CONSIDERANDO:

I

Que las mismos se iniciaron de oficio o bien a partir de presentaciones recibidas, que daban cuenta, unas, de supuestas conductas reprochables de jóvenes en conflicto con la ley tutelados por el estado provincial, y otras, sobre las falencias en la implementación de los programas que los asisten.

Que los denominados Centros de Contención de jóvenes en conflicto con la Ley (Pagano, Convivir y El Maruchito), han sido motivo de recepción de reiteradas presentaciones, las que provienen de fuentes distintas, éstas son: ciudadanos, docentes de escuelas de adultos a los que concurren los jóvenes, empleados de estas instituciones, madres de los jóvenes y la prensa.

Que las intervenciones realizadas al respecto consistieron en visitas institucionales y en pedidos de informes al organismo responsable. Incluyéndose el resultado de estas acciones en los Informes Anuales que esta Defensoría presentó a la Legislatura Provincial año 2002 y 2003.

Que corresponde traer en especial a la presente resolución, la actuación Nro. 4461/04, caratulada Directora de Escuela de Adultos "s/denuncia situación de jóvenes del Hogar Pagano", por tratarse de la intervención más reciente efectuada sobre el tema que nos ocupa y, esencialmente, porque las falencias observadas son similares a las ya señaladas en el tratamiento de los expedientes citados en el epígrafe.

Que la actuación se inicia a partir de una denuncia de la Directora de la Escuela de Adultos Nro. 6 de Viedma la que consta en acta de Fs. 1.

Substancialmente en la misma se expresa:

"Que en su Colegio asisten dos jóvenes internados en el Hogar Pagano...que el día 24, uno de los jóvenes, presenta al inicio de la clase un Certificado Médico en el que se le indica reposo por 72 horas", no indicándose en el mismo diagnóstico del profesional que lo asistió.

"....El día siguiente, jueves 25, se presenta el joven a la clase. Media hora después se descompensa físicamente. Presenta una notable palidez, sudoración y temblores".

....El operador que permanecía en la galería se integra a la asistencia que se le estaba brindando y manifiesta que este joven y otros internados, están realizando una huelga de hambre que lleva diez días..."

"Que recuperado el joven explicita que realizan esta huelga de hambre en razón de que no ven a sus familias. Que no tienen actividad alguna en la institución y que la comida es muy mala..."

Que en consideración de que el estado de situación puesto en conocimiento revestía gravedad y, observando que en los hechos narrados no se evidenciaba intervención alguna por parte de las autoridades competentes, esta Defensora se constituye en el Poder Judicial y formula la correspondiente presentación, según consta en acta interna de Fs. 03, en el Juzgado Penal, la que da origen al expediente judicial Nro. 605/04.

Que a Fs. 4 se lee un informe producido por la Subsecretaría de Promoción Familiar, remitido a esta Defensoría del Pueblo por el Señor Juez de Instrucción del Juzgado N° 4, el que en parte dice:

"...Los jóvenes se encuentran comiendo con regularidad, que se retomó la actividad de fútbol de lunes a viernes y que los jóvenes están concurriendo normalmente a la escuela".

"...se presentaron ante el Juzgado a su cargo los últimos exámenes médicos realizados a todos los jóvenes para evaluar su estado clínico, resultando todos dentro de los parámetros normales".

"... se realizaron los contactos necesarios para que se defina la situación respecto de los jóvenes que se encuentran en condiciones de ser externados y que aún no ha sido resuelta".

"...A su vez se elevará un informe de la situación de uno de los últimos jóvenes ingresados, proveniente de San Carlos de Bariloche,...(Juzgado de Instrucción n° 4, Secretaría n° 8), en el que se solicitará se lo traslade a otra institución por presentar características individuales que no conciben con el programa de trabajo que se puede brindar desde nuestra institución, convirtiéndose en muy pocos días en el líder negativo del resto de los jóvenes. Ello descomprimiría la situación institucional en gran parte y facilitaría la continuidad de su funcionamiento..."

"...se proveyó desde la Subsecretaría de Promoción Familiar de los siguientes elementos, colchones, sábanas y frazadas para todos los jóvenes; se realizaron las compras necesarias para atender a la parte edilicia....Se está evaluando la alternativa de contratación de una cocinera para que los jóvenes puedan tener una dieta más variada...se están realizando gestiones con el área de Cultura Municipal a los efectos de implementar talleres artesanales que funcionen dentro de la institución".

Por último se manifiesta en el informe, las dificultades que se generan por no contar la institución con medios de movilidad suficientes para sus necesidades.

El informe nada dice sobre la huelga de hambre iniciada por los jóvenes, motivo éste precisamente por el que se debía responder, en primer término.

Que a Fs. 08 se recibe, con fecha 19 de abril, una nueva presentación de la directora de la Escuela de Adultos Nro. 6, en la que se informa:

"...Que tomó conocimiento que el pasado viernes se fugó del lugar un joven al que sólo le quedaban tres meses de permanencia en la institución.

"...Que si bien la reciente intervención judicial, dada a partir de la presentación que realizó la Defensora del Pueblo, permitió que los jóvenes obtuvieron mejoras en algunos aspectos tales como: renovación de los colchones (los viejos tenían sarna), conocimiento acerca de sus causas, incorporación de una cocinera mejorando así la alimentación, estas no son suficientes ya que permanece un estado de situación denigrante para los jóvenes."

"...Agrega que los chicos se quejan del frío. Que faltarían vidrios en algunas ventanas y que en el Área cerrada el frío se hace insoportable".

Que con fecha 20 de abril se constituye en el Hogar Pagano la Defensora del Pueblo Adjunta e integrantes del Área Social de esta Defensoría del Pueblo. Tal intervención se realiza en un todo de acuerdo a las atribuciones conferidas a esta Institución por el Art. 11 incisos a) b) y c) de la Ley 2756, que norma su funcionamiento y que establecen:

Artículo 11: Atribuciones. A efectos de cumplir con sus funciones, el Defensor del Pueblo tiene las siguientes facultades:...Inc. a) Requerir de las dependencias de la administración pública provincial las informaciones y colaboraciones que juzgue necesarias... b) Ser recibido en cualquier dependencia del Estado Provincial. Inc. c) Realizar inspecciones y pericias sobre libros, expedientes documentos, aún aquellos clasificados como reservados o secretos, sin violar el carácter de éstos últimos.

Y del artículo 13 de la misma normativa que dice: Artículo 13.- Principios: Las actuaciones de la Defensoría se rigen por los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de oficio, sumaria y accesibilidad.

Que como producto de lo observado se elabora dos informes institucionales: uno sobre el Ala Abierta y otro sobre el Ala Cerrada, los que se agregan a Fs. 11 a 18 del expediente mencionado.

Que en el primero de los citados se informa sobre los siguientes ítems:

*Jóvenes

*Personal

*Alimentación

*Organización de la vida diaria

*Situación de internación

*Salud de los jóvenes.

*Aspecto edilicio

En los mismos se puntualizan como falencias observadas:

“Fugas periódicas”.

“No organización de actividades en la institución”.

Que el informe manifiesta:

El Hogar carece de un programa de atención-recuperación para los jóvenes que allí son ubicados. Es decir, no tiene implementado actividades cualesquiera sea su objetivo (capacitación, recreación, deportivas y/o laborales) que por sí sola actúen como instancia terapéutica y educativa. Incumpléndose así, lo establecido en el Programa Jóvenes en Conflicto con la Ley elaborado por la Subsecretaría de Asistencia y Promoción Familiar de la Provincia en el Punto 12.2 Centros de Contención. En el que se lee:

“...se apunta a lograr la inserción social del joven a través de un tratamiento institucional personalizado. ¿Qué implica este tipo de tratamiento?

Un conjunto de técnicas, organizaciones, y métodos de trabajo que coloca a los individuos en situación de diálogo e intercambio con la institución. Esto permite crear situaciones nuevas, que requieren de cada joven un compromiso personal, iniciativa, acción y constancia.

Se tiende a producir una humanización de la institución que posibilite el establecimiento de nuevas relaciones sociales”.

* Quejas de los chicos por la actitud distante de los psicólogos frente a su necesidad de ser escuchados, como así también demanda de los Operadores que, asumiendo sus limitaciones, no encuentran apoyo profesional en cuestiones que consideran de importancia en la vida institucional de estos jóvenes.

* Alimentación deficiente, la que estaría en curso de corregirse. No contenía frutas ni lácteos. Las verduras no eran de consumo habitual. Ese día se había incorporado una cocinera y con ella se habría implementado una dieta acorde a la población de la institución, que en ese momento solo era de cuatro (4) chicos.

* Se plantea una sobrecarga en la responsabilidad de los Operadores en el tratamiento institucional de los jóvenes, a quienes por otra parte no se les estaría aportando información sobre aspectos



tos básicos de los mismos, tales como: hechos cometidos que determinaron sus causas judiciales - problemas sociales, familiares - situación de salud al ingreso, perfil psicológico.

* Quejas por falta de contacto de los Defensores judiciales con los chicos y de falta de información sobre el estado de sus causas.

* Precario contacto de los familiares con los jóvenes internados que provienen de Gral. Roca y de S. C. De Bariloche, en razón de que éstos no cuentan con recursos para solventarse los traslados.

Que el segundo informe se refiere al Ala Cerrada y allí se manifiesta que los jóvenes acceden a la misma al ingreso a la institución, como así también toda vez que cometen falta considerada grave (entre éstas, se cuentan, por ejemplo, el levantarse tarde más de dos veces).

Permanecen allí 30 (treinta) días.

En el Ala Cerrada del Instituto se observó:

a) Estructura edilicia y mobiliario: Se trata de un espacio cuyas aberturas están cubiertas con rejas. La puerta de acceso está con candado. Se ingresa por una galería exterior que posee cercado de alambre de púas.

El ambiente principal no posee mobiliario y está en penumbras. Es notable el frío a pesar de que cuentan con un calefactor colocado recientemente.

Hay tres habitaciones con puertas de seguridad. Cada una con una cama. Las ventanas, con rejas, poseen vidrios o cerramiento con poli carbonato.

Se observa un espacio que sería destinado a la actividad deportiva en el que hay:

-una pelota de fútbol,

-una bolsa de boxeo deteriorada y en desuso.

b) Dinámica diaria: Los chicos permanecen en los aposentos-celdas. Salen (cada uno por turno) al espacio principal donde están una hora.

No realizan otra actividad en la institución más que asear el lugar.

Los Operadores les proveen de revistas que traen de sus casas. Tienen también un mazo de naipes.

A las 18 Hs., los trasladan a las escuelas, ya sea de Adultos o de Oficio.

El acompañamiento de los jóvenes en el Hogar Pagano en el Ala Cerrada está a cargo de operadores que permanecen junto a ellos en turnos rotativos de ocho (8) horas.

En los informes citados se formulan conclusiones, algunas de ellas son las siguientes:

* El Pagano está lejos de ser un Hogar, tampoco es un Instituto donde se intente capacitar, contener o asistir a los adolescentes.

* No se visualiza la existencia de contenidos, ni de objetivos institucionales ni de programa de tratamiento para con los chicos.

* Tan faltos hoy de oportunidades como cuando estaban en sus casas. El estado tutor, se presenta ante ellos, repitiendo aquellas falencias de sus entornos socio-familiares, que mucho tienen que ver en la conducta de los chicos hoy.

La pregunta es entonces, con qué aportes reingresan a sus familias. Qué se hizo a su vez con ellas para promocionarlas.

Que el estado de situación en el que se encuentran los jóvenes internados en el Centro de Contención Pagano viola las normas imperantes que garantizan los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley establecidos en:

- La Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, con rango constitucional en nuestro país, Art. 75 inc. 22.

- Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los menores privados de libertad.

- Ley 3097 Prov. Río Negro.

- Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD).

Que a fojas 14, se incorpora en las actuaciones una presentación que realiza un ciudadano con fecha 26 de abril, que desempeñó la función de Operador en El Pagano hasta el viernes 24, en que se le

comunica que a partir de ese momento dejó de pertenecer a la Institución. Este trabajador es el mismo que alertó sobre la huelga de hambre, como así también quien nos recibió en la visita efectuada a la Institución el día 20 de abril.

Su relación laboral estaba dada a través del sistema de "Becas". Manifiesta que ésta había sido acordada por tres meses y que no se cumplió este término como tampoco la cantidad de horas diarias por la cual se le asignó el puesto de trabajo.

II

Que las falencias observadas en el tratamiento de los Jóvenes en Conflicto con la Ley en los denominados Centros de Alta Contención, merece especial consideración el tema del personal abocado a esta tarea.

Muchos de ellos ingresan y permanecen bajo la modalidad de Beca, con una jornada laboral de cinco días semanales, de seis u ocho horas diarias de trabajo, con turnos rotativos, desempeñando la función de Operadores con responsabilidad directa sobre los jóvenes tutelados.

Beca, implica la realización de estudios como complemento del trabajo directo o indirecto con la población asistida. Es un recurso facilitador, precisamente para viabilizar la instrucción. Bajo esta figura se legitima una relación laboral precaria, sin norma legal alguna que la rija y donde al empleado-becado, no le asiste ningún derecho. En ese contexto de realidad laboral se le imponen a estos ciudadanos, funciones a cumplir en un ámbito de trabajo que, por su complejidad y gravedad, merecería una atención especialísima.

Al respecto cabe reseñar que el trabajo con jóvenes en conflicto con la Ley que están bajo tutela del estado en instituciones, fue motivo en nuestra Provincia del dictado de normativas que otorgaban un adicional en sus remuneraciones, como así también su encuadre como tarea que produce "desgaste prematuro", a los efectos previsionales. (Decreto 2012/84).

Por su parte el programa de Jóvenes en Conflicto con la Ley, ya citado anteriormente, desarrolla en su punto 13, una serie de instrumentos dedicados al área recurso humano de los Centros de Contención que contemplan la capacitación de equipos de gestión, la formación de operadores comunitarios y la supervisión de los mismos.

III

Que el medio familiar de los jóvenes ubicados en los Centros de Contención, no puede estar escindiendo del tratamiento institucional que con ellos se realice. Al respecto, en oportunidad de constituirse esta Defensoría del Pueblo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, se recepcionaron quejas de madres de chicos de esa ciudad que habían sido trasladados al Pagano, quienes manifestaron que, debido a su precaria situación económica no podían costear el transporte hacia Viedma para ver a sus hijos - Exptes. Nros. 3583/03 y 3630/03.

En dicha oportunidad las madres expresaban "somos unas cuantas mamás que estamos desesperadas porque a nuestros hijos los llevan a Roca o a Viedma, siendo que pueden estar acá."

También refería una de las madres, que no se estaba dando cumplimiento a la orientación que iban a recibir de Promoción Familiar por parte de una asistente social y de una psicóloga, según así le había manifestado el Juez. Agregaba que ella va a la Delegación, le preguntan si está todo bien y que los van a visitar, pero que no es así.

Con fecha 13 de mayo ingresa a la Defensoría del Pueblo una presentación que origina el Exp. 4606/04, de una ciudadana de General Roca, tutora de uno de los jóvenes internados en el Hogar pagano quien expresa:

"por razones económicas no puedo viajar, debido al tratamiento que tiene que hacer necesita el apoyo mío y de la familia, está estudiando y a veces por falta de operador no concurre a la escuela. Desde Minoridad y Familia, desde los 8 meses que él está ahí jamás me dieron un pasaje... soy desocupada y otras mamás están en la misma situación..."



IV

Que desde el año 1998 la situación de los jóvenes en conflicto con la ley es objeto de reiteradas presentaciones ante esta Defensoría del Pueblo.

Las mismas han tenido a los jóvenes como protagonistas de hechos delictivos o como sujetos pasivos de la negligencia del sistema en el que se encuentran comprendidos.

Que por otra parte, también el Programa de Libertad Asistida que lleva adelante la Subsecretaría de Promoción Familiar, fue motivo de recepción de quejas. Algunas, provenientes de vecinos - Expte. Nro. 2113/02 - involucraban a jóvenes que estaban bajo este Programa. Otras, de las operadoras comunitarias que tenían a su cargo el seguimiento de los jóvenes - Expte. Nro. 2207/02 - quienes denunciaban las falencias del sistema utilizado para su relación laboral.

La Directora de una Escuela de Adultos, a la que concurrían estos jóvenes, también presentó una queja. Daba cuenta en la presentación, de los efectos negativos que había producido en los chicos, la interrupción del tratamiento que venían realizando los Operadores, en razón de que, por conflictos laborales que tendrían con su organismo empleador, habían dejado de prestar funciones. El Programa había quedado sin continuidad y nadie se hacía cargo de la problemática de estos jóvenes. - Expte. Nro. 1992/02.

Que hechos acaecidos en el Centro de Contención el Maruchito, también fueron motivo de intervención de esta Defensoría del Pueblo. En el mes de julio/03 se iniciaron actuaciones de Oficio bajo el Expte. Nro 3189/03, a raíz de publicaciones en medios periodísticos, que daban cuenta de un motín, fugas y destrozos producidos en la institución.

Asimismo los medios expresaban el malestar de los empleados de la institución, en relación a sus condiciones laborales y a la falta de respuesta de las autoridades provinciales a requerimientos formulados sobre la implementación de talleres para los jóvenes.

Por otra parte representantes de los trabajadores del Maruchito presentaron una queja en este sentido, la que dio origen al Expte. Nro. 4121/04.

V

Que entiendo oportuno traer a la presente, la sentencia de la Cámara II en lo Criminal de la ciudad de San Carlos de Bariloche, reproducida en nota por el diario El Cordillerano con fecha 29/03/04 en relación a un joven internado en el Hogar Convivir de esa ciudad en la que se lee:

"El magistrado (Juez Lanfranchi) remarcó que "queda pendiente el ofrecimiento desde el Poder Ejecutivo Provincial de una estrategia adecuada que garantice la seguridad del enjuiciado y la población en general que, como resultante de las condiciones del servicio en que se encuentra la dependencia de Promoción Familiar, se mantiene en plena crisis". "Crisis que como adelanté no es exclusiva de la situación del menor en esta causa sino a los que se alojan en el mismo sitio y los que sistemáticamente requieren de una internación para la que no se aporta infraestructura elemental, de lo cual dan cuenta los informes referidos, relacionados tanto con lo estructural, como aproximando opinión circunstanciada sobre falencias de coyuntura...Finalmente, en lo que terminó resultando lo más significativo del fallo en cuestión el Tribunal dispuso intimar "al Ministerio de Familia -del que dependen Secretaría de Familia y Subsecretaría de Promoción Familiar- para que disponga en lo inmediato los recursos imprescindibles, para posibilitar efectivo tratamiento tutelar..."

VI

Que con fecha 4 de mayo/04, se recepciona una amplia nota informativa por parte del Ministerio de la Familia, en respuesta al pedido de informe que se le formulara, en el marco de las actuaciones citadas en el epígrafe. El mismo detalla los Centros existentes para tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley, la cantidad de chicos internados y describe la modalidad de ingreso y la metodología del Programa.

En cuanto a las Instituciones, objeto de cuestionamiento, dicho informe expresa:

"...Resulta prudente aclarar que a partir del 30 /04 del corriente, en el Hogar Pagano se redefinió la situación estructural y las estrategias de intervención para lo cual se conformó un nuevo equipo técnico interdisciplinario compuesto por el

Director de la Institución, psicólogo, profesor de educación física, trabajador social y abogado.

Además se está trabajando en distintos tipos de actividades, carpintería, y pinturería, como así también en aspectos edilicios para mejorar la calidad del establecimiento..."

Agrega que: "... En el caso del Hogar Convivir de San Carlos de Bariloche se están evaluando el traslado de los jóvenes a otro espacio a fin de mejorar la calidad del centro donde se encuentran alojados en la actualidad..."

VII

Que a la luz de la Convención por los Derechos del Niño, nuestro país adhirió al nuevo Paradigma de Protección Integral de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta Defensoría por su parte, recepta esta concepción, en toda intervención que tenga a los chicos como parte.

Que dicha Protección Integral, reconoce en el niño a un Sujeto de Derechos haciendo hincapié en programas de protección, promoción y asistencia socio-educativa al joven y a su familia.

Que en Resolución N° 1333/02, de fecha 29 de noviembre de 2002, este organismo se expidió sosteniendo "esta Defensoría desea dejar sentado su criterio en relación a los lineamientos que debe seguir el proceso judicial que incluya a los niños y jóvenes con dificultades con la ley de manera de contribuir, desde la toma de una posición determinada, a que se establezca en la provincia de Río Negro el régimen especial en relación a la Justicia de los chicos.

En dicha Resolución se sustenta esta posición tomando como fuente y como norte, de todo accionar que comprenda a los jóvenes en conflicto con la ley, las **Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad**.

Que así, "La Asamblea General "...Afirma que la reclusión de un menor en un establecimiento debe ser siempre una medida de último recurso y por el mínimo período necesario; Reconoce que, debido a su gran vulnerabilidad, los menores privados de libertad requieren especial atención y protección y que deberán garantizarse sus derechos y bienestar durante el período en que estén privados de su libertad y con posterioridad a él..."

Sostiene además que "El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales".

Que no podemos dejar de transcribir además, lo que en la citada Resolución se señala "Que esta Defensoría consciente de la necesidad de la inclusión de los niños y jóvenes en políticas sociales que contemplen el amparo de sus derechos como así también la prevención de su incursión en acciones tipificadas como delictivas, cree conveniente seguir los lineamientos de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), quien en sus principios fundamentales establece:

1. *La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden desarrollar actitudes no criminógenas.*

2. *Para prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda sociedad procure un desarrollo armónico de los adolescentes, y respete.*

Que además las Directrices establecen y cultive su personalidad a partir de la primera infancia.

"Ningún niño o joven deberá ser objeto de medidas de corrección o castigo severos o degradantes en el hogar, en la escuela ni en ninguna otra institución".

Que no estaría mal que todos estuviésemos enterados que en esta Patria nuestra, lacerada por la pobreza, desolada por el desempleo, no son precisamente estos pibes, sin voz y sin derecho a un futuro, los responsables de la tragedia y de la inseguridad.

Que no estaría mal tampoco mirar cómo los destinatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, nacida para alimentar y arropar al retoño humano, son chicos en la intemperie que caminan por las calles desnudos y a veces sin piedad, por que le es negada toda caricia, toda felicidad, todo talento, toda belleza, toda mano.



VIII

Que en vista a los motivos expuestos y considerando el estado de situación descrito en la presente y que afecta a los jóvenes en conflicto con la ley, como así también a los ciudadanos que son víctima de sus hechos delictivos corresponde RECOMENDAR al Señor Ministro de la Familia que arbitre las acciones que conduzcan al cumplimiento real y efectivo de las Convenciones, Leyes y Programas vigentes, destinados a los Jóvenes en Conflicto con la Ley.

IX

Que asimismo se remite copia de la presente Resolución al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, a los Juzgados intervinientes en las causas de los jóvenes internados en los Centros de Alta Contención y a las Asesoras de Menores de las respectivas jurisdicciones.

Que por otra parte también se remite copia de la presente a la Comisión Legislativa de Análisis y Reforma de la Ley 3097- Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como aporte a su trabajo, y en la seguridad de que su pronto tratamiento fortalecerá la acción de gobierno.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO

DE LA PROVINCIA RÍO NEGRO

RESUELVE:

PRIMERO: Notificar al Señor Ministro de la Familia la RECOMENDACIÓN formulada en el Considerando VIII de la presente Resolución.

SEGUNDO: Remitir copia de la presente Resolución al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, a los Juzgados intervinientes en las causas de los jóvenes internados en los Centros de Alta Contención y a las Asesorías de Menores de las respectivas jurisdicciones, como así también a la Comisión Legislativa de Análisis y Reforma de la Ley 3097- Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

El 16 de junio de 2004 se lleva acabo una reunión convocada por el Superior Tribunal de Justicia, "El derecho Penal del menor, una justicia restaurativa para los menores de edad" en la que estuvieron presentes integrantes del Ministerio de Familia, del Ministerio de Gobierno, Jueces de Primera Instancia y el Director del Pagano. En la misma se consensúa:

- 1) la necesidad de revisar el plexo normativo de la legislación vigente con participación de todos los operadores y principalmente los legisladores provinciales.
- 2) Relevamiento del estado de todos los establecimientos públicos y privados, en territorio de la provincia o fuera de el, que estén prestando o en aptitud de prestar servicios.
- 3) Profundizar el convenio con la UEP, a los efectos que el mismo sea abarcativo a los requerimientos de los Jueces de instrucción.
- 4) Instar a los titulares del Ministerio de Salud y del Consejo de Educación Provincial de Educación una más activa y univoca participación en la implementación del convenio interpoderes del 13 de abril de 2003.
- 5) Propiciar que el nuevo Secretario de Estado de Seguridad, conjuntamente con la Secretaría de Estado de Familia se avoquen al diseño y el tratamiento conjunto de políticas activas en cuanto a la contención de los menores en conflicto con la ley penal y a la prevención en la población juvenil e infantil. Se incluye en esa tarea al Ministerio de Salud y al Consejo Provincial de Educación, y a través de las UEL a los respectivos

Municipios.

6) Elaborar en la Secretaría de estado de Familia una base de datos sobre cada uno de los menores en situación de conflicto con la ley penal, a disposición de la Secretaría de estado de Seguridad y el Poder Judicial.

Que posteriormente, con fecha 22 de julio, se recepcionó en este organismo la respuesta del Ministerio de Familia que da cuenta de las acciones que ese Ministerio llevará adelante a fin de garantizar la no vulneración de derechos de los jóvenes.

En lo sustancial señala:

*Que se contrataron los servicios de una cocinera, un trabajador social, y un profesor de educación física.

*Que se contrató un arquitecto para que determine las reparaciones e instalaciones que requiere el Hogar para su funcionamiento.

*Que el instituto cuenta con dos choferes para los traslados de los jóvenes.

*Que se contrató un profesional psicólogo para que forme parte del equipo del Hogar a fin de que elabore una descripción aproximada del perfil psicológico de cada joven.

*Que se creó un Reglamento de normas y pautas de convivencia que deben cumplir todos los jóvenes desde su ingreso a la Institución. Asimismo deberes y obligaciones comunes para todo el personal. Se explica el método de designación del personal, y la contratación mediante becas de capacitación en servicio e investigación dispuesta por decreto 1063/97 modif. por decreto 1189, entre los que se podrá seleccionar el personal necesario incorporar a la planta permanente del organismo, mediante la contratación bajo la modalidad de locación de servicios.

A su vez se señala que se acordaron encuentros con el Consejo Nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes a fin de concretar lineamientos de abordaje de la temática.

El Hogar Convivir- San Carlos de Bariloche

En el viaje en comisión de servicios realizado a la ciudad de Bariloche se concurrió al Hogar Convivir que aloja a jóvenes bajo Programa tomando conocimiento de las necesidades de los jóvenes como así también de los operadores que los asisten y de su Director. Dicha actuación de oficio dio lugar a la Resolución N°1411/04, en la que se decidió correr traslado al Ministerio de Familia solicitándole la remisión de un informe acerca de la situación de esta institución. Al momento de cierre de este informe la Subsecretaría de Promoción Familiar solicitó prórroga para la entrega de dicho informe. Se transcribe la mencionada Resolución en la que está incluida el Acta Informativa Interna de la visita realizada al Hogar Convivir.

RESOLUCIÓN N° 1411.04

Viedma, 31 de octubre de 2004.-

VISTO: El Expediente N° 5512/04 caratulado "Defensoría del Pueblo S/ situación del Hogar Convivir", y

CONSIDERANDO:

I

Que en Comisión de Servicios a la ciudad de San Carlos de Bariloche y, en el marco de las atri-



buciones y funciones asignadas a esta Defensoría del Pueblo por la Ley 2756, se constituye en el Hogar Convivir. De la visita efectuada, del contacto mantenido con los jóvenes allí ubicados y con el personal, se observan falencias importantes que se informan en el Acta que da lugar al inicio de la presente actuación de oficio.

Que en la citada Acta, se lee:

**...En dicha visita hemos tomado conocimiento de las necesidades de los jóvenes como así también hemos escuchado a los operadores que los asisten y a su Director.*

** En el inmueble se alojan seis chicos, todos alcanzaron los 18 años, salvo uno de ellos que tiene 16. Concurren al Colegio, dos de ellos a la Escuela de Oficio, Uno de ellos no concurre a la escuela, pero asiste a talleres.*

** Realizan actividades en un Centro de Día (ubicado en el ex Hogar Gutierrez) en el que les enseñan tapicería, panadería, carpintería, y computación.*

** La alimentación que reciben se compone de alimentos frescos y pre elaborados. Los mismos son preparados por una cocinera que concurre de lunes a viernes. Sábados y domingos cocinan los operadores. Sostienen la necesidad de que los alimentos lleguen regularmente los días lunes y que sea en cantidad suficiente para cada día de la semana.*

** Cuentan con 11 operadores que trabajan dos por turnos rotativos de ocho hs. Su remuneración se estableció en becas de \$400 y algunos de ellos tienen contratos que ascienden a \$ 520 (básico de \$280, + tickets alimentarios + aportes jubilatorios). Estos son por un año. Los operadores no reciben capacitación específica. Comienzan cumpliendo pasantía de quince días en el lugar, en la que toman conocimiento de la situación de los jóvenes. Luego firman por una beca de capacitación por tres meses. La que se vienen prorrogando tácitamente sin concretar la contratación que les habían prometido. El Director gana \$850, con dedicación full time, y un contrato de duración de un año..".*

** El inmueble, está ubicado en el Barrio Ayelen, casi en la esquina de las calles Frei y 2 de Agosto, Casa N° 17. Es un departamento con poco mobiliario. En la parte superior se encuentran tres habitaciones y un baño. El techo de éste está roto. Una de las habitaciones no tiene ventana, por lo que no está siendo utilizada. Si bien todas las habitaciones presentan un orden considerable dado por los chicos, las paredes de todas ellas tienen diferentes inscripciones pintadas y los chicos manifestaron su deseo de querer que el inmueble presente un aspecto más prolijo. Incluso dijeron que esto beneficiaría el aspecto externo de la casa y su relación con los vecinos.*

También han tenido problemas con la electricidad de la casa, ya que hubo descargas eléctricas. Necesitan que un plomero realice arreglos. Los postigos de las ventanas se encuentran destruidos.

Por nota elevada el 24 de septiembre informaron a Promoción Familiar de las reparaciones que se debían realizar en el inmueble. Aún no recibieron respuesta.

El frío de la zona y los desperfectos que presenta la casa hacen difícil la habitabilidad en la misma.

Existía la posibilidad de trasladarse a otro inmueble, en mejores condiciones de habitabilidad para los chicos, pero sostuvieron que las autoridades no se comprometen para concretarlo.

** No cuentan con un teléfono para las llamadas de urgencia.*

** La Delegación de Promoción Familiar cuenta con un solo transporte para todas las actividades a su cargo. Esto dificulta dar respuesta a las urgencias que se presentan en relación con los jóvenes ya que cada Programa cuenta con horarios de uso previamente estipulados.*

** Los jóvenes manifestaron la necesidad de recibir información acerca del estado de sus causas....*

** Solicitaron útiles escolares.*

** Tienen una psicóloga que asiste al grupo, pero necesitarían tratamiento personalizado y con periodicidad.*

** Los directivos expresaron las dificultades a que se enfrentan ante el Poder Judicial por la falta de un Programa responsable en la situación de los jóvenes en conflicto con la ley".*

Que ante el malestar manifestado por los jóvenes por la falta de recursos para pintar la casa que habitan la Defensora del Pueblo Adjunta se comunicó con la Subsecretaría de Desarrollo Social desde donde se sostuvo que en una partida especial para la Delegación de Promoción Familiar Zona Andina, se dispondría de dinero para la compra de pintura y todo otro material necesario para el mejoramiento del inmueble. Que ésto se efectuaría en el mes de diciembre.

Que asimismo se remitió nota a la Directora General de Promoción Familiar poniendo en su conocimiento el requerimiento de los jóvenes.

II

Que en el tema que nos ocupa, es oportuno reseñar que con fecha 5 de agosto esta



Defensoría inició actuaciones de oficio ante información periodística que daba cuenta de la falta de recursos en que se encontraría la Delegación de Promoción Familiar Zona Andina (Exp.4963/04 "Defensoría del pueblo s/ situación de Delegación Promoción Familiar Zona Andina"). En tal oportunidad se dictó la Resolución N° 964.04 y se elevó nota al Ministerio de la Familia solicitando informes en relación a la situación de dicha Delegación.

En dicha Resolución se incorporó como aporte importante las manifestaciones formuladas por diferentes operadores en el trabajo con jóvenes en conflicto con la ley. En la misma se lee: "Que con fecha 10 de agosto se llevó a cabo la Jornada sobre Jóvenes en Vulnerabilidad Socio Penal organizado por el Ministerio de Familia conjuntamente con el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. De la misma participaron diferentes referentes sociales afectados al trabajo con jóvenes con esta problemática entre los que se encontraba personal de la Delegación Zona Andina. Los mismos dieron cuenta de las dificultades con las que se enfrentan para brindar adecuada asistencia a los jóvenes en conflicto dada la falta de recursos materiales con los que cuentan, falta de personal, magros ingresos, precaria infraestructura edilicia, etc. (Acta Informativa Interna Fs.2)".

III

Que conforme prescribe el artículo 17° de la Ley N° 2.756, "presentada la denuncia, el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester..."-

Que del análisis preliminar de la queja que corre agregada a fs. 01 y anexas, surge que se plantean cuestiones que se encuentran comprendidas en el ámbito de competencias de esta Institución (artículo 9° y concordantes de la Ley citada).-

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :

PRIMERO: Avocarse al conocimiento del caso planteado en la presentación obrante a fs. 01 y anexas.

SEGUNDO: Correr traslado al Ministerio de la Familia solicitando la remisión de un Informe en relación a la situación del Hogar Convivir de S. C. de Bariloche (Art. 17° Ley 2.756).

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

APRECIACIONES FINALES

Compleja realidad la de los jóvenes en conflicto con la ley, como así compleja la realidad institucional de quien debe definir y orientar una respuesta.

Fue un año caracterizado por una sucesión de errores.

Las fallas observadas no fueron cometidas por desconocimiento, por no saber qué hacer, por carecer de un Programa. Muy por el contrario, se contaba con un programa y, las formulaciones teóricas y escritas emanadas del área responsable, indicaban un acabado conocimiento del tema y una posición humana y progresista en todo abordaje para su tratamiento.

Pero en la realidad, el Programa y estas concepciones estuvieron ausentes y, por el contrario, los hechos indicaban un gran divorcio entre la teoría y la práctica.

Práctica, que estuvo signada por la improvisación y, las improvisaciones en esta materia, tienen un alto costo humano que pagan, especialmente los chicos bajo tratamiento y el personal afectado para la atención directa.



JÓVENES EN BUSCA DE OPORTUNIDADES LABORALES

Se recepcionó la presentación de un grupo de jóvenes manifestando su necesidad de oportunidades laborales.

En la misma se lee "...Nosotros somos un grupo de jóvenes que decidimos juntarnos y salir de esta difícil situación que estamos viviendo sin trabajo, con una familia que mantener, algunos con la imposibilidad de seguir estudiando y en la desesperación que tenemos decidimos pedirle ayuda para seguir adelante y llevar una vida digna y no tirarnos a la delincuencia porque ya no nos queda otra salida por eso pedimos que alguien nos escuche y nos ayuden a pensar que todavía hay una esperanza de una vida mejor por eso le pedimos una ayuda económica urgente nosotros le podemos devolver con trabajo comunitario".

A partir de la misma, y habiendo tomado conocimiento que la DINAJU (Dirección Nacional de la Juventud), en el marco del Plan INCLUIR y a través de la Subsecretaría Social de Cooperativas, otorga fondos a cooperativas juveniles se orientó a los jóvenes a concurrir a esa sede. También se estableció contacto con el Municipio de la localidad.

Cabe destacar que los jóvenes han peregrinado por oficinas, han hablado con varios funcionarios y han debido sortear más de un obstáculo. Más de una vez han sentido que no podrían concretar la formación de su cooperativa.

Ya transcurrió casi un año de aquella presentación y les han dicho que dentro de tres meses verán concretado el proyecto. Del grupo de quince jóvenes solo quedan cinco.

CHICOS EN SITUACIÓN DE CALLE

Integrantes de una Fundación que nucleaba a niños y adolescentes en situación de calle, denunciaron en este organismo al Consejo de Administración de la misma, por diversas irregularidades. Esta presentación dio lugar al inicio de las actuaciones que se registraron bajo el Nro. 4021.04

En el marco de su tratamiento se requirió la intervención del Ministerio de la Familia, de la Subsecretaría de Trabajo y de Personería Jurídica, solicitando a cada organismo la investigación en relación a sus competencias con la remisión posterior de un informe.

Recibidos los mismos, se observó que se confirmaba las irregularidades referidas por los reclamantes, quienes con posterioridad, iniciaron acciones judiciales y se remitieron las actuaciones al Juzgado interviniente.

En el tratamiento de esta actuación se dictó la **RESOLUCIÓN Nro. 1715/04** que se transcribe a continuación.

Viedma, 26 de diciembre de 2003.-

VISTO: el expediente N° 4021 caratulado "C. L. del D. y otros s/ situación Fundación N.", y

CONSIDERANDO:

I

Que a Fs. 1 realizan su presentación ciudadanos de la ciudad de General Roca, quienes solicitan la intervención de la Defensora del Pueblo para mediar en su situación.

Los ciudadanos sucintamente manifiestan:

"...Este Proyecto surgió hace ocho años con el fin de dar respuesta a la problemática que atraviesan niños y adolescentes en situación de calle. Nos sumamos al mismo, comprometiéndonos frente a una realidad que nos duele, sumando nuestro esfuerzo para, junto a cada uno de los chicos, emprender la búsqueda de alternativas posibles, que rompan con la situación de injusticia, exclusión y soledad a la que este sistema los condena.

El proyecto cuenta con una casa Refugio, ubicada en... Aquí trabajan 6 educadores que cumplen turnos de 8 horas. Viven allí 4 chicos y durante el día asisten alrededor de 20. Dos operadores desarrollan un trabajo de calle en el que se asisten aproximadamente 50 chicos. El actual equipo técnico se formó hace 8 meses y está compuesto por dos asistentes sociales.

El proyecto también cuenta con una Panadería, ubicada en ...y está administrada por un encargado. Trabajan allí 7 chicos, algunos egresados de la Casa Refugio.

Entendemos que el actual Consejo de Administración de la Fundación N. desarrolla acciones que no se ajustan con el espíritu del proyecto al cual nos sumamos.

Desde hace algún tiempo padecemos diferentes obstáculos impuestos por el Consejo de Administración en nuestro trabajo con los chicos:

- Existe una desvalorización de la tarea que educadores, operadores de calle y equipo técnico llevan adelante con los chicos y sus familiares por parte del Consejo. Obstaculizan el sostenimiento del vínculo familiar de los chicos con el equipo de trabajo".

- "...Negación de recursos para las actividades planificadas".

- "...El objetivo comercial de la panadería N., no se corresponden con la propuesta pedagógica del proyecto y es prueba de esto la precarización en los contratos de trabajo con los cuales se toma a los chicos".

"...Muestra de la metodología de amedrentamiento adoptada por el Consejo, es el reciente despido de las asistentes sociales y de dos de los chicos en la panadería, para los cuales fue creado este proyecto..."

II

Que conforme prescribe el art. 17 de la Ley 2.756, *"presentada la denuncia el Defensor del Pueblo resolverá sobre su avocación al caso, iniciando las investigaciones que correspondiere y haciendo lugar a los traslados que fuere menester..."*.

Que del análisis preliminar de la queja que corre agregada a fs. 01, surge que se plantean cuestiones que se encuentran comprendidas en el ámbito de competencia de esta Institución (art. 9, y concordantes de la Ley citada).

III

Que siendo así, esta Defensoría entiende que debe correr traslado a Personería Jurídica de la Provincia de Río Negro, con el fin de solicitar informe respecto de:

* si consta, en registro de ese organismo de contralor, modificación del objeto social de la Fundación N. Y en su caso si el mismo fue aprobado por ese organismo.

* Si fueron presentados los correspondientes inventarios, balances y estado de resultados.

* Si convocó en alguna oportunidad al consejo de administración. En su caso explicita los motivos.

Que por su parte se solicita al Ministerio de la Familia, informe:

* Si a través del Programa Fortalecimiento Familiar se ha realizado trabajo conjunto con dicha Fundación.

* Si se le ha hecho entrega de subsidio alguno.

Que también se solicita de la Subsecretaría de Trabajo informe si existe convenio laboral, en la Delegación de esa repartición en Gral. Roca, con la Fundación.

Por ello:



LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE RIO NEGRO
R E S U E L V E :

PRIMERO: Avocarse al conocimiento del caso planteado en la presentación obrante a fs. 01 y s.s.-
SEGUNDO: Correr traslado de la presente Resolución a Personería Jurídica de Río Negro, al Ministerio de la Familia, y a la Subsecretaría de Trabajo, con el correspondiente pedido de remisión de informe, según lo establecido en el considerando II.
TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

ABUSO SEXUAL INFANTIL

Durante el presente periodo de gestión se recibieron las presentaciones de dos madres que daban cuenta de que sus hijas habían sido víctimas de abuso sexual infantil. Una de ellas sostenía que la niña había sido sometida por su maestro. El agresor recibió sentencia de sobreesimimiento, siendo notificada de la misma por su abogado patrocinante mucho tiempo después.

Ante la impotencia de no haber podido probar los hechos en sede judicial y de haber sido notificados tardíamente, se presentó en este organismo para solicitar orientación. Así se la acompañó al Juzgado interviniente para que tomara vista del expediente y por medio de la Res. 382/04 se resuelve correr traslado de las actuaciones al Consejo Provincial de Educación para su consideración solicitando la remisión de un informe.

En respuesta la Directora de Asuntos Legales del mismo señala que habiéndosele iniciado sumario Pedagógico y siendo separado transitoriamente de su cargo la Junta de Disciplina Docente resolvió declarar al maestro exento de responsabilidad en el hecho que se le imputara, fundamentando su decisión en la investigación sumarial practicada y en la sentencia judicial dictada. (Res.382/04)

Otra de las situaciones tuvo como protagonistas a dos niñas que fueron abusadas sexualmente por su padre. La madre acude a este organismo solicitando intervención en la causa, y preocupada por la salud psico ffsica de las mismas.

Esta presentación dio lugar al dictado de la Resolución N°1377/04,. Mediante la misma se plantea a la Comisión de Asuntos Legislativos de la Legislatura de la Provincia, la consideración de la reforma del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de que se contemplen los recaudos necesarios para la no revictimización de los niños que han sido abusados sexualmente y deben comparecer en la sede de los Juzgados.

Asimismo se solicita al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Salud la implementación de Programas que asistan a los niños víctimas de este tipo de delitos.

Al cierre de este informe se recibió nuevo requerimiento de la madre de las niñas quien manifiesta que sus hijas han sido sometidas a nuevas pericias por parte del Juzgado.

La misma manifiesta:"..." *...A pesar de que las nenas tuvieron casi 8 entrevistas con la psicóloga forense, fueron entrevistadas por la Asesora de Menores y les han tomado declaración, este Dr...puso el gancho para que la defensa las someta a nueva pericia de parte!!!esto ocasionó en las nenas una reacción sumamente adversa, levantaron temperatura, hicieron una amigdalitis, faltaron a clases 10*

días,...desde ya que no fueron a la pericia solicitada, presenté mi descargo legal y quedó ahora a resolver si se las llama a resolver o no!!

"NECESITO QUE SE HAGAN VALER LOS DERECHOS DEL NIÑO".

De esta forma se estableció comunicación con la Cámara de Apelaciones interviniente, quienes informaron que aún el juez no ha tomado resolución acerca de la petición de la ciudadana. Por otro lado se intentó mantener contacto con el Procurador General pero el mismo se encontraba en viaje.

Resolución 1377/04 DPRN

VISTOS: el Expedientes 4388/04, del registro de esta Defensoría del Pueblo y:

CONSIDERANDO:

I

Que a Fs. 01 se presenta una ciudadana con domicilio en San Carlos de Bariloche quien solicita la intervención de la Defensora del Pueblo en la causa que se encuentra tramitando en esa circunscripción judicial.

Que en su presentación la promotora de las presentes actuaciones denuncia al padre de sus hijas en una causa de presunto abuso sexual hacia las niñas y manifiesta una gran angustia ante la situación que se encuentran viviendo. Refiere también preocupación hacia el tratamiento dado en sede judicial a su denuncia ya que habiendo pedido en sede civil una Medida Cautelar, suspensión de Régimen de visitas y prohibición de que el padre retire a las niñas del colegio, la misma se demoró 20 días. Por otra parte sostiene "Actualmente son asistidas por la Dra... terapeuta privada quien me apoya en este difícil momento, pero todo es pago! El Estado no tiene ni contención para estos casos ni personal disponible!!..."

Que la presentación de la ciudadana guarda identidad con los expedientes N° 742/02, 1554/02, 3527/03, 3888/03, 3923/03, 3924/03, tramitados en esta Defensoría.

Que los mismos solicitan la intervención de la Defensora del Pueblo en las causas de abuso sexual infantil que se encuentran tramitando en sede judicial.

Que las dificultades de la prueba en este tipo de delitos hace que el porcentaje de causas que llegan a obtener sentencias condenatorias de los signados como autores sea relativamente baja.

Que todas las presentaciones tienen el común denominador de reflejar la desesperación, y frustración de los familiares de las víctimas por la impunidad de los autores criticando el accionar de la Justicia.

Que ante la gravedad de los hechos denunciados y la angustia de los presentantes, en la mayoría de los casos se mantuvo comunicación con los mismos asesorándolos acerca de las vías idóneas para efectivizar su reclamo y recibir asistencia psicológica.

Que por otra parte se estableció también comunicación con los fiscales intervinientes en la causas para brindar información a los ciudadanos interesados en la marcha del proceso judicial.

II

Que la temática que nos ocupa nos obliga a reflexionar acerca del tratamiento especial que deben recibir los niños que han sido víctima de este tipo de delitos.

Así iniciado el proceso judicial, y aún cuando se procuren adoptar los máximos recaudos, los niños padecen nuevas victimizaciones. El niño enfrenta situaciones angustiantes al momento de narrar los hechos de los que fuera víctima, se lo obliga a sentarse frente a personal sumariante, a la Asesora de Menores, a un juez, en la etapa de instrucción, o a tres jueces, durante la etapa de debate, y sin tapujos debe describir con detalles los actos de sometimiento de los que fuera víctima. Por su parte las largas esperas en los pasillos de los juzgados, o cédulas diligenciadas a su nombre y llevadas a su domicilio por personal de la policía, se cuentan entre otras de las formas que causan nuevos padecimientos.

La falta de profesionales con formación en la materia y de Programas que presten asistencia adecuada a los niños atenta contra su derecho a recibir adecuada protección por parte del Estado. La Provincia de Río Negro solo cuenta con Programas de asistencia psicológica especializada a los niños

víctimas de abuso sexual en las Delegaciones de Derechos Humanos en Viedma, y S.C. de Bariloche, quedando así desprotegidos quienes viven alejados de estos centros urbanos.

Por otra parte, y según averiguaciones efectuadas desde esta Defensoría (Acta Interna fs. 8) en los Hospitales tampoco se cuenta con personal afectado a la asistencia de niños víctimas, siendo atendidos por profesionales de Salud Mental. Estando a la espera de informe del relevamiento provincial por parte del Programa de Violencia Familiar dependiente del Ministerio de Salud Pública.

III

Que es misión de la Defensoría del Pueblo actuar, en el marco de sus atribuciones, en la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Provincial (art. 167 de la Constitución Provincial), y la ley 2756 que reglamente el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo define el ámbito de tal actuación.

Que no es función de esta institución suplir la actividad jurisdiccional, sin embargo, es competencia de la Defensoría del Pueblo, expedirse en relación a las situaciones traídas a su conocimiento que tienen como protagonistas a los niños, en cumplimiento de la función tutelar de los derechos de los mismos.

El objetivo Primario de toda intervención en la que se encuentren involucrados niños es la Protección Integral de los mismos. La Convención sobre los derechos del Niño establece la protección integral como principio rector. Al mismo no puede sustraérsele ningún órgano o dependencia del Estado, y debe además ser tenido en cuenta en todas las medidas que se dispongan respecto de los niños

Que la situación puesta en conocimiento de esta Defensoría permite reflexionar acerca del delito de abuso Sexual Infantil en nuestra sociedad y el tratamiento dado por los diferentes actores de la misma.

El Abuso Sexual Infantil es definido por la Asociación de Asistencia al Niño Abusado, A.N.A, como "todo acto de índole sexual que ejerce, desde una relación de poder, un mayor sobre un menor para su propia gratificación sexual. El abuso puede ser en forma ocasional o repetitiva. Son actos de índole sexual: exhibicionismo, manoseos, tocamiento, exposición o realización de videos o fotografías pornográficas, prostitución, hasta el coito y/o violación. La persona abusadora puede ser femenina o masculina, no siempre es un adulto, ya que existen agresores sexuales que no han alcanzado la mayoría de edad".

Según datos de la misma Asociación las víctimas pertenecen al sexo femenino mayoritariamente, un 75% de niñas y 25% varones.

Se denuncian más casos de abusos extra-familiares, pero el 80% es cometido por integrantes de la familia. Si bien la palabra del niño es el principal indicador de la perpetración del delito, existen indicadores emocionales y físicos en los mismos que muestran signos y síntomas que ponen en evidencia las consecuencias traumáticas que deja en los niños este tipo de delitos.

El delito de abuso sexual no sólo tiene repercusiones físicas sino también psicológicas. Los daños producidos crean fobias, temores y psicosis varias y traen consecuencias mediatas y a largo plazo.

A corto y mediano plazo se pueden manifestar desde sentimientos de culpabilidad, desequilibrios emocionales, distorsiones del autoestima y problemas de conducta hasta baja en el rendimiento escolar, depresión, violencia, etc.

IV

Que la intervención judicial es de vital importancia. *"Para el niño victimizado, la intervención legal- cuando se realiza adecuadamente- ofrece una posibilidad de reparación por lo que ha sufrido. Si bien se trata de un proceso sumamente doloroso y, en cierto sentido complicado-ya que con frecuencia no avanza de manera lineal- es un elemento más para que las víctimas puedan iniciar el proceso de elaboración del duelo por las certezas familiares perdidas, que no recuperarán jamás".* (Irene V. Intebi, Abuso Sexual Infantil, En las mejores familias. Pág. 293).

Que "se produce una nueva revictimización cuando una niña que ha sufrido abuso es sometida a algún tipo de práctica o circunstancias por parte de quienes intervienen en el caso que le causan nuevo sufrimiento. Este fenómeno, llamado también por otros autores "doble victimización", puede derivar de una acción o bien de una omisión de quien debe actuar y no lo hace, o lo hace inadecuadamente." (Rozanski, Carlos Alberto, Abuso Sexual Infantil. ¿Denunciar o Silenciar?, Ediciones B, Bs. As., 2003, pág. 111).

Cabe reseñar, por su adecuación en la situación que nos ocupa, la **Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder**, adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985. La misma establece en su art. 6: *"Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: ...inciso c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial...inciso d): Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia"*.

Que por su parte El "FORO PATAGONICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA", sostiene en la "Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia", "Protección de Menores: ... ART 26: *el menor de edad tiene derecho a que su comparecencia ante los órganos judiciales tenga lugar de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo. Para el cumplimiento de este derecho podrán utilizarse elementos técnicos tales como circuitos cerrados de televisión, videoconferencia o similares. Se procurará evitar la reiteración de las comparencias del menor ante los órganos de la Administración de Justicia"*.

Que en un reciente fallo, el Dr. Jorge Bustamante, juez de Cámara en lo Criminal, de la Primera Circunscripción de nuestra Provincia, sostuvo "... la formalidad de escuchar a una víctima de abuso, especialmente una niña, en una audiencia, no siendo interrogada por expertos, implica silenciarla, o crear el ámbito propicio para su retractación que, al decir de doctrinarios, hará finalizar su calvario. No puede obviarse con sopesar la vulnerabilidad y el estado emocional con que llega la víctima de abuso, especialmente si es una criatura, a una audiencia...". (Exp. N°177/172/02).

Que "...señala Intebi: "Desgraciadamente es penoso ver como las víctimas de abuso sexual son revictimizadas en todo el mundo por un sistema que no pone cuidado en que quienes les entrevisten sean profesionales con conocimiento sobre el efecto de las situaciones traumáticas en la memoria, sobre la expresión de las emociones en los niños, sobre psicología evolutiva, y lo más importante, sobre los abusos sexuales" (Carlos Rozansky, Pág. 112,113, op. Citado).-

Que en este sentido el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sancionaron la Ley 25.852, que modifica el Código Procesal Penal Nacional. Que la misma sostiene: *"Artículo 1º: ...Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados en el código Penal, Libro II, Título I, Capítulo II, y su título III, que a la fecha en que se requiera su comparecencia no hayan cumplido los 16 años de edad se seguirá el siguiente procedimiento:*

- a) *los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes;*
- b) *el acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor;*
- c) *en el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arriban;..."*.

Artículo 2º: ...cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 250 bis, que a la fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la recepción del testimonio, requerirá informe de especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 250 bis". (Sancionada el 4 de diciembre de 2003, promulgada el 6 de enero de 2004, (B.O. 8/01/04).

Que en relación a esta norma, el Dr. Gonzalez Da Silva sostiene: "La sanción de la ley 25.852 (3) que incorporó los Arts. 250 bis y 250 ter al libro II, título III, capítulo IV del Código Procesal Penal de la Nación (4) , vino a liquidar de una vez por todas con tales prácticas abusivas a introducir un novedoso procedimiento para obtener del niño su versión de los hechos, sin que en el mismo puedan intervenir en forma directa el tribunal y las partes. Precisamente, a partir de su implementación, las manifestaciones que pueda aportar a una investigación penal un niño víctima de un delito contra la integridad física, psíquica o sexual, únicamente pueden ser recibidas por un psicólogo especialista en niños y adolescentes, sin que aquél, en momento alguno del proceso (desde la prevención o denuncia, hasta el dictado de la sentencia), deba enfrentarse o responder cualquier clase de interrogatorio que directamente pretendan formularle el juez, el fiscal, el imputado, un eventual querellante o sus letrados defensores.

Por su parte, el acto por el cual dicho experto escucha el relato del niño damnificado, si bien debe ser llevado a cabo observando ciertas previsiones instituidas para evitar su ulterior repetición y a su vez garantizar el derecho de defensa en juicio, no guarda las características propias de una declaración testimonial

ni reviste las formalidades de ese medio probatorio en particular (Art. 249 del C.P.P.N.), pues tan sólo constituye una entrevista que además debe llevarse a cabo en un ámbito especialmente acondicionado a ese efecto (la Cámara Gesell) y no en un despacho del órgano instructor, ni mucho menos en la sala de audiencias de un tribunal oral. De todos modos, tanto las partes como la propia agencia judicial que dispone la medida

(fiscalía o tribunal), exclusivamente se encuentran habilitados a seguir sus alternativas desde otro sitio, a través de elementos técnicos destinados al efecto, pudiendo intervenir durante su desarrollo sólo en forma indirecta y a través del psicólogo actuante, quien habrá de canalizar sus inquietudes del modo que considere prudente para garantizar la integridad psíquica del menor.

En consecuencia, la normativa comentada aparece como uno de los avances más significativos que en materia de derechos humanos se han efectivizado en la legislación procesal penal federal contemporánea, por adecuarse su esquema a las prescripciones y exigencias internacionales estipuladas sobre el punto y que lamentablemente han sido introducidas recién ahora, a poco menos de doce años de la implementación del actual ordenamiento procesal penal y a diez de la reforma constitucional del año 1994, cuando la Nación hubo de comprometerse a adoptarlas con anterioridad (5)...".(Gonzalez Da Silva, Gabriel, Regulación de la Recepción del testimonio de los niños en el procedimiento Penal Federal Argentino. Una respuesta a la violencia institucional. Ponencia, I Congreso Internacional de Abuso Sexual Infantil y Paidofilia. Bs. As. Septiembre de 2004.-)

(3)sancionada el 4 de diciembre de 2003, promulgada el 6 de enero de 2004, (B.O. 8/01/04).

(4) Artículo 250 bis: "Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, libro II, título I, capítulo II, y título III, que a la fecha en que se requiriera su comparecencia no hayan cumplido los 16 años de edad se seguirá el siguiente procedimiento: a) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes; b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor; c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arriban; d) A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor. Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado.". Artículo 250 ter: "Cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 250 bis, que a la fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la recepción del testimonio, requerirá informe de especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 250 bis.".

5) Enseña Sagüés que "la internacionalización de los derechos humanos obliga a admitir que ciertos derechos de fuente internacional dejan de ser derechos 'de afuera', o 'de otros', para ser 'derechos de nosotros', derechos a los que somos acreedores y que, además, resultan jurídicamente exigibles ante los tribunales nacionales, y algunas veces, agotados los trámites ante éstos, demandables también ante tribunales supranacionales" (Sagüés, Néstor Pedro, Prólogo de la obra El Pacto de San José de Costa Rica, de Gustavo Esteban Feldman, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, pág. 9).

Fuente: REGULACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DE LOS NIÑOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL ARGENTINO.

Una respuesta a la violencia institucional.

V

Que en el entendimiento que el tratamiento en el ámbito legislativo de la temática planteada contribuiría a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales que son llamados a comparecer en sede judicial, se remite a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura de Río Negro la presente Resolución para que evalúe la procedencia de la modificación del Código de Procedimiento Penal con el fin de garantizar la integridad de las víctimas infantiles.

Que por su parte, existiendo sólo en dos ciudades de la Provincia centros donde se brinda asis-



tencia terapéutica a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, dependiendo los mismos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Relaciones con la Comunidad, y que por su parte en los Hospitales tampoco se cuenta con profesionales afectados al tratamiento de los mismos siendo asistidos por personal de Salud Mental, SE SUGIERE al MINISTERIO DE GOBIERNO y AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICAS se evalúe la viabilidad de instrumentar Programas de atención a los niños víctimas de este tipo de delitos.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E.

PRIMERO: Declarar la falta de competencia de la Defensoría del Pueblo en el reclamo presentado a fs.01 (Art. 16° inc. a. Ley 2756).

SEGUNDO: Derivar las actuaciones a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura de Río Negro la presente Resolución según lo expresado en el Considerando V.

TERCERO: Sugerir al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Salud Pública evalúe la viabilidad de instrumentar Programas de asistencia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual según lo establecido en el Considerando V.

CUARTO: Poner en conocimiento del Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia la presente Resolución.

QUINTO: Comunicar la presente Resolución a los ciudadanos promotores de las actuaciones citadas en el Considerando I.

SEXTO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

Resolución N° 382/04. DPRN.

Viedma, 19 de abril de 2004.-

VISTO: EL Expediente N° 4249/04 caratulado "N.de L., M A, S/ reclama intervención en causa de abuso de niño", y

CONSIDERANDO:

I

Que a fs. 1 realiza su presentación la ciudadana M. N. de L. de la localidad de Guardia Mitre.

Que la misma manifiesta:

"Que me notifique de la sentencia absolutoria recaída en la causa que tramita en Juzgado de Penal de Viedma, por la denuncia que realizara en representación de mi hija, contra un docente que abusó de ella. Que no encuentro los argumentos valederos para tal decisión puesto que existían muchas personas que manifestaron de la conducta reprochable de este maestro en el mismo sentido. Aunque no sé si fueron citados a declarar.

Que actualmente el docente volvió a dictar clases en la misma institución.

Mi hija desde la llegada del mismo comenzó a tener síntomas que son indicadores del malestar que le provoca la presencia de su agresor ...No quiero que este hecho quede impune ya que lo que le ocurrió a mi hija le puede ocurrir a otras niñas de ese mismo colegio".

Que posteriormente se la acompañó al Juzgado Criminal, donde se investigó el delito que denunciara, a tomar vista de la causa. De la misma se pudo constatar que se había dictado sobreseimiento a favor del acusado. Esta tuvo lugar en el mes de noviembre del año anterior.

II

Que evaluada la presentación se observa que se trata de un hecho en el que el Poder Judicial se ha expedido en sentencia de sobreseimiento.

Que teniendo en cuenta que la comunidad en la que reside la niña es un pueblo de pocos habitantes donde la mayoría de sus integrantes se conocen e interactúan a diario.

Que la madre de la niña manifestó acerca de síntomas de los que estaría padeciendo la misma en relación a la proximidad con quien fuera su docente.

Que en el archivo de esta Defensoría consta presentación de una madre cuyo hijo concurre al establecimiento de la hija de la presentante quien habría recibido agresiones por parte del mismo docente denunciado. (Exp. 928/98 C. N. P. S/ denuncia malos tratos hacia su hijo)

Que según Resolución N° 2288/93 del Consejo de Educación, que establece la Reglamentación de los sumarios Docentes, en su Art. 52, De los Sumarios originados por Delito, sostiene: *"La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que pudieran configurar delitos y la aplicación de las sanciones pertinentes en el orden administrativo, serán independientes de la causa criminal, con sujeción a las siguientes normas:*

- a) *Cuando en un sumario administrativo surgiera prueba de haberse cometido un delito que dé nacimiento a la acción pública, se hará la denuncia correspondiente. En caso de hechos que configuren delitos de acción o instancia privada en que intervengan menores, el funcionario del Consejo Provincial de Educación bajo cuyo conocimiento cayera el hecho lo hará saber al representante legal del menor, dando cuenta al Consejo o a la Junta de Disciplina.*
- b) *La resolución absolutoria que se dicte en sede penal no impide la sanción administrativa por el daño causado.*
- c) *En el supuesto del inciso a), y cuando paralelamente a la instrucción del sumario administrativo se sustancia por el mismo hecho una causa criminal, se proseguirá la actuación administrativa, no pudiéndose dictar resolución absolutoria hasta tanto lo resuelto judicialmente pase en autoridad de cosa juzgada".*

Que teniendo en cuenta la mencionada Resolución del Consejo de Educación, y la solicitud de la ciudadana entendemos pertinente correr traslado de las presentes actuaciones para su consideración solicitando la remisión posterior de un informe.

Por ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: avocarse al tratamiento de la presentación obrante a fs. 1y s.s.

SEGUNDO: correr traslado de las presentes actuaciones al Consejo de Educación para su consideración solicitando la remisión posterior de un informe según lo establecido en el Considerando II.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

Otras participaciones en esta materia

La Defensoría del Pueblo participó del 1° Congreso Internacional "Abuso Infantil y Paidofilia"

Este se realizó en la ciudad de Buenos Aires del 8 al 11 de Septiembre.-



Libro III - Informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro